

Reflexiones en tiempos de coronavirus

Luis Armando González

(Coordinador)

Presentación

En una de sus tantas ocurrencias célebres, el P. Ignacio Ellacuría decía que la realidad nacional da qué pensar. Eran de tal envergadura los problemas nacionales y regionales que, para un hombre reflexivo como Ellacuría, el imperativo inevitable en su tiempo se resumía en el referido enunciado. En nuestro tiempo, sigue vigente el imperativo ellacuriano de hacerse cargo de los retos que plantea la realidad: la coyuntura suscitada por el impacto del coronavirus en El Salvador, y en el mundo, da qué pensar, no sólo a los profesionales del conocimiento, sino a cualquier persona sensata y razonable que se esté dispuesta a mirar con honestidad a su alrededor. Todo apunta a que la crisis en la salud pública, debida al impacto del coronavirus, va disminuyendo, aunque siempre está presente la posibilidad de rebrotes que pongan en jaque las mejores expectativas. Entre tanto, las actividades sociales y económicas dan visos de volver, incluso con una virulencia mayor, hacia los cauces previos a la emergencia sanitaria, con un desaforado “sálvense quien pueda”.

El retorno a la “normalidad” carga con un saldo desfavorable en materia socio-económica, con miles de empleos perdidos, deudas familiares impagables y aumento en los niveles de pobreza. En el apartado de las consecuencias de la crisis sanitaria –y de las distintas medidas que se tomaron para contenerla– hay un mar de problemas que requieren un estudio profundo y serio, y para lo cual, ojalá, se conformen equipos de investigación que, con el arsenal científico necesario, elaboren los diagnósticos y explicaciones del mejor calado posible. Pero esos son esfuerzos investigativos de mediano y largo plazo, que no excluyen la reflexión y el análisis inmediato, que deben aportar, si no pistas o elementos para estudios en profundidad, sí ideas para la discusión pública, es decir, para un debate permanente sobre la realidad nacional.

Precisamente a este segundo rubro es que pertenecen los materiales que se recogen en el presente volumen. Se titula “Reflexiones en tiempos de coronavirus”, porque en el mismo se recogen elaboraciones reflexivas sobre diferentes aspectos relacionados con la emergencia suscitada por el coronavirus. En su mayoría, vieron la luz en revistas y periódicos digitales nacionales e internacionales –como el *CoLatino*, *El Diario de Hoy*, *Contrapunto*, *América Latina en Movimiento*, *GatoEncerrado* e *Insurgencia Magisterial*— y se publican, salvo correcciones de redacción menores, tal como lo fueron en su versión original. Asimismo, los diferentes escritos no constituyen (ni tienen la pretensión de ser) estudios concluyentes, sino opiniones, medianamente razonables y sensatas, que expresan las preocupaciones de sus autores en unos momentos de aguda crisis en la salud pública.

Hay una dimensión testimonial inevitable en cada idea u opinión vertida, en tanto que la redacción de los diferentes textos fue realizada en los días, semanas y meses de la emergencia, cubriendo precisamente el periodo que va desde mediados de marzo hasta inicios de septiembre de 2020. Como todo texto elaborado al “calor del combate” la precipitación y las emociones seguramente traicionaron a sus autores; no puede ser para menos cuando la vida cotidiana está afectada por el encierro, alarma colectiva y la afectación de personas conocidas y seres queridos. Pero, aún y con esas tensiones y vivencias, en cada elaboración, en cada argumento e idea, los autores pusimos nuestro mejor empeño por ser sensatos y razonables, evitando dejarnos de llevar por las corrientes de opinión alarmistas y apocalípticas que se apoderaron de distintos espacios de opinión. Elaboramos y propusimos opiniones sobre temas de los que se hablaba poco o nada, o sobre los que nos pareció que debía discutirse con seriedad y no de forma ligera.

La educación, las iglesias, la economía, el medio ambiente, el movimiento laboral, el Estado... sobre estos y otros temas reflexionamos en momentos en los cuales El Salvador, al igual que otras naciones, atravesaba por una grave crisis en su salud pública, en su sociedad y en su economía. Son estas reflexiones las que se recogen en este libro, que

dedicamos, con agradecimiento sincero, al personal del sistema de salud de nuestro país, especialmente a quienes perdieron la vida atendiendo la emergencia sanitaria. Los autores esperamos que este libro sirva de aliciente, tanto en las muestras de acuerdo como en las de desacuerdo que genere, para un debate franco y permanente sobre los distintos problemas de la realidad nacional, muchos de ellos posicionados con una mayor gravedad a partir de la coyuntura de crisis suscitada por el coronavirus.

Por último, los materiales están agrupados en dos partes. En la primera, se recogen textos elaborados por el coordinador del volumen, al igual que reflexiones colectivas realizadas por un equipo informal de análisis que se formó al calor de la emergencia, y que estuvo conformado por Rommel Rodríguez, Óscar Arnulfo González, Carlos Hernández, Lucio Reyes, Cristina Hernández y Luis Armando González. En la segunda, se recogen las contribuciones de un grupo de trabajo liderado por la Red de Investigadores Ambientales de El Salvador (REDIA), siendo estos los profesionales cuyos textos se recogen en este volumen: Daniel Girón, Cristina Elizabeth Hernández, Óscar Arnulfo González, Juan Carlos Calderón Martínez, José Carlos Cardoza, Olivier García, Shaiene Carvalho, José Alfredo Ramírez, Gabriel Chavarría Peccorini, Carlos Gregorio López Bernal y Ariel Quintanilla.

San Salvador, 6 de septiembre de 2020

Introducción

Pensar la realidad nacional

Entre otras muchas cosas que recuerdo del P. Ignacio Ellacuría, primero como estudiante suyo y posteriormente como académico en la UCA, fue esta en la que él insistía una y otra vez: que en esa universidad la asignatura primera y más importante era la realidad nacional. Por supuesto que no era sólo un decir; y es que, en los “tiempos heroicos” de la UCA –como los caracterizó el poeta Francisco Andrés Escobar–, el conjunto de esta institución universitaria estaba en función del análisis y la reflexión sobre la realidad del país, en sus distintas dinámicas estructurales y coyunturales. Además de las publicaciones académicas, entre las cuales la Revista Estudios Centroamericanos (ECA) ocupaba un lugar central, vienen a mi mente dos iniciativas de una envergadura extraordinaria: el Seminario Permanente para el Análisis de la Realidad Nacional y la Cátedra de Realidad Nacional. Los productos del Seminario Permanente y de la Cátedra de Realidad Nacional –que eran recogidos en ECA– dejaron una huella imborrable en mi manera de preocuparme por El Salvador.

La principal enseñanza que me quedó de esas iniciativas –y una de las muchas que me quedaron del P. Ellacuría– es que la realidad nacional salvadoreña –y también la centroamericana y la mundial– debe ser pensada permanentemente, pues sólo de esa manera se pueden explicar sus dinámicas, vislumbrar sus posibles derroteros e intervenir eficazmente la marcha de las cosas.

No se trataba de cualquier manera de pensar, ya que –como enseñó Kant– el pensar, dejado a la libre, puede terminar en las ilusiones, las fantasías y las especulaciones alejadas absolutamente del mundo real. Lo que se debe cultivar es un pensar crítico, riguroso,

sistemático y lógico, que además no pierda de vista los datos de la realidad. O sea, se debe cultivar un pensar que permita conocer lo real y que dé pie a un acervo de conocimientos explicativos y operativos que se conviertan en el patrimonio “cognitivo” de la sociedad.

El arsenal de las ciencias sociales y naturales, y de las filosofías críticas y realistas, es lo que está disponible para emprender esa tarea impostergable de pensar la realidad del universo en su conjunto, pero también realidades específicas de carácter histórico. Este es el caso de la realidad nacional salvadoreña. No creo equivocarme cuando digo que esta fue la visión que tuvo el P. Ellacuría; de todos modos, para quienes creen que lo mío es un delirio, les invito a leer y meditar sobre tres de sus mejores ensayos: “El objeto de la filosofía” (1981), “Función liberadora de la filosofía” (1985) y “Factores endógenos del conflicto centroamericano: crisis económica y desequilibrios sociales” (1986).

Eso que en la UCA heroica se cultivó en tiempos aciagos –a finales de los años 70 y a lo largo de los años 80– debe ser cultivado en estos tiempos caracterizados por otros desafíos y dinámicas complejas de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. Me alegro cuando veo señales de que en la UCA –mi antigua casa de estudios superiores– se sigue cultivando la reflexión crítica y científica sobre la realidad nacional. Sin embargo, creo que esa tarea no es responsabilidad exclusiva de la UCA, ni de nadie en particular, sino de los ciudadanos de El Salvador.

Naturalmente que los sectores intelectuales, científicos, filosóficos, literarios y técnicos, deben (deberían) ser decisivos en la tarea de pensar la realidad nacional. Pero debe evitarse un mal que casi siempre ese hace presente no sólo en nuestro país, sino en otros lados: el de pretender que alguien en particular ha encontrado, por sí sólo, la fórmula para entender y resolver los complejos problemas del país. Es posible que sea cierto, pero sin un debate crítico, informado, serio, formal y sin

restricciones, no habrá manera de probar y comprobar que la fórmula encontrada es la correcta. Y, en ese debate crítico, nadie que pueda aportar una idea o un argumento debe quedar fuera. Quienes quieran informarse de cómo estos esfuerzos se pueden poner en marcha pueden indagar sobre el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz impulsado por Mons. Arturo Rivera Damas.

De momento, creo que es urgente impulsar un Seminario Permanente para el Análisis de la Realidad Nacional. Esta es una inquietud que tengo desde hace varios años, y algunos colegas universitarios me han dicho que la comparten. Quizás la UCA, en alianza con la Universidad Nacional, la Universidad Don Bosco, la Universidad Pedagógica y la Universidad Gerardo Barrios, podría lanzar la iniciativa. Obviamente, aquí deben anteponerse los intereses académicos y del conocimiento de la realidad nacional a criterios de rentabilidad o protagonismos mal entendidos, o de la petulancia que consiste en asumir que se sabe todo o que se es superior. Hay que bajarse del pedestal academicista y tener una dosis de humildad necesaria.

Otra iniciativa que estimo que debe ser apoyada es la crear un observatorio nacional de la opinión pública. Estimo que es a la Universidad Nacional a la que le concierne este esfuerzo, dada la envergadura financiera, técnica y académica del mismo. No una casa encuestadora para analizar preferencias electorales; de eso ya hay bastante e incluso demasiado. Más bien, en centro de estudios que examine la opinión pública sobre todos los (o la mayor parte de) asuntos que afectan a (o tienen que ver con la) sociedad. Hablo de una institución bien establecida, con equipos de investigación especializados; no de algo con un nombre pomposo, pero sin sustancia académica e investigativa. Dondequiera que he hablado de esto, he recibido opiniones favorables... Hay que convertir esas opiniones en realidad. Y ello nos ayudará a pensar mejor la realidad nacional en estos tiempos complejos y llenos de desafíos.

PRIMERA PARTE
REFLEXIONES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Necesidad de cambiar de rumbo

La situación, verdaderamente crítica, generada por el Coronavirus invita a una reflexión sociológica (y ética) acerca de los hábitos sociales-culturales y las concepciones económicas predominantes, pues son ambas las que están siendo desafiadas por la propagación de ese virus y también por las medidas sanitarias que esa propagación exige. Aparte de los aspectos especializados –biológicos y médicos— del fenómeno, lo que es evidente es que el virus se contagia con facilidad pasmosa y que cualquier persona, aunque sea fuerte, joven o no pertenezca a grupos poblacionales en riesgo, puede ser invadida y convertirse en una transmisora del mismo. De esta evidencia, directa y simple, se sigue una consecuencia que choca con los hábitos sociales y culturales y con las concepciones económicas predominantes, cual es que las personas deben quedarse en su casa, reduciendo al mínimo el contacto con terceros.

Comenzando con los hábitos socio-culturales predominantes, han salido a relucir los déficits en valores como la prudencia, el autocontrol e incluso la soledad, lo mismo que lo erosionadas que están las formas de convivencia cercanas, familiares y comunitarias, pero referidas estas últimas al espacio social que rodea el entorno familiar. La masificación consumista, con gente acostumbrada –desde hace unas tres décadas— a realizar una parte de su vida fuera del ámbito familiar-comunitario, ha sido contraproducente a la hora de ponerle freno a un virus que, como se anotó, se propaga con suma facilidad a través del contacto interpersonal.

Insistir en el individualismo privatizador y posesivo, como rasgo cultural y económico de nuestro tiempo, hizo de perder de vista aspectos más sutiles de la cultura (y la economía) actual, como por ejemplo el hecho de que lo privado se ha diluido en lo público-masificado. O sea, lo privado –o lo que se considera tal– es una simulación, pues las personas están volcadas (o expuestas) incluso en sus momentos más íntimos a un público difuso, anónimo y masificado. Los grandes centros comerciales, los complejos turísticos y los parques temáticos son, en lo físico, los espacios en los que las personas realizan su “individualidad”. En el ámbito virtual, lo son las llamadas “redes sociales” que, naturalmente, no colman las ansias de quienes sienten que sin el gregarismo no pueden ser felices. Está tan arraigada, en la conciencia, las emociones y los hábitos de muchas personas esta forma de vivir que la idea de tener que quedarse en casa sonó (y suena) como una gigantesca locura. Gobiernos desbordados por la crisis sanitaria, como el de España, han tenido que emplearse a fondo para obligar a las personas a quedarse en casa.

En cuanto a las concepciones económicas predominantes, fuertemente productivistas, nada más difícil que aceptar que empleados y trabajadores se queden en casa. Lo primero que seguramente asaltó la mente de empresarios, ejecutivos y directores gerenciales fue lo que se perdería en términos de ganancias si la gente dejaba de ir al trabajo. Hicieron caso omiso de la lógica económica más simple que indica que cualesquiera sean los costos que suponga que empleados y trabajadores dejen de laborar (incluso en el caso límite que no hagan nada en casa), mientras dura la crisis, esos costos siempre serán menores que los costos implicados en una propagación masiva del virus, pues a la pérdida de horas laborales de los afectados habrá que sumar los costos médicos para su recuperación y la de las personas contagiadas por ellos.

En algunos países, esta lógica ha terminado por imponerse, ante la arremetida una realidad biológica que no tiene en consideración los

ruegos y sueños de los seres humanos. En otros, está costando tomar decisiones que, desde todo punto de vista, son las que se tienen que tomar. Desde la visión económica establecida, nada más chocante que enviar a alguien a su casa, con su salario garantizado, sabiendo, casi con total certidumbre, que no hará nada productivo para la empresa o institución para la cual labora. Desde esa visión, lo mejor es seguir ejerciendo el control de siempre, en el lugar de trabajo, sobre trabajadores y trabajadores, especialmente si estos no pertenecen a un grupo poblacional en riesgo. Pues bien: esa visión es contraproducente con la dinámica expansiva del Coronavirus. Ya se dijo, pero hay que rematarlo: es un virus que puede ser propagado por cualquier persona, incluso aunque ésta sea joven, sana y fuerte. Y es probable que una persona sana, fuerte y joven no caiga en una situación de salud crítica, pero si entra en contacto con familiares vulnerables –hijos, hijas, padres, abuelos— lo más probable es que los contagie.

Evitar males mayores significa hacer a un lado la visión económica predominante. España e Italia, por lo que indican las noticias al respecto, se han visto forzadas a ello, obligando a las personas que se queden en casa sin más propósito que el de detener la propagación del virus. Consideraciones económicas inmediatas han pasado a segundo plano, poniendo en su lugar una visión de supervivencia humana que es la justificación última de cualquier decisión económica. Y es que ninguna economía es posible, ni tiene sentido, con una población diezmada y agonizante. Esta es una lección que no conviene olvidar en esta crisis suscitada por el Coronavirus.

Pero también, cuando pase la crisis, será bueno que se reflexione acerca de lo desencaminadas que andan nuestras sociedades, nuestra cultura y nuestra economía. El consumismo masificado y el productivismo economicista no deberían ser identificados con la felicidad plena. Son parte del mundo actual y abren posibilidades de realización a las personas, pero deben ser controlados por los Estados y

las sociedades, pues si están desbocados atentan contra la felicidad y el bienestar más cercanos a lo vital, como lo son la salud, la alimentación, el sueño y las relaciones cara a cara con quienes no son cercanos. Que es posible un cambio de rumbo, en los hábitos, costumbres y visiones de la vida, lo vemos en estos días en nuestro país, El Salvador. Es de desear que, cuando todo esto pase, no retomemos el camino, realmente pernicioso, del consumismo y el productivismo desbocados.

Ante todo, los más vulnerables

En los momentos actuales, en nuestro país –y ojalá que en el mundo–, la prioridad la tienen las personas, familias y grupos sociales más vulnerables, no sólo en lo que atañe a los efectos directos del Coronavirus, sino en las implicaciones y complicaciones económicas que se están haciendo sentir desde ya en sus condiciones de vida. Después habrá tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, las decisiones (acertadas o no) que se tomaron y sobre lo que se hizo, se pudo haber hecho o no debió hacerse desde el Estado, la empresa privada y la sociedad misma. Incentivar debates o polémicas que hagan perder de vista lo esencial –que miles de familias están en una situación de incertidumbre laboral y económica que puede agravarse aún más– significa seguir atrapados en telarañas ideológicas que no abonan a la mejor solución que pueda encontrarse a una problemática que, si no se ataja, repercutirá negativamente en la estabilidad social y económica de nuestro país.

Una diputada de la República apuntó bien a la necesidad de poner la mirada en la recuperación de los empleos, una vez que la situación de crisis se vaya superando. Y en la consecución de ese objetivo el Estado debe jugar un papel fundamental, en coordinación con el sector empresarial, pero también con la participación de los sectores laborales. Las universidades, los colegios profesionales y los intelectuales deben aportar sus conocimientos y experticia para que la estrategia de recuperación de empleos sea firme en lo técnico-científico y en los valores éticos que la sustenten. Se trata de un esfuerzo nacional, con el Estado como gestor y propiciador de los mecanismos que, de manera pronta y eficaz, permitan apuntalar una dinámica de empleos que sea

mejor, mucho mejor, que la prevaleciente. En el fondo, se trata de implantar las bases de un nuevo modelo económico, más justo, incluyente y equitativo. Encarar este reto por el lado de ideologías trasnochadas o de disputas de poder mezquinas, o anteponiendo intereses empresariales abusivos, no nos llevará a ningún lado.

No hay que esperar a salir de la crisis para dar los primeros pasos en la dirección apuntada. Y uno de los pasos iniciales consiste en asegurar los ingresos de la población, de forma tal que no se la prive, por falta de dinero, del acceso de los bienes necesarios para vivir. Esto debe hacerse, en primer lugar, por razones de justicia y humanidad, pero también, en segundo lugar, por razones económicas: si se paraliza el consumo se perderá uno de los factores centrales en el ciclo económico de mercado. Esta lógica choca con la visión tradicional –que hay que superar de una buena vez– que considera que sólo tienen derecho a un ingreso monetario quienes trabajan. El asunto es que si no hay trabajo –o las personas son forzadas a abandonar sus empleos– se privaría las familias que dependen de ellas –si no se les asegura un ingreso– de lo necesario para vivir. Y nada más pernicioso para la convivencia social que tener a personas desesperadas por llevar al sustento a sus hogares. Además, como ya se dijo, ello rompería el ciclo económico, poniendo dificultades mayores a la recuperación de la economía.

En El Salvador, hay señales claras de que, en el equipo de conducción gubernamental, liderado por el Presidente Nayib Bukele, se entiende muy bien la necesidad de garantizar un ingreso monetario para las personas y familias afectadas directamente por el Coronavirus o por las medidas de emergencia que se han impuesto a nivel nacional. Es lo correcto desde criterios éticos y desde criterios económicos. Lejos de oponerse a esa decisión de gobierno, los actores que tienen una preocupación genuina por el rumbo del país deberían aportar sus conocimientos o sus recursos –especialmente, si los tienen en abundancia– para hacerla más eficaz y completa. La economía nacional

seguirá activa en tanto que haya personas de a pie que sigan comprando los bienes básicos para vivir. Y la reactivación de la economía dependerá fuertemente del dinero que cada familia tenga en el bolsillo de los jefes y jefas del hogar. Entender esto no requiere devanarse los sesos con interminables razonamientos ideológicos, sino simplemente usar el sentido común y el buen sentido.

Sentido común y buen sentido nos hacen mucha falta en este país, en el cual fácilmente lo secundario se convierte en relevante. Hoy por hoy, la preocupación social fundamental debe ser por las familias cuya condición de pobreza y exclusión las hace particularmente vulnerables ante la enfermedad y el deterioro económico. Las decisiones de gobierno destinadas a disminuir esa vulnerabilidad deberían ser respaldadas, sin ponerse a divagar acerca de los presuntos motivos o presuntas intenciones que están detrás. Obras son amores, y no buenas razones.

Condición de salud y enfermedad

Recién acabo de terminar de leer el libro de Violet Moller, titulado *La ruta del conocimiento. La historia de cómo se perdieron y redescubrieron las ideas del mundo clásico* (Madrid, Taurus, 2019), libro ciertamente estupendo por el tema que aborda y por el estilo narrativo de la autora. Uno de sus temas centrales es el papel jugado por los eruditos, estudiosos y dirigentes árabes en la conservación, traducción y transmisión de la tradición intelectual –especialmente científica– del mundo clásico (elaborado en la Grecia de los siglos V, IV, III y II, antes de nuestra era común, y en los siglos I-II-II-IV y V, después de nuestra era común) a las generaciones que en la baja Edad Media prepararon las condiciones para la llegada del Renacimiento y las transformaciones culturales subsiguientes. Sin las traducciones árabes de textos de Aristóteles, Euclides, Hipócrates, Ptolomeo y Galeno –entre otros– la cultura científica e intelectual hubiera perdido muchos de los soportes conceptuales y analíticos que, a partir del Renacimiento, se convirtieron en el punto de arranque de la ciencia moderna.

En estas líneas me quiero referir a otro de los temas recurrentes en la obra de Violet Moller: la fragua y transmisión, vía traducción del legado clásico, de los conocimientos y los tratamientos médicos. Y es que, en ese legado, que encuentra en Hipócrates (muerto en 371 a.C.) y Galeno (130 d. C-210 d. C) una base imprescindible, pero que se enriquece con aportes decisivos como los de Avicena (980 d. C-1037 d. C.), se establecen algunos de los principios para la comprensión de la salud y la enfermedad que, cuando son olvidados –y lo son frecuentemente– se traducen en malestar y sufrimientos en los seres humanos.

Uno de estos principios es la vulnerabilidad del cuerpo ante agentes patógenos (que comenzaron a ser investigados en los tiempos clásicos, luego lo fueron por los médicos árabes y la tradición continuó en la medicina renacentista, y llega hasta el día de ahora), que amenazan permanentemente a los cuerpos humanos. Ahora se conocen con bastante exactitud bastantes de esos agentes, pero queda un mar de desconocimiento acerca de cómo operan, mutan y se reproducen millones de ellos. Se sabe que lo seguirán haciendo no por maldad o encono hacia los seres humanos, sino por la dinámica química y biológica que gobierna sus procesos internos reproductivos.

Entonces, de lo que se trata es de hacer menos vulnerables a los cuerpos humanos, siendo este otro de los grandes principios establecidos por la medicina clásica. Ya en aquellos tiempos se hizo claro que la salud corporal, entendida como una condición de fortaleza física y mental —es decir, de bienestar integral—, era una clave para reducir la vulnerabilidad del cuerpo ante la enfermedad. Aspectos esenciales para alcanzar una condición de salud corporal son el deporte, el descanso, la alimentación balanceada, las ocupaciones creativas y la reducción de los agobios, los temores y el pánico. Mente sana en cuerpo sano: esta era (y es) la clave para encarar las enfermedades. Ahora bien, la salud mental y corporal es algo a ser cultivado para resistir mejor las amenazas de los agentes patógenos, no para eliminar esas amenazas ni para impedir que en algún momento de nuestras vidas la entropía imponga sus fueros.

Los autores clásicos, lo mismo que quienes construyeron la historia de la medicina posterior —como lo relata Violet Moller—, no tenían optimismo alguno acerca de la presencia permanente de la enfermedad en la vida humana. De hecho, vivieron tiempos de terribles pestes y también de visiones apocalípticas. De ahí sus esfuerzos por identificar, con los pocos recursos que tenían a su disposición, los factores que causaban enfermedad, dolencias y sufrimiento en el cuerpo y la mente de las personas. Se hizo claro desde aquellos tiempos de que

cuerpos débiles, mal alimentados y cansados –no saludables— eran más vulnerables que otros a determinados agentes patógenos, y sólo eso: cuerpos saludables resistían mejor los tratamientos encaminados a atacar a esos agentes una vez que los mismos habían sido contagiados por determinado agente patógeno.

Hay algo, pues, que se sabe desde hace un buen tiempo, y que poco se ha practicado y practica: que la condición de salud debe ser cultivada como la mejor resistencia para las amenazas permanentes e inevitables de agentes patógenos que, sin tener como finalidad afectar a los humanos, terminan causándoles daños irreparables cuando éstos no tienen las mejores condiciones de fortaleza, alimentación y bienestar.

Los virus y las bacterias han acompañado la vida del ser humano desde que este comenzó su andadura en la tierra hace unos 150 mil años. Son sobrevivientes de los inicios de la vida en la tierra y no es realista pensar en exorcizar su influencia en las personas y en otros seres vivos (y entre ellos mismos). Más bien, hay que posicionar, en la agenda de los Estados y los sistemas de salud –y también en los círculos empresariales— la importancia de contar con poblaciones sanas, fuertes, bien alimentadas, no sometidas a presiones laborales o financieras innecesarias, y optimistas, aunque con realismo, acerca de las posibilidades y capacidades humanas.

El deporte, las caminatas, el descanso oportuno, la comida balanceada, la lectura, las actividades creativas –música, poesía, danza, teatro— son la mejor fórmula para tener cuerpos sanos en mentes sanas, como lo enseñaron los sabios griegos, romanos y árabes. Esa es la mejor fórmula para hacerle frente a los factores causantes de enfermedad, no para eliminarlos, sino para disminuir o inhibir sus impactos más perniciosos. Para quienes tienen preocupaciones estrictamente económicas: deberían saber que poblaciones débiles, mal alimentadas, poco saludables y asoladas por la enfermedad son el peor factor de

producción con el que se pueda contar. Y este razonamiento aplica, más allá del Coronavirus, para las mil y una amenazas que se acechan la salud humana ahora mismo, y lo seguirán haciendo en el futuro.

En fin, esa la lección que ha podido obtener del libro de esta inteligente mujer Violet Muller. Ella se suma a mi particular galería de mujeres intelectuales brillantes, entre las cuales destacan Marie Curie y su hija Iréne Jolit-Curie, Lisa Randall y Mary Beard.

Una de muchas lecciones

La crisis actual, suscitada por la pandemia del coronavirus, está dejando una serie de lecciones importantes, de las cuales habrá que hacerse cargo –es de desear– más temprano que tarde. Algunas se imponen desde ya; otras podrán esperar a que la crisis, por lo menos en lo que concierne a la emergencia sanitaria, comience a menguar. En el breve espacio de esta columna quiero centrar la atención en uno de los aspectos que han acompañado de cerca a la propagación del virus y que, en conjunto, ha sido más que contraproducente: la proliferación y circulación masiva de opiniones, comentarios y rumores que, además de confundir a los ciudadanos –lo cual es ciertamente grave–, han sido el canal para sembrar el pánico colectivo, sobre todo cuando esas opiniones, comentarios y rumores se han teñido de contenidos apocalípticos.

En este rubro, casi nadie se salva de haber propagado una afirmación, idea o comentario relacionado con el coronavirus y su impacto, sin prestar atención a su racionalidad, seriedad o pertinencia. Es decir, se cayó en la práctica del chisme o del chismorreo, con el agravante de que esa práctica no se quedó limitada, como antaño, al grupo de vecinos o de amigos, sino que se añadió a los millones de mensajes que circulan (y están circulando) en las redes de comunicación virtuales. Como resultado de ello, el “información chatarra” y la “contaminación cognoscitiva” se han mezclado con (o, peor aún, han diluido) los planteamientos serios e informados, tan necesarios en una situación en la cual las decisiones que se tomen (a partir de lo que se conoce o se desconoce) son de vida o muerte.

El “chismorreo” público, catapultado por las llamadas “redes sociales”, ha puesto de manifiesto sus más graves defectos, como lo son la falta de seriedad, estridencia, amarillismo, simplismo y debilidad de sus “fuentes”. Opinar por opinar, diciendo lo que a uno de le viene en gana o repitiendo “lo que se dice”, no es responsable ni serio. Claro que los gobiernos democráticos no pueden coartar el derecho de las personas a opinar lo que quieran. Éstas, sin embargo, sí pueden autolimitarse y contener sus ansias de participar, guardándose de opinar de aquello que no saben o no tienen información confiable. Se requiere, eso sí, educación, autocontrol y prudencia..., lo cual o brilla por su ausencia o es anulado por los ímpetus de “estar en la jugada”.

Los medios de comunicación han sido, por lo general, plataformas del chismorreo y de las opiniones infundadas. Desde hace unas dos o tres décadas, abrieron las puertas a opinadores de la más variada ralea, siendo muchas veces sus presentadores estrella los jueces que dirimían entre opiniones contrarias. Se creó un estilo de periodismo en el cual cualquier persona se convirtió en experta en asuntos triviales y no tan triviales; y los expertos de verdad fueron excluidos o sumados (cuando lo fueron) a foros en los que su opinión era vista como una más. Este modo de proceder ha pesado en la crisis actual, cuando las voces que importa escuchar son las de los expertos: epidemiólogos, biólogos, químicos y médicos, es decir, personas enfoques y opiniones científicas.

Algunos medios, además de propiciar el chismorreo con el coronavirus, han alentado un clima de opinión apocalíptico sumamente peligroso para la salud mental. Para el caso, en vía Internet me llegó el reportaje de larazon.es que se titula “Eudald Carbonell, el científico de Atapuerca que avisa de la extinción del homo sapiens por la pandemia” (de Marian Benito), al cual presté atención debido al respeto que siento por este gran científico español. Debo decir que, cuando leí el enunciado citado, dudé de que Eudald Carbonell hubiese hecho tal afirmación,

porque los científicos suelen ser sumamente cautos, especialmente cuando se trata de hablar de la “extinción” del *Homo sapiens*.

Y, en efecto, en el cuerpo del reportaje Carbonell no “avisa de la extinción del *Homo sapiens* por la pandemia”, sino que hace ver su preocupación por la forma cómo la especie humana está mostrándose incapaz de gestionar razonablemente su vida y la del planeta, cosa que se ha puesto de manifiesto en el manejo de la pandemia actual. Para él, si no se cambia el rumbo en cómo se manejan los recursos del planeta, se organiza la sociedad y se gestiona el bienestar colectivo, y no se establecen mecanismos eficaces y solidarios de cooperación mundial, la especie humana no tendrá futuro. Leer esas opiniones tuyas me confirma en mi respeto hacia él y hacia el equipo de investigadores de Atapuerca. Son voces como las de Carbonell, Juan Luis Arsuaga o José María Bermúdez de Castro –hacedores de ciencia de la mejor en nuestra hermosa lengua española– las que han perdido relevancia en el ruido mediático prevaleciente en España y en otros lugares. Son las voces – voces de la razón – que hay que escuchar en estos tiempos aciagos. Pero no tergiversadas mediáticamente, como sucede lamentablemente en la nota periodística aludida.

En fin, el cambio de rumbo se impone en muchos de los rubros que configuran la realidad social, económica, política y cultural. Uno de esos rubros es el mediático, en sus distintas dimensiones. No es razonable seguir cultivando el envenenamiento mental de las personas con chismorreos, desinformación y mensajes apocalípticos. Un control de calidad de las opiniones se impone, por lo menos en aquellos espacios o foros en los cuales eso sea posible. Es bueno que se entienda, de una vez por todas, que de la suma de opiniones de baja calidad no surge una opinión de mejor calidad y que, también, hay opiniones de mejor calidad que otras, y que no se trata de “balancear” puntos de vista, sino de promover los más razonables y apegados a la realidad.

Nuevas actividades criminales

Con extrema preocupación he leído las noticias que hablan de supuestos “toques que queda” ordenados por grupos criminales. No menos preocupación e indignación me han causado algunos videos en lo que, presuntos miembros de esos grupos, vapulean, con sendos bates, a ciudadanos indefensos, a los que se recrimina –y se hace culpables y merecedores de la paliza— por andar en la calle. Persona pacífica como soy, no concibo que un ser humano pueda propinarle a otro ser humano –o a cualquier otro ser vivo— garrotazos sin sentir vergüenza de sí mismo. Pero qué se le va a hacer: la condición humana es tal que puede moverse entre los extremos de la bajeza más abyecta y las virtudes más elevadas.

Con todo, lo que me queda claro es que, de ser ciertas esas acciones atomizantes de miembros de organizaciones criminales –es decir, de ser ciertas las “órdenes de toques de queda” y la autoría de las palizas a ciudadanos indefensos—, con ello estarían sumando más acciones delincuenciales a su historial de violaciones a las leyes de la República. No suscribo la tesis –que algunos periodistas y analistas parecieran suscribir al menos implícitamente— de que esas agrupaciones y sus miembros son interlocutores del Estado, contrapartes o equivalentes, y que en virtud de ello gozan de algún tipo de legitimidad política-institucional. El poder fáctico que puedan tener en determinados territorios no es equivalente a un poder legítimo de ningún tipo.

En consecuencia, no tienen ningún derecho a imponer restricciones, sanciones o castigos a los ciudadanos. Esa potestad le corresponde única y exclusivamente al Estado. Cuando particulares asumen indebidamente esa potestad, violan flagrantemente las leyes

vigentes y, al hacerlo, cometen actos delincuenciales. En el caso particular que se comenta aquí, los miembros de grupos criminales usurpan una función que corresponde al Estado y ejercen terror y violencia en comunidades, barrios y colonias. Es algo absolutamente intolerable; y sólo personas que han perdido el sentido de la realidad – periodistas o no – pueden creer que esas acciones deben ser alabadas o publicitadas como si se tratara de un logro por parte de quienes desafían a la sociedad y al Estado con sus actividades criminales.

Así que los grupos pandilleriles y sus miembros, cuando vapulean a ciudadanos o “decretan” toques de queda por las razones que sean – en el presente, para forzar a los ciudadanos a que no salgan de sus casas por la emergencia del coronavirus – suman otras nuevas actividades criminales a las que durante casi tres décadas han venido golpeando (y siguen golpeando) a la sociedad salvadoreña. Es decir, suman otra cuota de dolor a las más que suficientes que tienen las familias pobres de este país.

Parecen no tener conciencia del daño extraordinario, acumulado en lo que son ya muchos años, que causan a la sociedad; y, en lugar que asumir una legitimidad que no tienen –y de la cual derivan derechos inexistentes–, harían un gran bien a la gente si dejaran de delinquir. Tienen la obligación –la única que les concierne por obrar en contra de la legalidad– de dejar de hacerlo, y, si no cumplen con esa obligación, el Estado salvadoreño tiene la obligación y potestad para someterlos al imperio de la ley. Aquí no hay dónde perderse.

La sangría de la historia reciente de nuestro, resultado de actividades criminales, supera con creces –y es casi seguro que los números así lo reflejarán cuando pase esta emergencia– el dolor, desolación y muerte causados por el coronavirus. Pero, aunque el impacto fuera semejante, las diferencias entre los agentes causantes son abismales: por un lado, se tiene virus que obran sin voluntad ni

conciencia; por el otro, seres humanos que se dedican a planificar acciones que violentan la dignidad y el derecho a vivir sus semejantes. No haber contenido esta fuente de dolor es una de las tragedias de El Salvador; y aquí, como en otras situaciones, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

En cuanto a algunos periodistas que parecen entusiasmarse con el poder criminal, creo que son unos imbéciles, que tuercen el sentido del periodismo genuino que no está reñido, en lo absoluto, con el respeto a las leyes ni con el cultivo de una convivencia humana pacífica, decente y respetuosa de la dignidad de nuestros semejantes. Cuando he podido leer sus notas, o informaciones, pretendidamente “audaces”, sobre una amenaza pública lanzada por grupos criminales, me he confirmado en mi apreciación sobre ellos: imbéciles que están ayudando a sacarle filo a la estaca que se está clavando en las costillas de cualquiera que tenga algo apetecible para criminales insaciables.

Una lógica económica perniciosa

Desde que la guerra civil estaba a punto de terminar, pero de manera abierta una vez que esta hubo finalizado, se fue fraguando en nuestro país una lógica económica de consecuencias sociales perniciosas, como lo es la que prescribe que, sin importar cómo se logre, la obtención y acumulación de dinero –junto con los bienes y disfrute que el mismo pueda brindar—, debe ser la principal meta en la vida las personas. Esta meta se erigió en la principal señal del éxito individual y familiar, del cual había que ufanarse dando muestras ostentosas de lo que se poseía en dinero acumulado o de lo que se disfrutaba en lujos de todo tipo, desde las residencias para vivir o pasar las vacaciones, hasta los vehículos y los viajes en turismo de primera clase.

El cierre de los años noventa y prácticamente toda primera década del 2000 fueron el escenario en el que prosperó y se instaló esa lógica que, irradiada de las conquistas y éxito de los ricos más ricos de El Salvador, permeó toda la estructura social y la cultura salvadoreñas, tocando especialmente a las clases medias que asimilaron, con una rapidez inaudita, la lógica de que el éxito se mide en términos de dinero y ostentación. Los ricos más ricos, su éxito, gustos, consumo y modos de ser se convirtieron en el modelo a seguir, incluso por parte de quienes, en su ideología, recriminaban a estos su voracidad y afán de lucro. Esta voracidad, afán de lucro y prácticas explotadoras, pronto pasaron a segundo término en el debate intelectual y político, pues al final de cuentas –cuando la primera década del 2000 terminaba— se las dio por establecidas de modo casi natural.

Como un recuerdo lejano quedaron los debates de los años 60 y 70 en los cuales la explotación económica y la concentración de la riqueza

se consideraban dos principios de estructuración de la sociedad. En los “nuevos tiempos”, neoliberales y democráticos, otros eran los asuntos en discusión: eficacia y eficiencia, transparencia, corrupción, ampliación de los mercados, marcas, innovaciones tecnológicas y emprendedurismo, entre otros. La concentración de la riqueza, la explotación laboral y las desigualdades en la distribución del ingreso dejaron de ser un problema y se convirtieron en un hecho con el cual se tenía que vivir y no sólo eso: se lo tenía que celebrar, profundizar y ampliar. O sea, la lógica de la explotación de los demás se afianzó como un supuesto indiscutible de la vida social.

Explotar a los demás de la manera que sea significa obtener de ellos un beneficio a cambio de muy poco o, en el mejor de los casos, a cambio de nada. A esto se le llama “sacar dinero hasta de las piedras”, y, en tal práctica, los ricos más ricos de El Salvador se hicieron unos verdaderos expertos. En toda la postguerra no han dejado de esquilmar a la sociedad de mil maneras, con la complacencia de distintos gobiernos y de la misma sociedad que, en diferentes niveles, aplicó esa misma lógica a quienes estaban en una condición de debilidad o de necesidad.

En la lógica de “sacar dinero hasta de las piedras” los demás –o sea la mayoría que no tiene ni capital ni patrimonio– no pueden ni tienen que recibir algo gratis, sino que deben pagar por lo que necesiten. Y quienes no pueden pagar, mala suerte, se quedan fuera del juego que permite el acceso a bienes y servicios, sin importar lo vitales que estos sean.

Educación, salud, vivienda, telecomunicaciones, electricidad, alimentación, esparcimiento... Esto y más entró en los circuitos del mercado, en los cuales sólo tiene valor (no dignidad, valor) quien puede pagar. Quien no, es un perdedor, un fracasado. De ahí los afanes, extendidos socialmente, por conseguir dinero. Unos afanes que, en un extremo –el de los ricos más ricos– sirven como aceite para seguir

amasando fortunas, y en el otro –el de la mayor parte de la población– sirven para enfrentar los desafíos de la supervivencia de todos los días.

El sistema financiero salvadoreño –transnacionalizado– es la expresión más fiel de la lógica de “sacar dinero hasta de las piedras”. Esa ha sido la clave de su éxito desde la reprivatización de la banca, por obra y gracia del ex presidente Alfredo Cristiani. Lo que hizo un banco en días recientes, cobrando deudas a personas que recibían los 300 dólares de ayuda gubernamental, es una de las tantas prácticas abusivas que hemos padecido los salvadoreños durante los últimos 30 años por parte de un sistema financiero diseñado –y respaldado por un entramado legal permisivo– para esquilmar a los ciudadanos.

Soy pesimista acerca de las posibilidades reales de que la lógica de “sacar dinero hasta de las piedras” sea reemplazada por una lógica más sana desde un punto de vista económico y social. No obstante, estoy convencido de que, mientras siga vigente la búsqueda de riqueza sin cortapisas legales, institucionales y éticas, no nos abandonará la “guerra de todos contra todos” a nivel social. Y los “señores de la guerra” –que no son los políticos, sino los capitalistas más rapaces de nuestro país asociados con otros de la misma calaña, pero extranjeros– seguirán sacando jugosas ventajas de una sociedad descalabrada que ha aceptado que sin dinero no hay derechos y que las desigualdades socio-económicas son incuestionables e inamovibles.

Sería de desear que cuando la crisis del coronavirus vaya cediendo en su virulencia, y nos enfrentemos al desafío de la recuperación económica, no perdamos la oportunidad de debatir, con la seriedad debida, sobre nuestro modelo económico, pero desde criterios no exclusivamente mercantilistas o empresariales, sino también sociales. A ver si las universidades, fundaciones, ONGs e iglesias, otrora críticas, dejan de una buena vez de seguir jugando a la rentabilidad, la solidez

financiera, el emprendedurismo y las normas ISO, y cumplen con sus responsabilidades profesionales, científicas y éticas.

Dar las gracias

Entre las muchas cosas que aprendí de mi papá y de mi mamá – Armando y Teresa— fue a dar las gracias siempre que recibiera una atención o un bien (moral o material) de otra persona. No sólo cuando esa atención o ese bien fueran gratuitos, sino incluso cuando los estuviera recibiendo a cambio de algo que previamente yo hubiera hecho. Por lo que pude entender desde que era pequeño, mis padres creían que aun cuando uno pagara por lo que recibía de otra persona, en ella siempre había una buena voluntad que iba más allá de la equivalencia entre el dar y el recibir. Y era eso lo que se tenía que agradecer. Era por eso que se tenía que dar las gracias. Adulto, y con algunas lecturas a cuestas –no todas las que quisiera—, me ha dado cuenta de que en esa visión de mis padres latía esa primigenia moral del agradecimiento, que no hay que estudiar ni aprender, de la que hablan los especialistas. No se trata de un don exclusivo; todos los seres humanos nacemos con él y el problema es que, en unos contextos determinados, se erosiona y marchita.

Por mi parte, he tratado de no olvidar esa enseñanza de Teresa y Armando, y he tratado también de que mis hijos la tengan presente en su trato con quienes les rodean. Sé que es un don abundante, aunque no lo parezca. Y en mi trayectoria personal, desde mi niñez y adolescencia en la colonia Dolores, hasta mi edad adulta en mis relaciones familiares y de amistad, y en mi desempeño profesional, no han faltado ni faltan las personas que cultivan el agradecimiento como algo espontáneo y vital. Gracias a ellas –nunca mejor dicho— se ha mantenido viva en mí la llama de gratitud. No sólo la que se manifiesta ante alguien que da algo a cambio de nada, sino la que se manifiesta ante alguien que da algo a cambio de otra cosa.

Y en estos días de crisis en la salud pública, siento la necesidad imperiosa de dar las gracias a quienes con sus mil y una acciones están haciendo todo lo posible no sólo por atender a las personas contagiadas por el coronavirus, sino por contener el avance de este agente patógeno. Tengo la mirada puesta en mi país y en todas las naciones –entre ellas las que quiero de manera entrañable como México y España– que están librando sus propias batallas para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.

Mi admirado Stephen Jay Gould escribió en uno de sus memorables artículos que en la cultura moderna lo normal es debatir hasta el cansancio sobre las acciones y comportamientos negativos, dejando de lado los miles de acciones positivas, dignificadoras de la condición humana, que se suceden todos los días. Según Jay Gould, puestas en una balanza, las segundas superan con creces a las primeras, pero estas últimas, al ser infladas de manera extraordinaria, terminan por hacernos creer que en el mundo todo es malo o que predomina lo pernicioso.

Pues bien, en esta coyuntura crítica quiero reivindicar los miles de acciones positivas que se han realizado, y se están realizando, en el mundo y en El Salvador, en favor del bienestar de amplios grupos poblacionales. Acciones positivas, dignificadoras de la condición humana, que no excluyen los errores (graves o menos graves, según los casos), los abusos y la imperfectibilidad propias de todo lo humano. Pero centrar exclusivamente la discusión en errores, abusos e imperfecciones da lugar a una grave distorsión: la de hacer invisibles a quienes, en diferentes flancos, venciendo obstáculos y asumiendo riesgos en su salud y en el bienestar de sus familias, están cuidando de la salud y el bienestar de otros.

En lo personal quiero agradecer a los agentes de la Policía Nacional Civil y a los miembros de la Fuerza Armada que se dedican

con tesón a velar no sólo por el cumplimiento de la cuarentena en el territorio nacional, sino por la seguridad y el bienestar ciudadanos. No hay, de mi parte, ninguna deriva autoritaria, sino una conciencia clara de la capacidad de propagación de ese virus y su impacto pernicioso en grupos sociales vulnerables. Estoy convencido, a menos que alguien me demuestre lo contrario con datos amplios y contundentes, de que las acciones policiales y militares positivas superan de lejos los abusos que se hayan cometido o se puedan cometer. Estos abusos, por lo demás, deben ser investigados y sancionados conforme a las leyes de la República.

Doy las gracias, en segundo lugar, al personal médico, enfermeras, enfermeros, colaboradores en los servicios de apoyo en el sistema de salud y cuerpos de socorro que están lidiando con el impacto del coronavirus en el terreno. No vivimos en el mejor de los países posibles, sino en uno con terribles limitaciones en el campo de la salud. Y con esas limitaciones, sacando fuerzas de flaquezas, poniendo en juego su salud y bienestar, estas personas están trabajando por el bien de los demás. No agradecerles y guardarles el respeto y las consideraciones debidas, rebaja nuestra propia humanidad. En su momento, se les deberá escuchar con atención si se quiere edificar un sistema de salud robusto e inclusivo.

Por último, doy las gracias a esos cientos o quizás miles de personas involucradas en las más distintas tareas que son las que han permitido que, en esta crisis, las cosas no sean peores. A los trabajadores municipales que no han dejado de mantener la limpieza en muchas colonias y barrios; a los trabajadores de ANDA, que se las han arreglado para que el agua siga llegando a miles de hogares; a las señoras y señores que se dedican a la panadería y a la tortillería; a los empleados y empleadas de los supermercados; a los vendedores y vendedoras de los mercados; a quienes van de colonia en colonia vendiendo verduras, frutas y pescado; a los repartidores de comida rápida que con prontitud

llevan los alimentos a domicilio; a quienes no han dejado de atender sus tiendas en barrios, colonias y pueblos... Podría añadir más personas y actividades, pero las anotadas son indicativas de cómo en nuestro país las acciones positivas abundan. Hay que agradecer a quienes las realizan. No basta con pagar o con dar una propina. También hay que dar las gracias.

Los maestros de aula: una prioridad

A mitad de los años ochenta (del siglo XX), cuando la guerra civil estaba en pleno desarrollo y casi nadie miraba más allá de ella –quizá porque se había afianzado la idea de que la misma tendría una duración imposible de determinar–, el P. Ignacio Ellacuría, compartiendo sus preocupaciones con el grupo de alumnos de filosofía, hablaba de la necesidad de mirar hacia el futuro, pues una vez terminada la guerra el país tendría que enfrentar desafíos extraordinarios, que dependerían de lo que se hubiera hecho, mal o bien, durante la etapa de conflictividad militar. Una de sus preocupaciones era, precisamente, que los actores principales en ese momento no estaban pensando en lo que se haría cuando la guerra terminara; no pensaban en que, cuanto más destruido quedara el país, más difícil sería su reconstrucción. De ahí los esfuerzos de este académico por promover una salida negociada a la guerra civil.

Con las debidas proporciones, pienso que, cuando se suscita una crisis de envergadura, como la que actualmente se padece por la pandemia causada por el coronavirus, la mirada postcrisis es más que pertinente. Me parece absolutamente perentorio atender las distintas situaciones generadas por la crisis, especialmente las de mayor impacto en la sociedad y sus grupos vulnerables. Pero no hay que perder de vista el escenario que se planteará una vez que la crisis haya pasado; y no sólo eso, hay que poner en marcha acciones y decisiones que nos permitan encarar de la mejor manera posible el contexto posterior a la crisis y sus desafíos.

La crisis causada por el coronavirus durará menos que la guerra civil, pero se trata de una crisis de impacto mundial, lo cual apunta a que, después de ella, se tendrá un escenario caracterizado por dinámicas

económicas críticas repartidas por el mundo. Todo parece indicar que situaciones difíciles nos esperan en la etapa postpandemia; no se tiene que cerrar los ojos ante esas posibles situaciones difíciles, sino que hay que meterles cabeza y, en la medida de lo posible, ir preparando, desde ya, las condiciones para hacerles frente de la mejor manera.

En concreto, quiero compartir algunas preocupaciones y reflexiones sobre la educación en nuestro país. Una tarea inmediata, e ineludible, es asegurar que los alumnos en el sistema educativo no pierdan el contacto con los procesos formativos en el tiempo que dure la cuarentena y las actividades presenciales estén suspendidas. Se tienen que usar los recursos disponibles y otros que se diseñen a efecto de hacer más eficaz el acompañamiento educativo en el seno de las familias. Hay que tener claro que, en plano de la educación virtual, ni las herramientas tecnológicas disponibles, ni los contenidos formativos ni las destrezas en docentes y alumnos están en condiciones de reemplazar, en la totalidad del sistema y en lo inmediato, a la educación presencial.

Creo que poner el máximo empeño en lograr ese reemplazo, en un corto tiempo y a marcha forzada –y bajo el supuesto de que nunca más se volverá a las aulas– es un grave error. Y ello porque la transformación de lo presencial a virtual no es automática ni inmediata: requiere recursos y destrezas que no se obtienen por arte de magia, y requiere tiempo, más del que el “entusiasmo tecnológico” permite suponer. Un tiempo que es mucho más largo del que durará la cuarentena, incluso en el escenario más pesimista, digamos todo 2020. No habría manera de que en 2021 todo el sistema educativo tuviera su educación virtualizada y que niños y jóvenes siguieran en su casa dando continuidad a la experiencia de 2020. Sencillamente, no habría tiempo... Ni recursos.

¿Hay que dar la espalda a la educación virtual? Por supuesto que no. Se la tiene que impulsar, respetando los tiempos y la calidad

requeridos, ahí donde sea oportuno y viable. En la actual situación del país, conviene utilizar los recursos tecnológicos disponibles en educación virtual para mantener a los alumnos en contacto con el aprendizaje, ahí donde ello sea posible y sin esperar maravillas. Y sin estar creyendo que, en unos cuantos días –por buena voluntad y buenos deseos–, se va a producir el relevo de lo presencial por lo virtual. Eso no es realista.

Esto me lleva a la reflexión sobre lo que se puede hacer en estas semanas o meses para preparar el mejor retorno de los alumnos a las aulas. Pienso que, entre las muchas cosas que se pueden hacer, una debe ocupar un lugar prioritario: propiciar que los maestros del sistema educativo, especialmente del público, tengan acceso a materiales formativos que puedan ser revisados, consultados o estudiados en casa por ellos y ellas, aprovechando estas semanas de inasistencia a las actividades docentes ordinarias. Estimo que la atención a los maestros, en esta coyuntura, debe ser una prioridad; que se debe aprovechar el tiempo del que disponen ahora –un tiempo que normalmente es escaso– para la formación y la autoformación. No pienso en complejas estrategias formativas, cuyo diseño lleve meses y que impliquen etapas formativas previas para quienes las diseñarán e implementarán, sino la planeación de acciones-medidas de apoyo expeditas que, en las semanas o meses inmediatos, permitan a los maestros potenciar algunas capacidades que les serán útiles cuando se reinicien las actividades escolares.

Las capacidades a potenciar pueden dividirse en metodológicas y de contenido. Y para ello se pueden preparar materiales de apoyo – desde reseñas de libros, pasando por síntesis teóricas, metodológicas o bibliográficas, hasta guías de preguntas o de recomendaciones– que se hagan llegar a los maestros en sus hogares. Los académicos experimentados del país podrían aportar en la elaboración de esos materiales formativos y, una vez validada su calidad –un equipo del

Ministerio de Educación o del INFOD podría encargarse de esto—, esos materiales podrían repartirse entre el cuerpo docente. Quizás, para comenzar, se debería trabajar en materiales sobre temas metodológicos y de contenido fundamentales (y generales) que sean de utilidad común para la mayor parte de los docentes del sistema. Creo que dedicar tiempo a este tipo de autoformación no será tiempo perdido por parte de los maestros, ni por parte de quienes trabajen en los materiales de apoyo, sino todo lo contrario. Es estimulante imaginarse un escenario postemergencia con un número importante de docentes regresando a clases con nociones, conceptos y criterios metodológicos distintos, aunque sea un poco, de los que tenían antes de irse a sus casas por la cuarentena.

En fin, mi argumento es que, en esta coyuntura y en el ámbito educativo, la atención a los maestros de aula es una prioridad que se complementa con la otra constituida por los niños, niñas y jóvenes. La atención a los académicos experimentados del país, lo mismo que a los formadores de formadores, cuadros profesionales y técnicos experimentados, no es una prioridad en estos momentos. Más bien, las capacidades de estos grupos deben ponerse a trabajar en función de la atención a los maestros de aula. Un profesor mío en la UCA, cada vez que se topaba con alguien que terminada una carrera se matriculaba en otra, solía preguntarle ¿cuándo dejarás de estudiar y harás producir lo que mucho que has aprendido? Ese es un cuestionamiento ético y profesional que tendríamos que hacernos quienes, además de grados académicos superiores, tenemos en nuestro haber bastantes lecturas, cursos, diplomados, talleres y seminarios: ¿cuándo haremos producir lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo? El día en que midamos el desempeño profesional de una persona por lo que ha dado a los demás y no por lo que ha recibido —que es lo que se suele pedir en los atestados— ese día el mundo comenzará a cambiar en su jerarquía de valores. Podemos comenzar ya, con leves acciones, ese cambio.

Vocación docente a toda prueba

Algunos de mis escritos de opinión de estas semanas han dado pie a algunos comentarios de colegas y amigos que, sin importar cuán coincidentes sean (o no) con mis ideas, agradezco de la forma más sincera. Dos textos en particular han generado distintas reacciones: “Dar las gracias” y “Los maestros de aula: una prioridad”. De este último, rescato el mensaje central: la atención a nuestros maestros y maestras de aula –que trabajan con niños, niñas y jóvenes– debe ser la meta principal en esta coyuntura, y los académicos más experimentados del país –aquellos que acumulan en su haber maestrías, doctorados y trayectorias de investigación consolidadas– deberían sumar sus esfuerzos y capacidades para apoyar a los docentes de aula. Siendo este el argumento central, los demás asuntos tratados –como el tema de lo virtual– son algo secundario en mi planteamiento. Sería una lástima que lo secundario diluyera el propósito de mi mensaje.

Un amigo (que es también un colega universitario), cuyo nombre no voy a decir porque conozco su modestia, me escribió un mensaje que me voy a tomar el atrevimiento de citar, porque creo que su contenido es significativo.

“También valdrá reconocer, Luis, que los maestros están haciendo, en estos días, un esfuerzo valioso. Me consta, por ver de cerca a las maestras de un kínder... y por vía de mis nietas, el trabajo de sus respectivas maestras, que se preocupan por atender a sus respectivos alumnos/as. He visto, como en el caso de aquellas maestras que atienden familias bastante pobres (sin posibilidades de acceso a una computadora y menos a Internet) responden con una creatividad exultante. Ojalá puedas hacer un artículo un día de estos, destacando que estas circunstancias están poniendo a

prueba la vocación docente; pero sobre todo la voluntad de servir y de servir bien a quienes menos favorece este sistema. Gracias por tu artículo. Lo he compartido con los profesores de la Facultad, porque hay ideas allí que podemos aprovechar también en la universidad”.

Prometí a mi amigo escribir algo sobre ello y, con gratitud hacia los maestros del país, ahora lo hago. Tengo también una vivencia de primera mano, a través de mis sobrinos –mi sobrina en bachillerato y mi sobrino en 4º grado–, que están siendo atendidos con delicadeza y prontitud por sus maestros y maestras. Además, he tenido acceso a información valiosa –que otro colega ha tenido la gentileza de brindarme– sobre las variadas acciones que se están realizando a nivel institucional –desde el Ministerio de Educación y el INFOD– para asegurar la continuidad educativa de niños, niñas y jóvenes, y para mantener los procesos formativos de los maestros y maestras del sistema público de educación.

El saldo de todo esto es un cúmulo de acciones y comportamientos positivos, realizados por cientos de personas que se están esforzando por hacer el bien a sus semejantes. Entre esas personas, destacan los maestros y maestras que, como dice mi amigo, “con una creatividad exultante” hacen frente a una situación en la que abundan las dificultades. Dan muestras, además de su valía como seres humanos, de una vocación docente a toda prueba. Heroica. Pero no se trata de un heroísmo rebuscado, espectacular, sino del que pasa desapercibido porque obra en lo pequeño, en lo cotidiano, pero que genera dignidad en las personas. Y esto es, en definitiva, lo que importa si los criterios éticos con los que regimos nuestras vidas son los de la dignidad humana.

Y los maestros y maestras que se preocupan por sus alumnos y alumnas; que están haciendo sus mejores esfuerzos por atenderlos, con

materiales, guías de trabajo, seguimiento a sus aprendizajes y otras actividades –ejercicios físicos o prácticas artísticas–; y que dedican tiempo a su autoformación están haciendo un bien extraordinario –más del que ellos y ellas se imaginan– a la sociedad salvadoreña. Desde este espacio, no puedo menos que agradecerles por su esfuerzo, empeño y creatividad. Honran la profesión docente. Honran el conocimiento.

Termino esta reflexión con algo que anoté en “Dar las gracias”: usualmente nos fijamos sólo en los hechos negativos inflándolos de tal modo que anulan todo lo demás. Por supuesto que las acciones negativas (perjudiciales para el bienestar social y la dignidad de los demás) existen y se deben hacer los mayores esfuerzos por corregirlas o incluso erradicarlas. Pero también existen las acciones positivas y, en el caso de nuestro país en estos momentos, esas acciones se están realizando en diferentes ámbitos. Los maestros y maestras a los que hace alusión mi amigo, o los maestros y maestras que están dedicando atención a mis sobrinos, son un ejemplo de ello. Como muestra de mi agradecimiento y respeto, transcribo para ellos y ellas (lo mismo que para cuerpo docente nacional) este hermoso poema de ese gran maestro, escritor y poeta que fue Francisco Andrés Escobar: *Por si el silencio*.

“Si me voy y te quedas: restitúyeme al viento.
Lleva mi nombre triste y escríbelo en la arena.
Habla con las gaviotas, con las viejas mareas,
diles que no me he ido, que ando volando cerca.

Diles que me he quedado hecho cal en las piedras,
que vivo en el columpio de las flores silvestres,
que mis tardes las paso cerca del sol poniente
y que espero los días en la región del hielo.

Y siente mi presencia en todo lo que quieras,
en todo lo que mires con tus ojos de cielo:
desde el café de esquina donde hacía mi espera
hasta el musgo que crezca junto a mi cruz de tierra.

Encuéntrame en las cosas que rozaron mis dedos.
Mírame en los juguetes, en los dulces pequeños.
Sábeme detenido en mis humildes letras
con que canté a la vida fulgores y miserias.

Si me voy y te quedas: envuélveme en recuerdo,
adéntrame en el margen de tus memorias tiernas.
Y perdona el confuso torrente de mi anhelo
que amó sin esperanza, por rutas del silencio”.

Cambios posibles en el tráfico vehicular

No soy de los que creen en la fórmula general de que toda crisis es una oportunidad, pero sí creo que en algunas crisis se hacen presentes, a veces, oportunidades interesantes. Entiendo por “oportunidad” una posibilidad de mejorar, corregir o cambiar algo que lo requiere. Y en nuestro país, como en otros, la actual coyuntura suscitada por el coronavirus da pie para realizar correcciones, o reformas, en rubros que hasta ahora, pese a lo perniciosos que son para una convivencia social sana, no ha habido forma de corregirlos en sus fallas. Uno de esos rubros es el del tráfico vehicular, público y privado, que desde los años noventa en adelante se ha vuelto agobiante, además de peligroso, para la población en general, aunque de manera especial para quienes andan a pie. Las medidas de emergencia ante el coronavirus, en particular la cuarentena domiciliar, han supuesto un respiro ante los males asociados a un tráfico vehicular desbordado: saturación, abusos, desorden, accidentes de tránsito recurrentes y graves, violencia cotidiana y contaminación por gases tóxicos y por ruido.

Recuerdo una frase que escuché en una obra de teatro –presentada por el Taller Libre de Teatro de la UES– que se ponía en escena en los años ochenta: “el hombre [el ser humano] es un animal que se acostumbra a todo”. Y no puedo dejar de alarmarme ante el modo como terminamos por acostumbrarnos, en la dinámica vehicular, a un estado de cosas tan caótico, violento e inhumano. En alguna ocasión comenté una fea experiencia que tuve en un microbús: el conductor viajaba a excesiva velocidad y una señora le dijo esa no era forma de manejar y que se iba a bajar; de mala gana, el motorista, abruptamente, se detuvo. Quienes iban el microbús se burlaban de la señora mientras caminaba

hacia la puerta. Fui detrás de ella hacia la salida, y antes de bajarme les dije a dos mujeres jóvenes que reían a carcajadas: “no entiendo de qué se ríen, si la señora ha hecho algo que todos deberíamos hacer”. Me miraron extrañadas, sin entender lo que yo les decía.

Al meditar sobre lo sucedido, caí en la cuenta de que, salvo contadas excepciones, casi todos nos hemos acostumbrado a ese estado de cosas. Se trata de un estado de cosas anómalo, que lacera a diario el bienestar, la tranquilidad y la dignidad de las personas. Es anómalo que un conductor de autobús o microbús conduzca, con el vehículo saturado de pasajeros, a excesiva velocidad y con música estridente que golpea los tímpanos una y otra vez. Es anómalo que un conductor de un automóvil tenga como meta llegar primero que nadie a su destino, sin importarle la seguridad de los demás ni el respeto de las leyes de tránsito. Es anómalo que los conductores de motos aparten, sin la menor precaución alguna, a quienes caminan por calles o aceras.

Eso, definitivamente, no puede continuar así. Y la situación actual abre la puerta para hacer algunas correcciones y mejoras que se traducirían en un mayor bienestar ciudadano. Desde hace algún tiempo –y por ahí está registrado en algún artículo– tengo la idea que en El Salvador debe implementarse el “Hoy no circula”, es decir, la práctica de que una vez a la semana los vehículos particulares se queden en casa y que las personas usen transporte público, caminen o no salgan de sus hogares. En el caso de quienes tienen más de un vehículo se aseguraría de que, al menos por un día, no los pongan todos en circulación.

En segundo lugar, creo que también es una buena oportunidad para determinar las necesidades reales de transporte público a nivel nacional. Es evidente que en algunos territorios hay saturación de rutas y unidades, y en otros hay penurias. Es evidente que durante el día varían las necesidades de transporte público en determinados territorios y que en las horas de menor demanda es irracional que circulen más

unidades de las necesarias. Rutas y unidades deberían estar en función de las necesidades de la población, y no a la inversa.

En tercer lugar, estimo que es el momento de terminar de buena vez con la competencia, poco sana y mal entendida, entre líneas (empresas y sectores) de microbuses y autobuses. Esa competencia es fuente de abusos, violencia y desorden. El problema es que no compiten para ser mejores de cara al bienestar ciudadano, sino para sacar la mayor tajada del negocio a expensas del bienestar y la seguridad de las personas. Esto ha llevado a que los empresarios del transporte colectivo apuesten por tener la mayor cantidad de unidades en las calles, pero cuidando que eso les suponga los menores costos. El resultado: unidades en regular o mal estado, y concentradas donde hay más gente, es decir, los centros de las ciudades y los núcleos urbanos más poblados.

En tercer lugar, junto con lo anterior, quizás también sea un buen momento para ordenar las rutas de circulación del transporte público, que ha sido un dolor de cabeza para diferentes gobiernos. Un mapa de circulación del transporte colectivo, claro y simple, haría la diferencia respecto de lo que ha regido en las últimas décadas. Y en ese mapa deberían estar bien identificadas las paradas de autobuses y microbuses, lo cual es un dolor de cabeza para los ciudadanos. No basta que esas paradas estén en dicho mapa; deben estar bien identificadas en el territorio, con aceras despejadas y bien señalizadas –con la identificación de las rutas– para que las personas hagan su espera sin correr riesgos.

Los capitalinos tenemos dos paradas autobuses o microbuses que son un verdadero problema para el bienestar y la seguridad: la que queda a un costado del mercado ex cuartel, viniendo de norte a sur, y la que queda dos cuadras abajo del Banco Hipotecario, siempre de norte a sur. El anterior gobierno decidió concentrar una serie de rutas en ambas paradas, pero sin despejar el tramo de acera correspondiente ni indicar los números de rutas que ahí se detienen. Como resultado de ello, en las

horas de mayor afluencia de personas –en especial por la tarde–, llegar a esas paradas y permanecer en ellas es una verdadera tortura, por no hablar de las dificultades que se dan en el abordaje de las unidades. Escribí sobre ello en su momento, y ahora lo traigo a cuenta como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para mejorar la vida de la gente. Posicionar el bienestar de la gente como lo central: he ahí el enorme reto del presente. Con ese criterio deben hacerse reformas y mejoras en rubros vitales como el transporte colectivo y el tránsito vehicular.

Un laboratorio social

A los sociólogos –lo mismo que a científicos sociales de otras disciplinas– no les resulta fácil contar con situaciones experimentales, controladas o relativamente controladas, que les permitan explorar las interacciones sociales, las dinámicas poblacionales y las consecuencias esperadas y no esperadas de los comportamientos individuales y colectivos. Sin embargo, de vez en cuando, se generan condiciones que son favorables para una exploración de lo social, pues se configura una especie de “laboratorio social” en el cual se perfilan con bastante claridad prácticas sociales que, en situaciones normales, se presentan enmarañadas y mezcladas unas con otras. Es el caso de las condiciones que se han generado con las medidas tomadas, por los Estados y las sociedades, en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. La medida más relevante, en la creación de este “laboratorio social”, es la cuarentena domiciliar que sigue vigente –con variantes y aplicaciones más o menos restrictivas según las naciones y según la dinámica de la pandemia– en buena parte de los países a nivel mundial.

Esta cuarentena permite, si no explorar empíricamente de forma amplia, reflexionar y elaborar hipótesis, entre otros temas, sobre interacciones familiares, convivencia social restringida –o en muchos casos anulada–, soledad, autocuidado, consumo y usos, límites y posibilidades de la tecnología y programas que permiten la comunicación virtual. La lista de temas dignos de atención se puede ampliar y seguramente los institutos de investigación social y las escuelas de ciencias sociales en diferentes partes del mundo pronto nos revelarán los resultados de sus estudios.

Me quiero fijar en los límites y posibilidades de las tecnologías de comunicación virtual que, en diferentes contextos nacionales – dependiendo de las capacidades instaladas y de la cultura en hogares, instituciones y empresas–, han tenido y están teniendo su peso particular en la atención no sólo las necesidades de comunicación derivadas de la economía, sino en las derivadas de la vocación-ansias-tendencias de las personas de relacionarse e interaccionar entre sí. Los individuos humanos –desde los pequeños hasta los adultos– somos miembros de una especie biológica –la especie *Homo sapiens*– que tiene un recorrido evolutivo de unos 150 mil años.

Somos gregarios, cooperativos, parlanchines y activos en caminar; nos gusta el contacto físico con nuestros congéneres y con miembros de otras especies –como los perros, los caballos o las gallinas– y con cosas no vivas –desde las piedras y los metales hasta los celulares y las casas–, no por malacrianza, sino por razones inscritas en nuestros genes. Así ha sido a lo largo de, prácticamente, toda nuestra presencia en la tierra. Las posibilidades de formas de comunicación no directas físicamente – cara a cara–, mediadas por tecnologías complejas (electrónicas) son del siglo XX, aunque sus bases se remontan al siglo XIX. Y la irrupción de esas formas de comunicación es evidente desde los años 70 y 80 del siglo XX, gracias a las posibilidades de la tecnología satelital de mediados de ese siglo. Los años noventa del siglo XX y las siguientes dos décadas fueron escenario de la globalización de las comunicaciones virtuales gracias a Internet y a la masificación (diferente, obviamente, en distintas clases sociales, regiones y países) de las computadoras y los teléfonos celulares.

La fracción temporal de estos cambios es una nada comparada con el inmenso periodo de tiempo anterior a los siglos XIX y XX, y no se diga comparada con la década de los 90 y las dos primeras del siglo XXI. Sin embargo, no se puede negar lo espectacular de los cambios en la tecnología y la comunicación virtual en las décadas recientes. Tanto es

así que los más entusiastas hablan de una cuarta revolución industrial a propósito de los extraordinarios cambios tecnológicos –catapultados por un desarrollo científico más espectacular– que no se reducen a las comunicaciones, sino que se extienden a la industria, el transporte, la alimentación y la exploración espacial.

Los últimos tres meses, aproximadamente, han sido una aplicación, en condiciones extremas (de “laboratorio”), de tecnologías de comunicación –programas, sitios, plataformas, etc.– y de aparatos que han venido siendo usados de manera febril en los últimos 10 o 20 años (o desde antes), con innovaciones constantes en rapidez, conectividad, integración de funciones, materiales de fabricación, capacidad de memoria, facilidad de uso y diseño. De tal suerte que no es correcto sostener (o creer) que es hasta este momento que esas tecnologías y las formas de comunicación propiciadas por ellas están siendo utilizadas; lo interesante de la situación es que en estos meses ese uso ha sido “extremo”, mediante la restricción (el control) de formas de comunicación que descansan en el contacto directo entre las personas. Y es ese uso, en condiciones extremas (puras o casi puras), el que está permitiendo obtener lecciones o líneas de acción en diferentes direcciones, una vez que la pandemia sea superada. Por ejemplo, en el seno de las grandes corporaciones se están impulsando estrategias laborales que permitan el trabajo desde los hogares (“teletrabajo”, se le llama), con el fin de abaratar costos derivados del uso de instalaciones físicas.

Ahora bien, no se debe perder de vista de que las tecnologías y formas de comunicación virtual puestas en práctica en estos meses ya eran usadas antes de la pandemia, y de esos tiempos vienen las loas a unas formas de comunicación que, según sus adalides, estaban dejando atrás, como algo arcaico, la comunicación cara a cara, el contacto físico personal, las interacciones individuales y colectivas en el mundo real. Lo virtual, se escuchaba decir muchos antes de las cuarentenas de estos

días, ha reemplazado (o está reemplazando) a lo real, ya se trate de revoluciones, debate público, actividades profesionales, relaciones de amistad o amorosas. El coronavirus y su propagación (algo real, no virtual) dieron un mentís a esa presunción: se propagó precisamente porque las formas de comunicación cara a cara, el contacto directo entre las personas, el uso de espacios físicos de manera colectiva, etc., estaban ahí, incesantes, dinámicos, reales. Tanto es así que para contener la propagación de la pandemia los distintos Estados han tenido que emplearse a fondo –recurriendo en la mayoría de casos a medidas coercitivas– para forzar a las personas a reducir sus contactos y relaciones físicas directas.

Así fue como se llegó a las distintas fórmulas de cuarentena en los distintos países. *Homo sapiens* al fin y al cabo, ver constreñidas su vocación y necesidad de contacto físico, para hablar, mostrar o recibir afecto, caricias y amor, se está convirtiendo en algo insoportable para millones de seres humanos. Lo más natural será que, pasada la cuarentena, busquemos a aquellos con quienes, conviviendo, hablando o compartiendo, nos sentimos bien. Es previsible, asimismo, que las pruebas de laboratorio a las que han sido sometidas en estos días las tecnologías y las formas de comunicación virtual den la pauta para su uso más eficaz o más extendido en ámbitos particulares, por ejemplo, de la economía, de la educación o de la salud. Pero no se ve que, de momento, vayan a reemplazar las relaciones e interacciones reales entre los seres humanos. Valga como ilustración de lo apuntado, esto que dijo una joven catalana a propósito de la no realización del día de Sant Jordi en Cataluña, este 23 de abril: lo que más extraño de este día es no poder juntarme con otras personas.

Mientras esta joven catalana lamentaba no poder relacionarse con sus semejantes, en un programa de la televisión internacional pude ver, también en estos días, a dos jóvenes que probaban un traje (de tecnología avanzada) con distintos puntos para ejercer presión sobre el

cuerpo de quien lo usa. No hablaban directamente, sino a través de una computadora: uno de ellos tenía puesto el traje, mientras que el otro daba indicaciones virtuales, por ejemplo, de abrazo en la espalda, que el traje replicaba con presión en el lugar señalado. Me parece un gran invento en su tecnología, pero algo triste en sus implicaciones humanas, pues no hay nada más humanizador que recibir o dar un abrazo, en directo, con el calor y los olores correspondientes, de las personas que queremos y nos quieren.

Algunos números

Desde que los números fueron inventados –o descubiertos, según se prefiera– han sido de una enorme utilidad no sólo para el conocimiento de la realidad, sino para los cálculos en la toma de decisiones por parte de empresarios, políticos y ciudadanos en general. La necesidad de contar, de tener cifras y de establecer relaciones entre ellas nos asalta a cada instante, lo cual no quiere decir que siempre le hagamos caso a esa necesidad o que tengamos a mano lo mejores números.

En la actual coyuntura, marcada por el impacto del coronavirus en la salud pública mundial, la necesidad de los números se ha hecho sentir con particular fuerza, comenzando con los relativos a la cantidad de personas fallecidas e infectadas, para continuar con los que se refieren a las cantidades de medicamentos disponibles, el número de instalaciones hospitalarias y un largo etcétera que incluye, por supuesto, los datos que reflejen el impacto económico de la crisis sanitaria. Ahí donde esa necesidad de números –y de información– no ha sido colmada satisfactoriamente, la confusión ciudadana ha sido mayor. Y ello ha abierto las puertas a la divulgación de las más variadas opiniones, conjeturas y valoraciones que no siempre han contribuido a la salud mental de las personas.

Como quiera que sea, algunos números, por lo menos gruesos, son bastante firmes; y uno de ellos es el que se refiere a la cantidad de personas fallecidas, transcurridos unos 3 meses –este periodo podría extenderse a cuatro meses (enero a abril), pero yo me quedo con el periodo febrero-abril– desde que se desató abiertamente la actual epidemia –o pandemia según fuentes de alto nivel mundial– del

coronavirus. En total, al momento de redactar estas líneas, se han contabilizado 242 mil muertes en el mundo causadas por el virus en cuestión. Hay también datos importantes, por ejemplo, sobre su distribución por países e incluso sobre su incidencia por grupos de edad y sexo. Es seguro que, cuando se cierre el ciclo de la crisis –que sólo alguien con pretensiones de adivino puede declarar para tal o cual día y fecha–, se tendrán otros números, y será entonces oportuno realizar los balances oportunos en todos los ámbitos afectados o involucrados en la coyuntura y sus consecuencias.

Sobre los 242 mil fallecidos hasta ahora, cabe decir, ante todo, que no debe perderse de vista que, tras ese número frío, hay personas concretas, hombres y mujeres, con trayectorias de vida que fueron truncadas y con lazos familiares que han sido rotos. Hay pesadumbre, impotencia y dolor en las familias de las que eran parte. Nunca estarán de sobra –aunque no sean un remedio para lo irremediable– las muestras de aliento y solidaridad con esas familias en todo el mundo.

Y, en segundo lugar, no es irrealista sostener que las pérdidas de vidas humanas serían mayores si no se hubieran implementado, por parte de los distintos Estados y gobiernos, medidas de control de la movilidad social que, por lo general, han cobrado la forma de cuarentenas; o, cuando este no ha sido el caso, por las medidas de autocontrol impulsadas por la misma sociedad. Las medidas impulsadas por los gobiernos y los Estados han tenido matices distintos en cada nación; y algunos de esos matices (o variantes) han sido y seguirán siendo asunto de controversias, pero –hasta que no se demuestre lo contrario– no es irrazonable afirmar que la propagación del virus ha sido contenida gracias a las medidas destinadas a restringir e incluso anular la movilidad y el contacto social masivos.

Dicho lo anterior, es imposible entender el impacto real del coronavirus si no se hacen comparaciones con otros fenómenos que

impactan la salud pública, como el cáncer, los accidentes de tránsito o laborales y la gripe, y que dejan a su paso desolación y muerte. Los números son útiles y aleccionadores para ver cómo está el mundo. Aquí se tienen algunos, tomados de fuentes que colocan sus datos en Internet. Cualquiera puede verificar los números, determinar su inconsistencia o ajustarlos (o descartarlos) a partir de otras fuentes más fiables. En mi caso, no estoy comprometido con esas cifras y si alguien hiciera un ejercicio equivalente con mejores datos, sería estupendo.

Así, en lo que atañe al cáncer, en 2012 murieron 8.2 millones de personas en el mundo, debido a afecciones relacionadas con esa enfermedad. Es decir, en cada trimestre de 2012 murieron, en promedio, más de 2 millones de personas por causas relacionadas con el cáncer. En cuando a los accidentes de tránsito, cada año fallecen en el mundo 1.3 millones de personas, esto es, en cada trimestre mueren por accidentes de tránsito, en promedio, más 300 mil personas (datos de la OMS para 2017). En lo referido a los accidentes laborales, según la OIT (2019), 7,600 personas mueren diariamente a causa de ellos, o sea, en promedio, unas 212 mil personas al mes y más de 600 mil en cada trimestre. En 2017, murieron en el mundo 6.3 millones de menores de 15 años por causas prevenibles; y 8,500 mueren cada día por desnutrición. En este último caso, se tiene un promedio de 238 mil muertes mensuales y de más 700 mil en cada trimestre. Y, por último, en lo que toca a la gripe, cada año deja unas 650 mil muertes, es decir, un promedio de 162, 500 fallecidos por trimestre.

Los números que se han reseñado pueden servir para muchas cosas, y una ellas –que ya está siendo usada– para restarle relevancia al impacto del coronavirus. No me parece correcto este uso, porque la muerte de 242 mil personas en un trimestre es algo trágico, especialmente porque muchas de esas muertes pudieron haber sido evitadas con sistemas de salud más fuertes y con mayores niveles de justicia y bienestar sociales. Más bien, lo hay que hacer es leer y entender

la tragedia causada por el coronavirus como parte de un mapa de otras tragedias que asolan a la humanidad actual, mismas que, en muchas de sus implicaciones humanas y sociales (y también económicas), podrían ser corregidas o disminuidas, o prevenidas con eficacia, si los ordenamientos socio-económicos, políticos y culturales estuvieran en función de la dignidad de las personas. Todos los datos reseñados (y otro montón que reflejan pérdidas de vidas humanas en el presente: crimen violento, migraciones, guerras por recursos energéticos) nos revelan un mundo organizado de espaldas a la dignidad humana, mismo que se juega en el cuidado material y espiritual de cada persona, sin importar su edad, sexo, religión, procedencia, color de piel o ideología, y en el cuidado del mundo que es, como decía Giovanni Pico de la Mirándola, nuestro hogar.

En fin, el coronavirus es una tragedia. Pero no la única. Su impacto no está desconectado de otras tragedias que también causan muerte, como la pobreza, la marginalidad y el abandono económico, social y cultural. Ojalá que las alarmas sanitarias, económicas, políticas e institucionales suscitadas por el impacto del coronavirus sigan sonando ante las varias tragedias que azotan a la poblaciones pobres y excluidas en diferentes partes del mundo.

Miradas sobre la situación actual

En las distintas conversaciones que hemos tenido varios amigos y colegas en estos días, han salido a relucir nuestras preocupaciones por la situación actual del país y del mundo, en el marco de la crisis suscitada por el coronavirus. Para ordenar un poco sus opiniones y las mías, les propuse responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la problemática más importante en el momento actual, visto desde tu especialidad académica o profesional? Gentilmente, cada uno de ellos me escribió sus reflexiones en un texto breve. Comparto sus reflexiones, junto con mi propia respuesta, en las siguientes líneas. Por límites de espacio, sólo interrogué a cuatro colegas, pero sería interesante recoger muchas más respuestas a esa pregunta o a preguntas semejantes.

Luis Armando González (profesor universitario): “Reconociendo que no se trata de una pregunta de fácil respuesta, al meditar sobre ella, mi respuesta es que uno de los principales problemas en el momento actual es la visualización de los diferentes aspectos involucrados en las decisiones que se están tomando para paralizar (o reducir drásticamente) las actividades sociales y económicas. Es complicado, o incluso imposible, tener una visión completa de todos los aspectos en juego, porque toda decisión trae aparejadas consecuencias no previstas (y no queridas) de antemano. Sin embargo, hay algunas que sí pueden serlo, y son esas las que deben atacarse con las decisiones o acciones pertinentes. Pongo un ejemplo, entre otros. Muchas familias están viendo reducidos sus ingresos (o los han perdido totalmente) en estos meses, y es probable su situación siga así en los meses posteriores. Pero tienen, además de necesidades de alimentación, compromisos de pago por servicios o deudas adquiridas. En el caso de deudas con el sistema financiero, los bancos harán todo lo que puedan por cobrarse lo

adeudado. Fue lo que sucedió con el cobro que hizo un banco sobre los 300 dólares de ayuda dado por el gobierno. Cualquier ingreso que las personas endeudadas perciban será blanco fácil de las arremetidas del sector bancario, y lo mismo sucederá (y quizás ya esté sucediendo) con los pocos ahorros que algunas personas tienen para paliar las dificultades postcrisis del coronavirus. Este es un aspecto que debe contemplarse por parte de las autoridades estatales, pues no se puede dejar a los ciudadanos así de expuestos a la voracidad bancaria. Si hay un sector que puede esquilmar a la gente, ese es el sistema financiero; las medidas de prevención y de sanción de cualquier abuso bancario sobre el escaso patrimonio de las personas debe ser sancionado con dureza, pero para ello deben fijarse los mecanismos legales y de vigilancia correspondientes. Desde el Estado, se debe asegurar que, ante cualquier abuso, los ciudadanos no se queden solos frente a los bancos, porque éstos cuentan con los procedimientos y recursos suficientes para doblegar a las personas”.

Rommel Rodríguez (economista): “La crisis por el Covid 19 ha puesto en jaque al modo de producción capitalista, en la medida que ha hecho ver al capital –a sus representantes, más bien dicho– que para la acumulación de riqueza y la realización de las mercancías se requiere, inexorablemente, del factor trabajo –o más bien dicho la “fuerza de trabajo”. Ahora un virus ha provocado que ese factor trabajo, que es el que genera verdaderamente valor durante el proceso de producción, esté confinado, y si no hay incorporación de valor no hay, pues, incremento de riquezas. De ahí que en 2020 las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo sean negativas o en el mejor de los casos levemente superiores a cero. En el plano fiscal la situación es sumamente complicada, en virtud de que, después de la crisis financiera de 2008, muchos países tuvieron que acumular deuda para salir adelante, y nunca regresaron a los niveles de deuda baja que tuvieron previo a ella. Los Estados responsables que garantizan derechos fundamentales mediante sus presupuestos públicos, como lo es una educación, salud y servicios públicos de calidad, gastan una fuerte cantidad de recursos; pero la caída en la

producción, y, por tanto, de la recaudación tributaria –que es la mayor fuente de financiamiento de los presupuestos en época normal— dará paso a financiar los presupuesto sobre la base de deuda pública, lo cual hará que aumenten todavía más los niveles de endeudamiento. Tarde o temprano se tendrá que pagar con más impuestos y/o recortes en servicios públicos, por más que muchos gobiernos mencionen “que no había más que hacer”. A menos que haya un gran acuerdo internacional en el cual se condone parte de la deuda de los países, se den bajas considerables en los tipos de interés o un aplazamiento de pagos sustancial, tendremos Estados que verán cómo cada centavo del erario es disputado entre el pago del servicio de la deuda, gastar en servicios públicos o atender la deuda previsional –para ser muy concretos en el caso de El Salvador. El impacto económico de la crisis del Covid 19 comienza a visualizarse, pero los alcances definitivos de esta dependerán de si existen o no unos mecanismos de desconfinamiento seguro que evite rebrotes del virus. Hay que recordar que el trabajo es un derecho, y este derecho se ve limitado por los Estados para evitar la propagación del virus, pero la vigencia de este derecho en tiempos normales es la que permite la provisión de ingreso a los hogares para su manutención. Dicho de otra forma, y sin ambages, estamos también frente a que el excesivo confinamiento ponga en riesgo, después del Covid 19, la reproducción de la vida, ya que el hambre también mata. En este sentido, la FAO ha anunciado riesgo de hambruna por la caída en la producción mundial agrícola por el confinamiento”.

Oscar González Márquez (investigador social): “Una de las principales problemáticas en el área de la comunicación es la que tiene que ver con los contenidos desinformativos, falsos o engañosos (generalmente denominados como *fake news*, aunque la categoría que ya está siendo cuestionada). El riesgo que se corre en este caso es que esas noticias falsas pueden llegar a generar incertidumbre o pánico. Ahora bien, emparentado con esta información falsa, que generalmente procede de fuentes poco o nada confiables, está la información procedente de fuentes con cierto grado de credibilidad (para algunos más, para otros menos), que promueven las omisiones (no se nos dice todo o se insinúa

que se guarda algo), el alarmismo (dice algo exagerado y sin fundamentarlo) y la trivialización (lo serio es disminuido para dar paso a lo banal). Esta desinformación, además, se sostiene bajo el sustento de la llamada *coolture*, en la que el peso de lo dicho recae en la popularidad (y no en la argumentación); en la que funcionarios pasan a ser una especie de celebridades; en la que los ciudadanos asumen el rol de fans o se convierten en una especie de *zombies*".

Lucio Reyes (sacerdote): "Nuestro país, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por una sistemática violación a los derechos humanos de los sectores en condición de vulnerabilidad, por parte de los distintos órganos del Estado o de los grupos de poder que han actuado bajo su aquiescencia. Esto significa que existe una cultura de irrespeto a los derechos humanos, que se ha legitimado bajo diferentes causas, en nuestro caso la pandemia del COVID 19. En este sentido, se puede decir que: 1) ha quedado demostrado la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, en cuanto que, cuando está en riesgo un derecho, se limita o se violenta un derecho determinado, en este caso la vida y la salud; hay una afectación inmediata de los demás derechos, como la libertad, el trabajo, la alimentación etc. En este sentido, se requiere la asesoría idónea, para evitar un planteamiento simplista a la hora de limitar un derecho humano determinado. 2) En esta crisis se ha visibilizado la posibilidad de que comportamientos represivos afloren en la Fuerza Armada y en algunos miembros de la Policía Nacional Civil, recordándonos las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado por parte de las antiguas fuerzas armadas y los ex cuerpos de seguridad. En este corto tiempo, se ha sometido a una fuerte presión al Estado democrático, con indicios de violaciones a derechos humanos fundamentales. Por tal motivo, es necesario repensar el carácter y la naturaleza de instituciones que con facilidad muestran una vocación represiva. En este sentido, es necesario que nos preocupemos por nuestra policía; por su papel en la protección y cuidado de los ciudadanos. Una policía que fue creada, a partir de 1992, con el espíritu de ser una institución profesional, respetuosa y garante de los derechos humanos".

Carlos Mauricio Hernández (científico social): Aspectos problemáticos han aparecido a raíz de la polémica suscitada con Costa Rica, cuyo gobierno respondió a los comentarios vertidos por el presidente Nayib Bukele sobre el manejo de la pandemia en aquél país. Las voces ticas destacaron tres cosas dignas de consideración: respeto a la institucionalidad, respeto a los derechos humanos y una respuesta científica a la pandemia. Considero no es casual ni mera coincidencia la mención a estos elementos, sino reflejo que la respuesta tica fue fruto de un análisis con el que coincido. La respuesta del gobierno salvadoreño a la pandemia ha tensionado la institucionalidad. Que el presidente de la República desacate lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, que sus funcionarios no se sometan a procedimientos legales como la de asistir a un citatorio de la Fiscalía General de la República, la reciente actuación de la Asamblea Legislativa calificada por muchos como un “madrugón”, la intolerancia con el periodismo crítico, abusos de autoridad de agentes de la policía y de militares, entre otras expresiones de este tipo que se ha registrado durante toda la emergencia, son reflejo que El Salvador está en una grave crisis de institucionalidad. Por ahora no hay indicios de que, en el corto plazo, se cambiará de rumbo. Queda esperar si la presión internacional hace efecto o, si al terminar la cuarentena (o antes), se da una presión interna que obligue al Ejecutivo a respetar las reglas impuestas por la Constitución. También, hay indicios de prácticas antiderechos en distintos ámbitos estatales y sociales. No se puede identificar a los defensores de los derechos humanos de defender delincuentes y otros epítetos propios que ignoran aspectos teóricos básicos de derechos humanos. Las consecuencias de esa visión ya han generado ataques viscerales a defensores, nacionales e internacionales, de los derechos humanos. Para la imagen del país y para el bienestar de las mayorías, no es positivo que se incuben actitudes y comportamientos antiderechos, ya que ello es una vuelta a las prácticas y actitudes más nefastas del siglo pasado. Por último, quienes menos voz y poder de decisión han tenido frente a la epidemia son los miembros del sector científico. Ni siquiera el ministro de salud ha tenido

protagonismo para explicar de qué trata este nuevo virus y de las medidas que se deben tomar con base en la ciencia médica y otras ramas relacionadas. El silencio relativo de la comunidad científica ha dado la pauta a la desinformación generalizada y a decisiones precipitadas y erráticas. La defensa de la ciencia y del conocimiento científico está a la orden del día, al igual que el respeto de los derechos humanos, la tolerancia y la crítica pública.

Autoritarismo y economía

Estas reflexiones son de naturaleza teórica, aunque cada quien puede sacar las conclusiones que le parezcan más pertinentes. Con el autoritarismo, se trata de un fenómeno político, al cual la ciencia política le ha dedicado la debida atención. En América Latina, la categoría cobró vigencia al calor de la emergencia de determinados regímenes políticos que asolaron a la región a mediados de los años 60, del siglo XX, y que perduraron hacia 1989 e incluso los primeros años de la década siguiente. Se trató de los regímenes autoritarios que, en su ascenso y consolidación, descalabraron el andamiaje democrático que, con sus pros y sus contras, se había construido en las décadas previas. Fueron regímenes comandados por camarillas militares, entre las cuales sobresalían los “hombres fuertes” –los Pinochet, los Videla, los Stroessner— que, gozando de poderes ejecutivos extraordinarios, pretendían “salvar” de las garras del comunismo a sus naciones (y a la civilización occidental y cristiana), imponiendo su voluntad por encima de quien fuera.

En el quehacer de esos “líderes” y sus equipos de trabajo no sólo se ejecutaban acciones de carácter económico de envergadura (por ejemplo, políticas económicas orientadas a transformar los aparatos productivos o contratos millonarios con determinadas empresas), sino que se usaban recursos económicos extraordinarios en el funcionamiento del aparato del gobierno, compra de bienes y servicios, transferencias monetarias y cualquier rubro que lo requiriera, según el antojo o deseos que los principales líderes y sus colaboradores más cercanos.

Las partidas presupuestarias estaban a su disposición de manera absoluta, lo mismo que el uso discrecional de las mismas. Se daba por supuesto que así era como funcionaban las cosas y, además, no había un interés especial en examinar o cuestionar los manejos económicos de las dictaduras y los dictadores. Las miradas estaban puestas en su carácter e implicaciones políticas, no su dimensión económica. Para los simpatizantes, los privilegios de los que gozaban los dictadores y sus camarillas eran el precio a pagar por su tarea “salvadora”. Para los críticos, esos privilegios eran secundarios respecto de los efectos políticos perniciosos generados por las dictaduras. De alguna manera, críticos y simpatizantes coincidían en que la fuerza motivadora de los dictadores era el control y uso discrecional del poder político, y no tanto o principalmente enriquecerse o gozar de privilegios fuera de lo común..., aunque tuvieran a su disposición palacios para vivir o autos de lujo importados de Europa o EEUU, o que, al final de sus mandatos, se quedaran con fortunas millonarias en sus cuentas bancarias.

No es una mala visión de la relación entre dictaduras y economía ésta que entiende que lo prioritario en los regímenes autoritarios fue el uso y abuso del poder político, y que los beneficios económicos de los dictadores y sus camarillas llegaron como algo derivado de esos usos y abusos del poder político. Dicho de forma teórica, en las dictaduras históricas, los agentes políticos dictatoriales –provenientes de las filas castrenses— llegan a la economía como extraños a ella, y disfrutaban de sus mieles como algo que se adhiere a su quehacer político, que está regido por sus ambiciones políticas y su odios y paranoias ante el “cáncer comunista” y sus presuntas o reales amenazas el orden establecido.

En las transiciones a la democracia de finales de los años ochenta, las dictaduras fueron –parcialmente en opinión de muchos— desmanteladas. Otros agentes políticos se hicieron presentes en la conducción de las sociedades; algunos de ellos –bastantes, la verdad—

habían actuado en la etapa previa a las dictaduras y aportaron su experiencia y saber a quienes se hicieron adultos luchando contra las mismas. Los años noventa vieron a estos agentes no tan heterogéneos liderar las transiciones democráticas y las fases iniciales de la consolidación democrática. Entre tanto, desde las esferas empresariales se comenzaban a notar las ansias de algunas personas de los negocios por convertirse en dirigentes políticos. No fue fácil entender con toda claridad el porqué de estas ansias, aunque no faltó quien sospechara que se trataba, desde algunos grupos de poder económico, de acceder al Estado para favorecerse en sus negocios y a nivel familiar a partir de los recursos estatales (financieros y patrimoniales).

La historia posterior se conoce en países que han visto llegar al poder estatal a empresarios. En ellos, lo llamativo es que no es el control del poder político en sí mismo (ni su carácter o naturaleza) el que les interesa, sino la manera cómo éste pueda ser usado para favorecerse económicamente. A los dictadores históricos les interesaba contener la amenaza comunista que estaba, según ellos, agazapada en sindicatos, gremios, medios, partidos políticos, universidades, grupos comunitarios... Por eso, el establecimiento de un régimen dictatorial. A los empresarios convertidos en políticos les interesa aumentar la riqueza familiar y la de sus socios, y ven en el Estado un espacio que les permite manejos financieros inmensos para favorecerse. El régimen político es lo de menos, siempre que no sea un estorbo o, incluso, pueda ser una buena plataforma para esos manejos. Democracia de mercado, democracia populista, populismo autoritario, autoritarismo de nuevo tipo, socialismo autoritario... No importa, siempre que sirva y en el momento que sirva, lo cual depende de las coyunturas, las correlaciones de fuerza, el entorno mundial y la propia dinámica histórica (económica, social y política) de las naciones.

Esas diferentes nociones revelan la mutabilidad política que viven distintas naciones, no sólo en América Latina, en la última década. Lo

que no muta es el propósito de los empresarios convertidos en políticos. Por esto, resulta problemático encasillar (de forma rígida) a cualquiera de estos empresarios-políticos en categorías como “autoritario” y a sus gobiernos como “gobiernos autoritarios”, pues el día de mañana fácilmente pueden apelar a movilizaciones de calle para contener a sus rivales y pasado mañana pueden defender a capa y espada la separación de poderes y el republicanismo democrático.

En contextos así, la mirada debe afinarse. Hay categorías que son explosivas, como “autoritarismo” o “autoritario”, pero deben ser usadas con delicadeza para que no pierdan su sentido descriptivo y explicativo, sobre todo cuando se aplican a una forma de gobierno o a un régimen político. Hay que tener cuidado también en ver las dinámicas recientes, suscitadas por la crisis del coronavirus, como una “estrategia” “diabólica” –en la cual el coronavirus sería una pieza más– para imponer un “orden autoritario” a nivel mundial. La evidencia aportada por distintas naciones refuta esa tesis general.

En fin, hay que ser cuidadosos y prudentes. Y en el caso de la situación actual, no se debe comer ansias: hay que tener los datos más consolidados que se pueda y examinar el desempeño de los gobiernos de manera global y en los rubros esenciales, una vez que termine la crisis en la salud pública... y dar seguimiento a su desempeño posterior, en la recuperación de la economía y el resguardo del bienestar social. No se tiene, en estos momentos, ningún capítulo cerrado. Precipitarse para cerrar alguno, con juicios concluyentes, no parece ser el mejor camino a seguir por sociólogos, economistas, politólogos y demás estudiosos de la sociedad.

Después del coronavirus

A mediados de los años ochenta, cuando la guerra civil estaba a pleno vapor, el P. Ignacio Ellacuría reflexionaba, con quienes éramos sus alumnos, sobre lo complicada que sería la situación del país una vez finalizada la guerra. Una de sus muchas preocupaciones tenía que ver con los retos que plantearía la reconstrucción del país, la cual –desde su punto de vista– iba a estar fuertemente condicionada por lo que se tuviera en pie –o estuviera destruido– cuando terminaran las hostilidades. La interrogante inevitable para quienquiera que ganara la guerra –porque eso era lo que estaba en el primer plano hacia 1987– iba a ser: ¿con qué se cuenta y con qué no se cuenta para la reconstrucción del país?

Con varios colegas y amigos, estudiosos de la realidad nacional, hemos estado conversando sobre distintos temas relacionados con la actual situación suscitada a raíz del impacto sanitario del coronavirus. Nos parece que una pregunta semejante a la que Ellacuría visualizaba para el momento en el cual terminaría la guerra civil, es sumamente pertinente en estos momentos, cuando –las opiniones más optimistas– apuestan por un final cercano de la emergencia provocada por el coronavirus. Una pregunta obligada que hay que plantearse desde ya, y en torno a la cual se tiene que meditar detenidamente, es: ¿con qué se cuenta y con qué no se cuenta para hacer frente a los desafíos que se tendrán una vez pase la emergencia sanitaria? Cuatro colegas nos animamos a ofrecer una respuesta provisional a dicha pregunta, a la espera de que este esfuerzo se convierta en una invitación para que otros intelectuales y académicos del país ofrezcan las suyas con más fundamentación, rigor y profundidad.

Luis Armando González (profesor universitario): para encarar los desafíos postcrisis del coronavirus contamos con las energías y ansias de supervivencia de amplios sectores sociales. No idealizo a los salvadoreños (soy uno de ellos); sé que tenemos muchos defectos y fallas, y que siempre se tiene que contar con ambas cosas. Sin embargo, si algo abunda en este país son las ganas de vivir y hacer lo que sea para conseguirlo. Si se canalizan bien esas energías y deseos de vivir, se puede tener un impacto positivo en el país que tenemos que construir una vez que pase la crisis en la salud pública. De ahí la importancia de no dar la espalda a la mayor parte de la población, pues es uno de los pilares más valiosos para que El Salvador salga adelante. No se tiene que olvidar que la riqueza se crea por el trabajo efectivo, real, de esa mayoría, en las mil y una actividades a las que se dedican quienes la conforman. El velo ideológico que hace creer que el “sector productivo” está integrado exclusivamente por los empresarios debe ser levantado; los trabajadores y trabajadoras son quienes generan valor real (y riqueza) con sus actividades en fábricas y propiedades agrícolas o agropecuarias. Esto no debe olvidarse. ¿Con qué no contamos? En el corto y quizás mediano plazo no contaremos con una cooperación internacional que apuntale o incida significativamente en el desarrollo del país. Las finanzas internacionales están en una situación de replanteamiento de sus prioridades (y exigencias) que ya hacen difícil su acceso para una nación como la nuestra. Los países que, en otros momentos, no dudarían en ser solidarios con El Salvador tienen serias dificultades, también debido al coronavirus. Así veo la situación, en esta respuesta muy somera y tentativa a la pregunta arriba planteada.

Óscar González Márquez (comunicador e investigador social): Posterior al Covid-19, uno de los desafíos es la crisis hídrica. Antes ya lo era, y hoy lo será aún más. Con el agua se satisfacen necesidades auténticas. Parte de la población aún tiene problemas para acceder al agua en la cantidad y calidad justas. El agua es un derecho. La escasez

de agua se está agudizando; esto conlleva a que ese derecho sea cada vez más vulnerable. Pero el agua no sólo es clave para los seres humanos, sino que también para la biodiversidad y los ecosistemas. Es decir que no puede hablarse de un derecho al agua, sin hablar de la obligación que se tiene con las demás especies biológicas y con el entorno. La gestión hídrica debe ser, entonces, sustentable. Hay que tomar en cuenta, para abordar estas temáticas, que existe *desigualdad hídrica*. Por un lado, está la asimetría en el acceso: unos sectores son privilegiados y otros marginados con respecto a contar con el recurso. La otra asimetría es con respecto al impacto del daño ambiental; quienes son más susceptibles de ser afectados por el mismo -por contaminación, por sequías, por inundaciones- son generalmente los sectores desfavorecidos socialmente. ¿Con qué contamos? Por un lado, con instituciones y leyes en materia ambiental, así como con administradores locales de agua que, sobre todo en las zonas rurales, se han encargado de administrar el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de los habitantes en sus respectivas comunidades. Contamos, además, con propuestas o anteproyectos de Ley de Agua, como la Ley General de Aguas. ¿Qué nos falta? Con respecto a los puntos arriba señalados, primero nos falta retomar una discusión seria en torno a la Ley de Agua. En esa discusión no deben primar los intereses económicos, sino los sociales y ambientales. Falta reevaluar la *privatización de facto* que ya ocurre en el país respecto al recurso hídrico. Esto se relaciona con la institucionalidad y la legislación ya vigente. De nada sirve que existan si responden a intereses económicos que, bajo la lógica de “desarrollo” y “progreso”, violentan el derecho al agua y destruyen las fuentes de agua. Es decir, se trata de tener institucionalidad más fuerte, con objetivos sociales y sustentables claros; así como del cumplimiento de la ley, fundamentado en la *justicia ambiental*. No solo falta fortalecer las instituciones públicas, sino también dotar a los actores locales --principalmente a los que tienen fines

comunitarios-- de mayores recursos --tanto financieros como técnicos-- y de capacidades, habilidades y conocimientos para hacer frente a la crisis hídrica. Estos, aún con sus limitaciones, han hecho un gran esfuerzo en la gestión hídrica.

Carlos Hernández (docente e investigador universitario): la universidad no sólo es un centro de formación profesional encargado de dar títulos a una población, que avalan conocimientos técnicos y marcos de conducta propios de cada especialidad. La universidad tiene un desafío constante frente a la sociedad en la que está inserta, tanto para ser conciencia crítica como para proporcionar soluciones de carácter científico y humanista. En este sentido, el país cuenta con todo el potencial de la Universidad Nacional de El Salvador. Esto implica al menos dos aspectos. El primero, la exigencia ético-política puesta adentro de la universidad pública. Es indispensable que, desde su interior, las diferentes unidades se pongan en función de estudiar de manera científica todos los efectos de la emergencia y sus consecuencias. Al tener estudios o diagnósticos lo más rigurosos posible, se pueden generar planes o proyectos que sean entregados a los encargados de los tres poderes del Estado. Segundo, el Estado debe de abrirse y valorar lo que proporcione la Universidad de El Salvador dado el soporte técnico y científico que respaldaría las propuestas o proyectos universitarios. No es aceptable que, en la actual coyuntura, tenga mucho más peso la Escuela Superior de Economía y Negocios (que responde a una confesa visión neoliberal) que las unidades de Economía, Matemática, Salud o Ciencias Sociales de la universidad pública. Está claro que no se cuenta con la voluntad política que de espacio y voz a la universidad nacional. Pero es necesario también que desde ella se trabaje también por hacerse escuchar con argumentos propios del mundo académico para incidir positivamente en la realidad nacional.

Rommel Rodríguez (economista): En materia económica, se debe apuntar hacia un plan de desconfinamiento que tenga por eje la

suficiencia de ingresos para que los hogares, antes que las empresas, puedan enfrentar la contracción o recesión de la economía. Esto es algo que aún no ha sucedido, pero las proyecciones económicas indican que sucederá, y será tan duro como el confinamiento, pues significa que la actividad económica, más tarde o más temprano, se irá desacelerando cada vez a mayor velocidad para registrar una pérdida de riqueza a nivel agregado, de ingresos de los hogares, de aumento de desempleo y, lamentablemente, también aumento de la pobreza. Bajo esta situación, los pocos recursos que se obtengan para financiar el presupuesto deben ser para garantizar los derechos fundamentales de las familias: educación, salud, vivienda, alimentación, por no decir otros. Esto supone que el presupuesto estatal debe dar un giro importante en su configuración que ahora se concentra en el tema de la seguridad; este debería pasar ahora si definitivamente a un segundo plano. Además, volver a instituir el papel del FISDL como entidad capaz de atender las demandas de las familias de recibir transferencias condicionadas. Estos recursos son de suma relevancia para atender los escollos de la crisis y para mantener, aunque sea levemente, la demanda agregada. En el ámbito privado, el tema económico ausente en las discusiones es el tratamiento de la informalidad que caracteriza a más del 50% de nuestro aparato económico. En este caso, estamos hablando de un grupo de personas que vive prácticamente del flujo de ingresos diarios y que van como se dice popularmente “coyol quebrado, coyol comido”. Deben existir recursos a tasas bajísimas de cero y uno por ciento para que este tipo de negocios pueda levantarse nuevamente. Son este tipo de negocios y sus trabajadores, fuera del sistema de protección social, los más vulnerables, y que el Estado debe establecer una red de protección social, pues de lo contrario verán avanzar su condición de vida en una situación de pobreza extrema. Finalmente, a un año de gobierno, es pertinente que el Ejecutivo presente en este contexto un plan de acción de la economía nacional, pues las crisis también son un espacio para la

reinención. Cambiar los patrones de consumo, de inversión, de gasto público, pueden ser elementos determinantes para el resurgir de la economía salvadoreña después del Covid 19. Este plan ya no puede gravitar fuertemente en el turismo, como previa anteriormente el Ejecutivo, ya que esa actividad estará seriamente afectada mientras no se encuentre un remedio para el coronavirus. Las actividades más dinámicas, después del desconfinamiento, pueden indicar las tendencias previsibles a seguir, pero la alimentación, la vivienda, la salud y la educación deberían estar garantizados mediante un sistema de compras públicas eficaz y transparente. Ha llegado la hora de pensar, pues, en una cesta de bienes primarios a la que debe tener acceso todo salvadoreño; ahí se juegan sus derechos fundamentales, principalmente el derecho a una vida digna.

Desvaríos de la razón pura

Inmanuel Kant (1724-1804), qué duda cabe, es uno de los grandes de la filosofía. Supo poner el acento en aspectos centrales de la naturaleza humana; entre otras cosas, en los desvaríos en los que cae la mente de las personas cuando su capacidad de razón comienza a operar a la libre, sin ningún control por parte de lo que indica la realidad externa a su subjetividad. Son los desvaríos de la “razón pura”, como acertadamente los calificó el filósofo de Königsberg. Los intelectuales, las gentes de ideas, son particularmente procolives a caer en las trampas de la razón pura. Y eso sería poco relevante si esos “ejercicios intelectuales” –que consisten en realizar ideaciones a la libre, sin control alguno por parte de lo real– se quedaran restringidos al ámbito privado; lo que sucede es que trascienden a la esfera pública, influyendo en círculos amplios de personas, que se ven contaminadas por el hábito de los juegos de ideas, engarzadas de mil maneras, sin más orden que el impuesto por la propia secuencia de pensamientos.

Qué se la va a hacer: esos desvaríos han acompañado, desde siempre, al *Homo sapiens*. Son los que alimentan sus “ilusiones metafísicas”. Se tiene que decir que este “mono desnudo” también ha inventado los correctivos a esos desvaríos –la ciencia es el mejor correctivo–, pero su atractivo es inobjetable. Así, es difícil que muchos se resistan a los “juegos de ideas”, a las ideaciones, que plantean que la coyuntura generada por el coronavirus es la antesala al “fin” del capitalismo o, como dicen los más más metafísicos, al fin de una Era. Hilvanan palabras y argumentos para “demostrar” que el “sistema capitalista” se está resquebrajando de manera inexorable y que de las “ruinas” de un “sistema” que se derrumba está naciendo algo

absolutamente nuevo. Al leer o escuchar a quienes hilvanan tales ideas y argumentos, no puede menos que concluirse que están totalmente seguros de lo que afirman; no hay resquicio para la duda, para el es probable, para el quizás: el sistema capitalista se derrumba y una nueva Era está naciendo.

¿Y los datos de la realidad? ¿Y las dinámicas reales que, en el ámbito económico, están operando y que están poniendo en marcha estrategias bien definidas para implementarse una vez que pase la coyuntura suscitada por el coronavirus? Esos datos y la referencia a esas dinámicas reales –las bancarias y financieras, por ejemplo– no aparecen en las argumentaciones que, por ello, constituyen un ejercicio de la razón pura, del que Kant nos previno en su momento. Los datos de la realidad, que son accesibles a cualquiera que esté dispuesto a escapar de los marcos de la razón pura, indican que los bancos no han dejado de operar (y que al aportar préstamos a los Estados se fortalecen como bastiones de la economía), lo mismo que las grandes corporaciones de Internet y de telecomunicaciones (en las que difunden, vaya paradoja, los mensajes del fin de una Era): aquéllos y éstas son ejes fundamentales del capitalismo neoliberal globalizado, actualmente vigente y operante. A lo mejor, lo que podría anticiparse es un reajuste importante en algunos rubros de ese capitalismo neoliberal globalizado. Pero no hay evidencia empírica que permita adelantar o proponer, como conocimiento válido, su derrumbe total y el surgimiento de una nueva Era.

No es sano, desde criterios cognoscitivos, acercarse a la situación actual del país y del mundo arrojados en la razón pura. Esta es un impedimento para conocer y explicar los resortes y mecanismos de la realidad, y una grave limitación para incidir con alguna eficacia en esos resortes y mecanismos. Las herramientas de las ciencias naturales y sociales (estas últimas “descontaminadas” de las ilusiones metafísicas) son el mejor recurso para acercarnos a la realidad actual, con su

particular complejidad. Quizás el conocimiento y las herramientas científicas no sean capaces de saciar la sed de un “deber ser” que agobia a muchos, pero nos permiten encarar con bastante solvencia el “ser”, que es donde las personas reales realizan su vida.

Cabe sospechar que quienes están convencidos de que el capitalismo neoliberal globalizado se está derrumbando, y que una nueva Era está naciendo, confunden sus deseos con la realidad, e incluso es posible que crean que al desear ese derrumbe y lo nuevo que vendrá, están contribuyendo a que eso suceda. Esto es algo propio de las ilusiones metafísicas: si deseamos algo, sucederá. Pero no: la realidad (natural y natural-social) no se configura a partir de los deseos, sino de *mecanismos reales* que física, química, biológica, económica, política y culturalmente la dinamizan.

Desear que el capitalismo neoliberal globalizado se derrumbe está bien; desear un nuevo orden, más humano, justo y solidario, es igualmente bueno. Que eso esté sucediendo efectivamente en la realidad es harina de otro costal. Hay que probarlo con datos suficientes y de gran envergadura, pues se trata del planeta en su conjunto el que estaría viviendo su renovación. Los desvaríos de la razón pura no son el mejor camino para conseguir esas pruebas ni mucho menos las pruebas en contra que, como anotó ese postkantiano que fue Karl Popper, son lo fundamental en el proceder científico. Es recomendable no gastar energías en desvariar; es mejor gastarlas en pensar científicamente la realidad nacional y mundial, aunque quienes hacen alarde de sus ilusiones metafísicas le ponen un toque pintoresco al debate de ideas.

San Salvador, 1 de junio de 2020

El Salvador: números para orientarse

Los números son de gran utilidad. Por supuesto que se puede jugar con ellos, pero también se los puede usar para ordenar las cosas y el pensamiento; y lo que es sumamente relevante: sirven para relacionar y establecer las proporciones entre diferentes hechos o fenómenos. Quienes ignoran los números tienen enormes dificultades para establecer magnitudes –cuán grande o cuán pequeño es algo– y para relacionar y dimensionar adecuadamente esas magnitudes. Por instinto, los seres humanos queremos saber, siempre que sucede algo, su “cuánto”, es decir, su número, aunque esa vocación natural muchas veces sea soterrada por hábitos y costumbres que obran en contra suya y que hacen énfasis en el “quién” o en el “cuál”. Pese a estos hábitos y costumbres, la exigencia de poner número a la realidad es insoslayable. Y la pertinencia de ello es evidente en nuestro país –y por supuesto, en el resto del mundo.

He aquí algunas cifras –todas correspondientes a 2020, accesibles en una búsqueda rápida de Internet y sujetas a las precauciones que se debe tener cuando es difícil verificarlas o cotejarlas con otras fuentes— que pueden ayudarnos a ordenar un poco las ideas y a orientarnos en una situación no exenta de complejidad. Comencemos con los datos del momento, los relativos a las muertes causadas por el coronavirus, a la fecha de redactar estas líneas, en El Salvador. La cifra relevante es el número de fallecidos: 46. Un segundo número relevante está referido a los homicidios, y aquí sólo se anota el dato que corresponde a un día en concreto, el 24 de abril de 2020: 23 homicidios. En tercer lugar, se tiene el dato relativo a las muertes causadas por el impacto de la tormenta Amanda: entre 11 y 14 fallecidos. Y, por último, las muertes registradas

por accidentes de tránsito entre enero y febrero: entre 14 y 17, 11 de las cuales se dieron un mismo día al volcar un autobús.

Con papel y lápiz, sólo en los rubros y casos mencionados, la suma de salvadoreños muertos en el año 2020, de enero a mayo (o al 2 de junio) es de unas 100 personas. Podemos jugar con esos números y sacar el promedio mensual: 100 entre 5 (enero-mayo), lo que da 25 muertos como promedio. Y se puede sacar una estimación diaria: 0,66 muerto por día. Es obvio que cuando se hacen juegos de estos, se cae en artilugios que confunden a la gente, pues las personas no mueren a medias. ¿Se pueden hacer otras cosas interesantes a partir de los números anteriores? Por supuesto que sí.

Lo primero, y a todas luces más importante, es que se trata de pérdidas de vidas humanas que hay que lamentar. Además, lo común a esas muertes es el dolor de quienes las padecieron, lo cual las hace más trágicas; y eso con independencia de las circunstancias propias de cada una de las personas que murieron, ya sea por la infección del coronavirus, el vuelco de un vehículo, una correntada o el disparo de un arma de fuego.

Dicho lo anterior, y al revisar los números, si se los ve en bruto, resalta la cifra de muerte por coronavirus como la más alta, que dobla a la de homicidios. Faltan otros números, para entender mejor las proporciones. Y estos son los números de días abarcados por ambas cifras, y las otras. Los 46 fallecidos por coronavirus cubren un periodo de alrededor de dos meses, iniciando cuando se informó de la primera muerte, el 31 de marzo de 2020. En las naciones europeas se fue reportando el número de fallecidos diarios; en El Salvador no, pero se puede colegir que, en los 60 días transcurridos desde la primera muerte, hubo días sin pérdidas de vidas humanas.

En cuantos al dato de los homicidios, corresponde a un día. O sea, los muertos en un sólo día del periodo enero-mayo fueron la mitad de

los tenidos en dos meses por la epidemia del coronavirus. Una mirada fría y desapasionada permite ponderar las dimensiones de ambas tragedias. Los números relativos a la tormenta Amanda corresponden, a lo más, al impacto de dos días de lluvia, con un saldo de entre 11 y 14 personas muertas. O sea, la cuarta parte de las muertes causadas por el coronavirus. Y, por último, sobre los datos de las muertes por accidentes de tránsito –entre 14 y 17– cabe decir que 11 de esos muertos se tuvieron un mismo día, es decir, casi la cuarta parte de los fallecidos por coronavirus. Dicho de otra forma, mientras que en 60 días murieron en el país 46 personas por coronavirus, en uno-dos días murieron 51 personas (11 en un accidente de tránsito, 17 por el impacto de Amanda y 23 por violencia homicida).

Esos números, ciertamente, no son para alegrarse. Y lo que es peor: las cifras podrían ser más altas. Los esfuerzos estatales y sociales-familiares para contener el avance del virus han sido extraordinarios. Las medidas de confinamiento tienen casi tres meses de vigencia y es indudable que han contribuido a reducir las posibilidades de contagio. En cuanto, al combate del crimen, el empeño en la seguridad puesto por el actual gobierno permite sostener que, sin el mismo, las cosas podrían ser peores. También se deben reconocer los esfuerzos y recursos invertidos en la regulación del tráfico por carreteras y en la prevención de desastres.

Una conclusión que se impone es que los números apuntan a que la violencia criminal, los desastres socio-naturales y los accidentes de tránsito han sido mucho más letales, en este periodo, que el coronavirus, pues en menos días han causado más daño. Y en uno de esos fenómenos –la violencia criminal– se ha contado con una decidida intervención estatal para contener su incidencia negativa en la sociedad. Esto indica que quizás, cuando pase la epidemia, serán esos asuntos –junto con otros, que aquí no se han comentado– los que deberán ocupar un lugar central en la agenda de discusión pública y privada. La moraleja es la

siguiente: si pese al enorme y decidido esfuerzo estatal-gubernamental por contener la epidemia del coronavirus ésta ha dejado, en 60 días, 46 muertos, y si pese al decidido esfuerzo estatal-gubernamental por contener a las estructuras criminales estas pueden dejar 23 muertos en un día, la letalidad del crimen es abrumadoramente superior a la del coronavirus. Y si se los dejara a sus anchas, seguramente el crimen seguiría llevando la delantera. Después de todo, también tiene un comportamiento de epidemia.

El Salvador: los pasos a seguir

Todo parece indicar que estamos en los momentos finales de la emergencia suscitada por el coronavirus. En este sentido, es más que urgente centrar la atención en otros problemas nacionales, unos derivados directamente del impacto de la epidemia, y de las medidas que se implementaron para contenerla, y otros que son previos a ella – por ejemplo, el deterioro medioambiental –, pero que igualmente no pueden (o no deben) obviarse. Tres colegas, con formación en distintas disciplinas de las ciencias sociales –y dando continuidad a un ejercicio de reflexión colectiva iniciado en el marco de la crisis en la salud pública d 2020–, nos hemos hecho la siguiente interrogante: una vez que la emergencia sanitaria haya pasado, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir, desde las instancias de decisión estatales y empresariales, para encarar de mejor manera los problemas nacionales, principalmente los generados por la epidemia de coronavirus? A continuación, se recogen las respuestas de cada uno de los miembros de este equipo de reflexión.

Luis Armando González (profesor universitario): En mi opinión, hay dos pasos a seguir, si se quiere incidir, con cambios significativos, en el rumbo del El Salvador, en la postepidemia. El primero es realizar un buen diagnóstico de cómo ha quedado la sociedad salvadoreña, especialmente los sectores más vulnerables, como consecuencia de la emergencia y del confinamiento. Se requiere un diagnóstico socio-económico, sanitario y psico-social que sirva de punto de partida para el diseño de estrategias de incidencia, estatales y privadas, en orden a atender las principales necesidades de la población y también para generar una dinámica económica que haga sostenible las políticas de bienestar social que el país demanda. Aquí se impone la conformación de un equipo de trabajo, formado por científicos sociales –

experimentados y profesionalmente competentes—, que elabore ese diagnóstico siguiendo, en exclusiva, criterios de investigación científica. El otro paso consiste en diseñar un mecanismo de concertación social, económica y política que permita, sin excluir a ningún sector relevante de la vida nacional, tomar las mejores decisiones de cara al bienestar colectivo y el futuro de El Salvador. Ya hay adelantos en este ejercicio concertador, pero debe instalarse un espacio mayor envergadura del cual salga la ruta a seguir por nuestro país en los siguientes 25 o 30 años. Ruta que, obviamente, no *debería ser* la misma que se ha seguido desde 1989 hasta el presente. Claro está que se puede decidir seguir como siempre, de lo cual —por cierto— no habría que extrañarse, pues es lo más fácil para quienes, de una u otra forma, han encontrado un acomodo, y sendos beneficios, en el orden establecido desde finales de los años ochenta. Sin embargo, es bueno que los tomadores de decisiones en el país se hagan cargo de esta afirmación del teórico de la economía de la conducta Richard Thaler: “muchos de los problemas más espinosos de la sociedad, desde el cambio climático hasta los conflictos del Oriente Próximo, podrían resolverse sólo si las partes involucradas pudieran encontrar la forma de comprometerse sobre la manera de proceder en el futuro” (R. H. Thaler, “Compromiso”, En J. Brockman (Ed.), *Eso lo explica todo*. Barcelona, Centro de Libros PAPF-SLU, 2019, p. 128).

Rommel Rodríguez (economista): En el ámbito económico, uno de los puntos por los cuales reiniciar sería retomar el plan (o agenda económica) que el Ejecutivo prometió presentar a un año de su gestión, para tener una mejor orientación de cuáles son sus apuestas económicas. Algo de ello hay —aunque insuficiente— en los fondos de reconstrucción económica por el Covid 19 y la tormenta tropical Amanda que han proporcionado los organismos internacionales y la emisión de deuda prevista en los mercados internacionales: dinero para la empresa privada, para las alcaldías, para unidades económica informales y

cotizantes del ISSS. Sin embargo, la programación económica debe ir más lejos para mostrar cómo, a largo plazo, los sectores económicos afectados se volverán a apuntalar. Por ejemplo, el gobierno buscaba potenciar el turismo en la franja costera, pero las circunstancias indican que el turismo se reanudará lentamente. En esa agenda económica deben ser prioritarios los nuevos pobres debido a la contracción económica y a la falta de ingresos postcovid 19, y cómo el Estado atenderá sus necesidades básicas. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que la pobreza podría aumentar en un 10%, lo cual exige una red más fortalecida de servicios sociales básicos para proteger sus derechos. ¿Cómo hará el gobierno y cuánto espacio fiscal tendrá con un alto nivel de deuda pública? Precisamente, parte de la respuesta está en la nueva programación financiera y fiscal de las obligaciones del país, porque el pago del servicio de deuda está a la orden del día y restan recursos para atender necesidades sociales urgentes. En este contexto, sin duda será pertinente abordar el tema de una fiscalidad integral. Una fiscalidad que contribuya a la equidad y a la eficiencia del gasto gubernamental. Un tema de suma relevancia y más vital que la sostenibilidad fiscal es la sustentabilidad ambiental. Los desastres provocados por la tormenta tropical Amanda han puesto de nuevo al descubierto las grandes vulnerabilidades territoriales, especialmente en zonas urbanas marginadas y en las zonas rurales. Esto es resultado, entre otras cosas, de un desarrollo económico desordenado, mediado principalmente por intereses privados que persiguen rentabilidad en el corto plazo. Es necesario fortalecer las regulaciones ambientales para que la economía, anclada exclusivamente en la doctrina del mercado total, no moldeé nuestro medioambiente, al menos no con la fuerza con lo que lo ha hecho en los últimos años, poniendo en riesgo la vida de muchos, especialmente los más pobres. Como punto de partida, se debe atender a los sectores económicos clave para apoyar el despegue del país y se deben reprogramar las finanzas públicas para atender a los más

pobres; lo mismo que potenciar una agenda de desarrollo económico con sustentabilidad ambiental: estos son los ejes orientadores para articular estrategias más amplias para la reconstrucción de El Salvador.

Oscar González Márquez (comunicador e investigador social): Han sido meses de reacciones, discusiones y decisiones focalizadas, principalmente, en responder a la pandemia y en los impactos que esta ha tenido en las dinámicas sociales. El panorama posterior a la misma, que se empieza a trazar desde ya en los procesos de reanudación paulatina de actividades, se presenta abrumador y complejo. La pobreza y la desigualdad –dos de los grandes males nacionales, junto a la inseguridad y la violencia— han aumentado, en un país donde las brechas económica, social y cultural ya eran amplias. Pero hay una brecha que también no debe ser perdida de vista: la ambiental. Y es que la dimensión ambiental de la desigualdad tiene que ser tomada en cuenta. Por un lado, está la asimetría respecto al acceso y uso de los recursos naturales, que desfavorece y margina a determinados sectores de la población. Además, el deterioro, daño y destrucción del entorno repercute, sobre todo, en quienes son más vulnerables. No solo porque los afecta de manera directa, generándole pérdidas materiales y de vida, sino que, *a posteriori*, se encuentran en una situación de desprotección y pobreza mayores. Si buscar acciones contra la pandemia fue entendido en términos de urgencia, en el apartado ambiental es el cambio climático el que requiere –con cierto apremio, aunque se cuenta con más tiempo para actuar que con el coronavirus— de reflexiones y acciones firmes. No hay una receta definitiva ante el cambio climático, pero sí hay puntos en los que instancias públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, pueden aportar para generar condiciones que disminuyan, y hasta es posible que se pueda evitar, su impacto negativo. Un punto sustancial es que se deben reducir, de manera drástica, las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer paso es revisar en profundidad el conocimiento vigente en este aspecto;

si se encuentran vacíos en conocimiento, hay que llenarlos. Luego hay que impulsar acciones para incidir en las actividades que más generan emisiones, como la industria y la agricultura. Se debe reforzar las leyes para que doten al Gobierno de más herramientas para regular las emisiones; y este debe esforzarse por el cumplimiento de las leyes existentes en materia ambiental y las actualizaciones que se hagan a las mismas. Esta reducción requiere, asimismo, de un cambio cultural y en la visión de mundo que se tiene. Hay que dejar de pensar la relación con la naturaleza en términos de dominio y de explotación descontrolada de los recursos. La sustentabilidad –con sus diversas esferas- debe volverse un aspecto central de esa relación; y debe convertirse en una meta de la gestión pública y privada. Las prácticas sustentables deben interiorizarse.

San Salvador, 14 de junio de 2020

Confiar en las personas

En un primer momento, pensé en iniciar este texto con las siguientes líneas: “En situaciones como la actual emergencia, los dirigentes del país, en las esferas políticas, empresariales y culturales, deberían confiar más en la gente”. Enseguida, caí en la cuenta de que tenía que corregirme, pues creo que en el “confiar más en la gente” la palabra “más” está de sobra y la palabra “gente” diluye la dimensión individual-personal de los ciudadanos: en situaciones críticas para la sociedad, de lo que se trata es de confiar –así, sin más– en las personas. Habrá quienes opinen que no, dada la condición de minoría de edad que asignan –salvo a algunos privilegiados– a todos los miembros de la sociedad, pero no tiene por qué dárseles la razón en ese punto. Expongo mis argumentos.

Es evidente que, en estos momentos, el control de la epidemia del coronavirus descansa en el autocuidado y la autoprotección por parte de las personas. Las restricciones y las presiones estatales han disminuido sensiblemente, y, en ese sentido, es en la responsabilidad individual en donde recae la contención de la epidemia. Cualquiera pudo haber vacunado que, con el relajamiento de las medidas de control gubernamentales, los salvadoreños iban a salir a las calles con la más absoluta despreocupación por su salud y la de sus semejantes. Hasta ahora, aunque los más desconfiados no lo crean, no ha sido así.

En diferentes lugares de San Salvador –es probable que suceda lo mismo en otros municipios y departamentos– se ve a las personas –en su mayoría, humildes y de extracción popular– debidamente protegidas con sus macarillas, guardando la distancia entre ellas y limpiando sus manos con alcohol gel. No deja de ser conmovedor el ver a salvadoreños de condición popular tan concentrados en cuidarse a sí

mismos, no por una presión externa, sino por convicción y responsabilidad.

En estos días, he tenido un contacto de primera mano con estos salvadoreños. No he podido evitar pensar en que los dirigentes nacionales tuvieron que haber confiado, desde el principio de la crisis, en las capacidades y responsabilidad de sus conciudadanos. Quizás debieron informarles, lo más apegados a lo que se conoce científicamente sobre el coronavirus, de la naturaleza del virus, su impacto en la salud y sus mecanismos de propagación. Sin exagerar los peligros, pero también sin minimizarlos. Y, sobre todo, haciendo que cada cual asumiera su responsabilidad en el cuidado de su salud. No se trata de un imposible, como lo puede constatar cualquiera que se tome la molestia de observar, en estos días, a sus semejantes.

Queda como una enseñanza para futuras crisis: hay que confiar en las personas; hay que confiar en su responsabilidad, capacidad de juicio, previsión y compromiso cuando lo que está en juego es su propia vida y la de sus seres queridos. Después de todo, así como quienes dirigen a la nación –en la política, la economía o la cultura– son capaces de entender y ponderar los problemas y buscar soluciones –y por supuesto, siendo falibles y equivocándose–, también tienen esa capacidad las personas que son dirigidas por aquéllos. De hecho, hay una igualdad fundamental, en capacidades, uso de la razón y discernimiento, entre dirigentes y dirigidos. Olvidar esa igualdad irrenunciable es contraproducente, pues termina generando desconfianza en las capacidades y responsabilidad de otros seres humanos.

El instinto de libertad

No es inusual, al realizar una discusión sobre la libertad, referirse al enfoque filosófico que distingue entre libertad positiva –es decir, como capacidad de autodeterminación— y libertad negativa –es decir, como ausencia de constreñimientos—, lo cual no está mal si lo que se busca es dar razones para justificarla. También se pueden ofrecer razones para la libertad como derecho fundamental e incluso especificar el listado de libertades particulares que las sociedades modernas, democráticas y de derecho, asumen como inviolables. En la misma línea, se puede argumentar ideológicamente en favor de la libertad y traducir esos argumentos en compromisos político-partidarios. Todo esto se hace, y se seguirá haciendo, pues a los seres humanos, como animales parlantes que somos, nos gusta dar razones de todo lo que tiene que ver con nuestra vida y felicidad. Y en la libertad se juegan asuntos vitales para los miembros de la especie *Homo sapiens*.

Ahora bien, los argumentos y las razones (de tipo filosófico, ético-jurídico o ideológico) son posteriores a la dimensión primaria de la libertad, que hunde sus raíces en la naturaleza biológica de los seres humanos. Antes de cualquier elaboración conceptual que hable de ella, hay un *instinto de libertad* que, como tal, es preteórico; y que, aunque no se tenga ningún argumento o concepto sobre el mismo, está presente en los individuos, como parte ineludible de su vida. Está presente como una compulsión que impele al organismo humano a rechazar constreñimientos y coerciones, y a buscar las condiciones biológicamente óptimas –de homeostasis— que favorezcan su ejercicio, su despliegue, su vigencia biológica. Uno de los despliegues de ese

instinto de libertad es el movimiento, el desplazamiento y la actividad física.

Esta característica del instinto de libertad es un legado de una evolución –del género humano y sus ancestros– marcada por la migración permanente y la búsqueda y ocupación de nichos de supervivencia que, desde la salida de África de hace unos 150 mil años, aún no ha cesado en el presente. A lo humano se nos ha definido de muchas formas: animales pensantes, animales que hablan, monos desnudos y monos parlanchines, entre otras. No es frecuente que se nos defina como “animales caminadores”, pero también lo somos y desde líneas genéticas ancestrales que dejaron su marca en nuestros genes, en nuestros cuerpos y en nuestros instintos.

Uno de esos instintos es, precisamente, el de la libertad. Como se dijo, sale a relucir, al margen de las ideologías o concepciones filosóficas de los individuos, cuando éstos se sienten constreñidos en la posibilidad de desplegarlo, por ejemplo, en algo tan básico como la capacidad de desplazarse espacialmente o de realizar actividades físicas. Es ese instinto de libertad en las personas el que fue lacerado por las prácticas represivas y de tortura realizadas durante los regímenes dictatoriales y totalitarios. De hecho, la inmovilidad –de los presos políticos en las cárceles y de los ciudadanos fuera de sus hogares– fue una medida represiva infaltable en esos regímenes, aunque no la única ni la más inhumana.

En las condiciones más extremas de constreñimiento de la libertad de movimiento –o de expresión del pensamiento, o de relacionarse con otros, por ejemplo– el instinto de libertad impulsa a los individuos a aprovechar cualquier grieta, en los mecanismos de control, para hacer prevalecer sus ansias de libertad. Y cuando esos mecanismos se aligeran o son suprimidos, lo normal son los desbordes públicos de los

individuos, desbordes en los que no son extraños el desorden y el descontrol en los comportamientos.

Por otra parte, la democracia liberal –y el republicanismo democrático– tienen como inspiración doctrinal la inviolabilidad de la libertad de los individuos. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias críticas, también en los ordenamientos democráticos (y de derecho) se puede constreñir, de manera drástica, la libertad de movimiento de grupos significativos de personas. Las exigencias impuestas por los valores democráticos y los marcos constitucionales mandan que la libertad (y sus especificaciones) de los ciudadanos *debería* ser conculcada más allá de lo *necesario*, lo cual, en situaciones extremas, no es fácil. Pero encontrar las fórmulas, que no sobrepasen más allá de lo necesario (o que corrijan lo más pronto posible) los constreñimientos de la libertad de las personas, es un imperativo ineludible, si los valores y compromisos estatales son los del Estado democrático de derecho.

En la actual situación suscitada por el coronavirus, prácticamente todas las naciones con firmes tradiciones democráticas y de derecho han tenido que imponer constreñimientos –con variaciones de intensidad y de amplitud– a la libertad de movimiento de sus ciudadanos. En algunas, sus Estados han buscado restringir esa libertad en los mínimos necesarios; en otras, se han bordeado o incluso sobrepasado los límites de lo necesario, con el subsiguiente malestar ciudadano. Debe entenderse ese malestar, por lo menos en parte, como una manifestación del instinto de libertad, que, dicho sea de paso, no es ni bueno ni malo: simplemente *es*.

Es, pues, importante tomarlo en cuenta, cuando se toman medidas que seguramente lo van a sacar a flote, ya sea de manera subrepticia o de manera abierta. No hay mejor estímulo para el instinto de libertad que el sentir limitadas por la fuerza, y de forma desproporcionada, las

ansias innatas de caminar, relacionarse y hablar con otros seres humanos. Cuando es inevitable para un Estado democrático de derecho limitar, controlar o abolir la movilización ciudadana o el contacto interpersonal, esas medidas no deberían ir más allá de lo necesario (en intensidad, extensión y duración) en sintonía con el fin que se persigue, que siempre debería ser el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, que es el único fin que justifica, como enseñó Maquiavelo, el ejercicio de la autoridad estatal.

El papel del sector público

La situación actual de nuestro país es particularmente crítica. Al impacto en la salud pública de la epidemia del coronavirus –cuya evolución tiene mucho de incierto–, se suma el impacto económico y social de las medidas que se han tomado para atender a la población afectada como también para contener la propagación de aquélla. Los efectos negativos, económicos y sociales, se hacen sentir con fuerza, al punto que han dado pie a decisiones orientadas a una apertura económica gradual que, sin embargo, no da señales de apuntar a una recuperación de los negocios ni de los empleos en la condición en que estaban a inicios de 2020. En lo inmediato, son los ingresos de miles de hogares –principalmente, en los estratos sociales populares– lo que se han visto reducidos o incluso perdidos totalmente. En este escenario, una pregunta obligada es la siguiente: ¿cuál es el papel del sector público en la presente coyuntura del país, en la cual es vital una recuperación económica que contenga el mayor deterioro de la convivencia social? En el grupo de reflexión, formado en el marco de la actual coyuntura de crisis sanitaria, hemos acordado ofrecer una breve respuesta a esa interrogante. Hemos acordado, también, entender como sector público a las instancias que conforman la institucionalidad estatal en su conjunto, y de manera específica a los tres Órganos del Estado salvadoreño. Dicho esto, en lo que sigue se ofrecen las respuestas a la interrogante mencionada.

Luis Armando González (profesor universitario): El sector público –los aparatos y órganos del Estado en su conjunto– es fundamental para atender la dinámica actual de la epidemia de coronavirus –que indica que la propagación del virus no se ha detenido y que incluso da

muestras de un incremento en los contagios— lo mismo que para diseñar e implementar una estrategia integral de recuperación económica y social, que debe considerar un contexto internacional también afectado por la epidemia. El liderazgo estatal es clave en estos momentos. En realidad, la atención de la situación actual no es responsabilidad exclusiva de un solo Órgano de Estado y ni siquiera sólo del Estado, sino de todos los sectores y actores del país. Sin un compromiso y unas responsabilidades compartidas, salir bien librados de esta crisis será algo extremadamente difícil. El sector público, además de tareas de liderazgo, debe y tiene que ser agente dinámico en áreas puntuales como: a) el diseño e implementación de una estrategia de salud pública destinada a atender oportuna y eficazmente a las personas infectadas, en especial a aquellas más vulnerables y frágiles; b) la conservación de los ingresos en los empleados del sector y c) el otorgamiento de ingresos a trabajadores y trabajadoras del sector informal y de la micro, pequeña y mediana empresa que han perdido sus entradas de dinero, de manera temporal o permanente. Ambas medidas tienen un sentido económico y social indudable: mantener los circuitos básicos de consumo que impidan que la economía colapse y evitar que la pobreza y el deterioro en la vida familiar se traduzcan en prácticas de sobrevivencia ilegales. Otros ámbitos de intervención estatal son, por un lado, la inversión pública en rubros que dinamicen el empleo y la recuperación económica; en segundo lugar, los apoyos (financieros o de otro tipo) a las empresas que han sido más golpeadas por el cierre de estos meses, de forma que puedan iniciar sus actividades en las mejores condiciones posibles; y, en tercer lugar, el establecimiento de acuerdos (y regulaciones) con el sector financiero, en la línea de aligerar o incluso eliminar las presiones que este sector ejercerá o ya está ejerciendo sobre quienes, por haber perdido sus empleos e ingresos, no pueden atender sus deudas con el sistema financiero. Por ejemplo, es inconcebible que quienes tienen tarjetas de crédito enfrenten (y sigan

pagando) cobros por servicios que, desde siempre, han sido una estafa. En estos momentos, una buena decisión estatal podría ser conminar al sistema financiero a que elimine esos cobros por servicios, que son un golpe más al bolsillo de los ciudadanos. Pero medidas como estas no tienen que ser aisladas, sino parte de una estrategia de mediano y largo plazo diseñada de manera concertada con los distintos sectores y actores de la vida nacional.

Carlos Hernández (Investigador y docente universitario): De los préstamos millonarios que la Asamblea Legislativa ha aprobado para que el Ejecutivo enfrente el impacto de la pandemia y las tormentas tropicales que afectaron al país a inicios de junio, un porcentaje está destinado para las municipalidades o alcaldías. Está claro que no se cuenta de manera inmediata con la totalidad de esos fondos. Tarde o temprano llegarán a las finanzas locales. ¿Quedará a discreción de cada concejo municipal el uso del dinero extra? ¿Se utilizarán esos fondos de manera fraudulenta en la campaña electoral que se avecina? Es necesario establecer controles serios y estrictos para evitar que los fondos terminen en los bolsillos de funcionarios municipales de manera irregular o ilegal. Aquí la Corte de Cuentas tiene un enorme desafío. ¿Estará a la altura? Su prestigio no da muchas esperanzas. Por lo que una contraloría ciudadana sería ideal. En esto, concejales de oposición local podrían establecer una especie de cabildos abiertos para mantener al tanto del uso de esos fondos a la población, con información confiables y de primera mano, pues en la buena información y su uso adecuado se juegan las posibilidades de una gestión pública y social eficaz y transparente.

Óscar González Márquez (Investigador y comunicador): La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó, recientemente, que América es la región con más empleos perdidos a causa del coronavirus. En el país, se han adoptado y se adoptan diferentes medidas económicas para enfrentar este complejo escenario en el que se

agudizan la pobreza y la desigualdad. Pero, ¿son suficientes? Más allá de analizar lo que se está haciendo en la actualidad en esos rubros, quisiera enfatizar tres elementos que son claves en relación al papel que debe asumir el Estado en esta coyuntura y con la mirada puesta en el futuro del país. La primera es la transparencia en el uso de los fondos públicos. La corrupción, el despilfarro y el uso incorrecto de fondos empeorarían la situación ya de por sí crítica. En Latinoamérica, estos siempre han sido temas delicados y complicados de tratar, pero en la actualidad requerirán de un mayor énfasis por las repercusiones de la pandemia. Esto tiene que ver con una clara y profunda rendición de cuentas. La segunda será generar medidas para la recuperación de empleos. Estas, sin embargo, no solo deben limitarse a pensar en recobrar los puestos perdidos, sino que la apuesta debe de ir a crear empleos decentes en una nueva matriz laboral. Esto implica una revisión y replanteamiento de las jornadas de trabajo, los salarios, las condiciones laborales, etc. Por último, se tiene que brindar apoyo y prestar atención a los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, así como aquellos que, por sus características, tendrán mayores dificultades en la etapa post-covid. Este es el caso, por ejemplo, de los artistas y gestores culturales, cuyas necesidades no suelen ser señaladas con la debida fuerza.

Cristina Hernández (Historiadora): Las municipalidades son un actor de gran importancia. Fueron primordiales en el siglo XIX ante el naciente Estado salvadoreño, como en escenarios de emergencia y guerra. Perdieron protagonismo debido a la centralización del poder durante el XX, por lo que hoy conocemos como los tres Órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Con esto no quiero decir que hay que volver a las dinámicas del siglo XIX, sino que busco reflexionar sobre el enorme potencial, importancia y alcance que tiene este actor social. En este periodo de coronavirus, las municipalidades, en general, han cumplido con labores respecto a control en espacios públicos,

limpieza, apoyo alimenticio, sanitario, entierros y reconocimientos de cadáveres. Considero que la recuperación social y económica debe ser escalonada, partiendo de lo local a lo central. No se trata de relevar a los tres poderes de sus obligaciones, pero estos no pueden formular políticas o tomar decisiones sin conocer la realidad de su territorio, y quienes tienen mayor conocimiento de los mismos son las autoridades municipales. Para una reactivación y recuperación efectiva, el poder central debe proporcionar un presupuesto acorde a la población de cada municipio (similar al presupuesto de emergencia) y volver a las alcaldías sus aliados clave en esta etapa. No debe entender a las municipalidades como enemigos partidarios o como “hijos políticos” que no pueden tomar acción sin tener su consentimiento previo, sino como administradores locales, autónomos que cuentan con presencia territorial efectiva. Mientras tanto, las alcaldías deben apostarle primero a la seguridad alimentaria local, de manera que, si se producen brotes epidémicos, puedan autoabastecerse y cerrar la localidad sin problemas. Luego, educar a su población no sólo en el uso de equipo de bioseguridad, sino en cómo tratar familiares contagiados sin caer en el pánico.

Tareas urgentes en El Salvador

La situación actual del país impone tareas urgentes a los distintos actores que toman decisiones en El Salvador. Una de ellas, impostergable, es hacerse de (identificar, recabar, sistematizar y manejar) los mejores datos acerca, por un lado, de la dinámica e impacto de la epidemia de coronavirus, y, por otro, de la dinámica económica y social suscitada a partir de las medidas tomadas para hacer frente a la epidemia. Establecidos los mejores datos –los que expresen mejor la realidad–, los mismos deberían ser el punto de referencia para las acciones a impulsar en los planos sanitario, económico, político y cultural-educativo.

El debate en cualquier caso no debería ser por los datos (o por los números), sino por su interpretación o explicación. Pero sobre ellos, como tales, debería existir un acuerdo básico pues, sin ese acuerdo, la “batalla de cifras” enrarece el debate público y confunde a las personas. Asimismo, los datos de referencia, nos guste o no, son los oficiales; por tanto, se tiene que apoyar a las autoridades para que sus datos sean los que mejor expresen el comportamiento de la realidad. Y ellas, obviamente, deben apostar por tener a su disposición y divulgar los mejores datos, de tal suerte que ese flanco de la gestión pública esté bien resguardado.

En el rubro de la salud pública, y en lo que concierne al impacto del coronavirus, es urgente que la sociedad cuente con cifras, lo más apegadas a la realidad, acerca del total de personas fallecidas a causa del virus. También es preciso contar públicamente con información sobre la edad, sexo, lugar de infección, condición de salud, el tipo de tratamiento recibido y tiempo de resistencia –desde la infección e inicio del

tratamiento médico (si lo hubo) hasta la muerte— de las personas con ese trágico fin. Es preciso poner alto al fatalismo (por ejemplo, que todas las personas fallecidas perdieron la vida inmediatamente después del contagio o que era irremediable que murieran), al optimismo ingenuo (por ejemplo, decir que aquí y en el mundo no pasa nada) y al simplismo (por ejemplo, que todas las personas fallecidas murieron por negligencia médica); y la información veraz es un buen antídoto para ello.

En cuanto a las dinámicas de contagio, es urgente que los ciudadanos conozcan la mejor cifra sobre el total de personas infectadas, pero eso debe completarse con información sobre el lugar y tiempo en el que se infectaron, su edad, sexo y condición de salud, y situación actual de quienes, de ese número total, se contagiaron primero; relacionado con ello, está el número de quienes ya salieron o van saliendo de ese total; también, es importante saber cuántos del total de infectados están, por un lado, recibiendo tratamiento médico; por otro, cuál es su condición de salud; y, por último, cuántos están en estado crítico. Esto último da cabida a la posibilidad —dolorosa, por cierto, y no deseable— de la muerte de esas personas.

El rubro económico plantea, también, tareas urgentes. El algún lugar me pareció leer la hipótesis de que la pérdida de empleos e ingresos en esta coyuntura es algo que igual se hubiera dado por mera dinámica capitalista. Se puede discutir tal conjetura, pero lo mejor es buscar los mejores datos sobre el comportamiento del empleo y el desempleo, los ingresos, el cierre de empresas y los índices de pobreza desde marzo hasta julio 2020 y comparar esos números con números, en los mismos rubros, de 2019 o 2018, u otro año de la segunda década del siglo XXI. Si no hay diferencia, ello serviría de buena base para decir que las medidas tomadas para contener la epidemia no han tenido, prácticamente, ningún impacto (ni positivo ni negativo) en las dinámicas del empleo y los ingresos, las empresas o el sector informal, pues sin esas medidas las cosas hubieran ido más o menos igual.

Es dudoso que los datos puedan dar pie a una conclusión como esa, que no deja de sonar disparatada. Sin embargo, los datos firmes, rigurosos y completos sobre la situación económica y social debida al impacto de las medidas tomadas para contener la epidemia no parecen estar, de existir, al alcance de cualquier ciudadano. Urge, pues, contar con esos datos referidos, de forma provisional al menos, al periodo marzo-julio de 2020: empleos perdidos, temporal o definitivamente; pérdida total o parcial de ingresos familiares, remesas, cierre de empresas (grandes, medianas y pequeñas), situación del sector informal, tributación, impago de deudas, pobreza y los datos que hagan falta para tener una respuesta firme ante quienes opinan que, en este año 2020, lo único que ha obrado, como en otros años y generando los efectos de siempre, son las “leyes” del capitalismo neoliberal.

Los desafíos para las instituciones de educación superior

El impacto del coronavirus nos obliga a preocuparnos por concepciones de la realidad y de la vida, así como por comportamientos, hábitos y formas de hacer y de ser, que en otros momentos ya han mostrado sus flaquezas, pero que en la situación actual han revelado sus peores consecuencias. No pueden escapar de la mirada crítica, y preocupada, instancias que tienen por mandato ético (y legal) cultivar el conocimiento científico no sólo en su interior, y entre sus integrantes (alumnos, docentes, investigadores y cuerpo directivo), sino en la sociedad, a través de esa función tan mal entendida como lo es la “proyección social”. En efecto, uno de los enormes déficits en la cultura predominante en nuestro país, y en otros, es el componente científico, entendido de una manera sistemática, amplia y lógica. Y no es que haya un divorcio entre las elaboraciones científicas de las instituciones de educación superior, y, especialmente, las universidades, sino que en el interior de estas últimas ni hay una actividad científica de envergadura ni es notable (no se diga predominante) una cultura científica entre sus miembros. Esto no desdice de los esfuerzos ni los empeños que algunas de ellas ponen en posicionar a la investigación con fundamentos científicos como eje fundamental de su quehacer.

Hago un paréntesis para ilustrar, con un ejemplo cercano, lo que digo. En una conversación familiar reciente, salió el tema de los seres que asustan, a los cuales, por cierto, niego cualquier existencia. Algunos miembros de mi familia, no. Entre ellos, una sobrina graduada de una prestigiosa universidad privada de nuestro país. Está firme en que, en los cementerios, asustan y que, a los seres que asustan, se los aleja diciéndoles un par de expresiones fuertes y amenazantes. Sobre esto último le hice ver que, si esos seres existieran y se tomaran el trabajo de

buscarla para asustarla –y siendo lo poderosos que son– no tendría sentido que se alejaran porque ella los ultrajara. No se si le gustó o entendió mi razonamiento, pero lo preocupante es que, por mi lado, no haya podido influir en ella para fomentarle unos hábitos de razonamiento científico, y, por el lado de la institución en que se formó, que, tras 5 años de estudios superiores, sus profesores la hayan mandado de regreso a la sociedad (y a su familia) con una visión incubada en la mitología popular, con la que probablemente ella ingresó a la universidad o que adquirió ahí (quizás por la influencia de sus compañeros).

Así pues, cabe sospechar que es la debilidad o ausencia de una cultura científica universitaria lo que está en la base no sólo de las pocas vocaciones científicas, sino de la escasa actividad (y calidad) científica, en las elaboraciones conceptuales y en la investigación empírica. Aquí no se trata de cuánto se presume de los doctores o las carreras de doctorado, o de los nombres pomposos (como Ciencia, Tecnología, Innovación u otras igualmente densas), sino de que estudiantes, docentes, investigadores y cuerpos directivos tengan-cultiven, como punto de partida mínimo, una concepción científica de la realidad, coherente y lógica, y el hábito de razonar científicamente.

Esa base es terreno fértil para, si hay recursos y dependiendo de ellos, haya quienes, en las instituciones universitarias o fuera de las mismas, puedan explorar científicamente determinados ámbitos de la realidad, y generen productos sobre ello. Y esa cultura científica y sus productos, deben irradiar hacia la sociedad, poniendo en jaque concepciones culturales erróneas y peligrosas para la vida de las personas. Ese es el mejor servicio que las instituciones de educación superior, universitarias y no universitarias, pueden prestar a la sociedad, a sabiendas de que no hay otras instancias que se dediquen al cultivo del conocimiento científico.

Y es una tragedia social que la gente no lo reciba; es una tragedia que personas graduadas en las universidades, o investigadores y docentes, suyos no adquieran ni promuevan una sólida cultura

científica; es trágico que integrantes clave de los centros de saber más importantes sean promotores de mitos, tabúes, argumentos mágicos, fantasías, falacias e irracionalidad; es nocivo, a la vez que trágico, que en no pocas facultades y departamentos académicos se cultive el rechazo a la ciencia y su descalificación como un saber sin importancia o de importancia semejante a mitos, magia y religión. También, aunque menos nocivo, es preocupante que se confunda a la ciencia con determinados procedimientos técnicos o determinadas prácticas (como la observación o la recolección de datos) olvidando que las teorías científicas son el soporte explicativo sobre cómo funcionan y se relacionan los fenómenos de la realidad.

Abundan los profesionales, expertos en saberes procedimentales y normativos, que tienen torcida su concepción de la realidad, porque la misma no se nutre de explicaciones científicas establecidas. Se los suele ver, a veces en televisión, haciendo comentarios sobre la naturaleza humana, o la sexualidad, con argumentos tomados de morales religiosas trasnochadas, pero justificando sus posturas a partir de sus títulos como médicos, abogados o sociólogos. Y diciendo, sin darse cuenta de la debilidad de sus razones, que “la ciencia avala lo que ellos (o ellas) afirman”.

Dicho lo anterior, me pareció oportuno cuestionar a los miembros del equipo de reflexión (informal), del que formo parte, sobre lo siguiente: ¿cuáles son, a tu juicio, los principales desafíos que tienen, en estos momentos, las instituciones de educación superior del país? Estas son sus respuestas.

Carlos Mauricio Hernández (docente e investigador universitario): Voy a centrar mi respuesta en lo que concierne, específicamente, a la Universidad de El Salvador (UES), la única universidad pública del país, la cual tiene un potencial enorme para incidir en mejorar la sociedad salvadoreña en sus diversos males que la aquejan. Que ahora no tenga ese protagonismo deseado no sólo se debe a la falta de un presupuesto digno. Se pudiera aumentar en millones de dólares su presupuesto, pero, tal cual funciona en el presente, mucho de ese dinero no estaría

alejado de manipulaciones internas en perjuicio del desarrollo académico o administrativo. ¿Qué se pudiera hacer para dignificar la exigencia de más presupuesto para la UES? Lo mínimo es realizar una auditoría externa o independiente de las autoridades universitarias, de tal manera que se tenga un diagnóstico franco que permita conocer con más claridad las necesidades financieras, así como los criterios técnicos y razonables de distribución de los recursos que se ha utilizado en los últimos años. Esto conllevaría a identificar o revisar los mecanismos de contratación de personal idóneo o calificado, es decir, es importante saber si en las contrataciones se toma en cuenta a las personas por capacidad académica, trayectoria o grado –y no por amiguismos, cuotas de poder o venta de plazas–. Ninguna persona sensata, que tenga aprecio por la UES, por el desarrollo académico y respeto por la ciencia, podría catalogar esta acción mínima de “injerencia” o de “intervención” violatoria de la autonomía universitaria. Al contrario, la transparencia es aliada indiscutible de esa autonomía. La misma Constitución en el art. 61 menciona que a la par de la entrega de fondos está la “fiscalización del organismo estatal correspondiente”.

Óscar González Márquez (periodista, comunicador e investigador social): Las universidades tienen diferentes desafíos. Uno de ellos tiene que ver con la formación superior y el empleo. ¿Deben preparar las instituciones educativas a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral? La lógica de la vida indica que, tras la etapa formativa, continúa la etapa laboral, por lo que considerar que la universidad debe dotar a las personas de conocimientos, capacidades y habilidades para poder desarrollarse parece coherente. Y lo es. Pero no debe limitarse a ello. Las universidades tienen un rol que va más allá de acreditar profesionales que puedan convertirse en actores productivos. Las sociedades no sólo tienen demandas económicas, sino que sociales, ambientales y de conocimiento. Este conocimiento, además, no debe concebirse solo para *saber hacer*, sino para *saber transformar* la realidad misma. En este sentido, las universidades deben reflexionar sobre qué tipo de ciudadanos están formando y para qué. Si algo nos ha enseñado la pandemia, en este aspecto, es que las sociedades no pueden limitarse a aspectos

productivos, según las necesidades económicas, sino que se debe promover un conocimiento que prepare a las personas para nuevos desafíos. Para ello, el conocimiento científico debe cobrar cada vez más importancia y las universidades deben convertirse en los pilares que lo sostengan.

Rommel Rodríguez (economista e investigador): No hay duda de que, en los últimos años, y como influencia del neoliberalismo en la región, los centros de educación superior han sido presa también de una finalidad rentable. No es malo servir conocimiento con el fin de obtener una retribución para sustentar la vida, pero, cuando se hace de este fin el último y único propósito, podemos vernos enfrentados con grandes contingentes de graduados sin una formación básica mínima. Bajo esta concepción los centros educativos ya no son un espacio para filtrar, durante el proceso formativo, a aquellos que cumplen los requisitos o estándares para llamarse licenciados, maestros, doctores y los que no, sino que opera una mentalidad industrial mediante la cual habrá tanta producción como el solicitante esté dispuesto a pagar y mantenerse en el centro educativo de formación superior. Con la formación a distancia, mediante clases virtuales y el uso de videollamadas y webinars este fenómeno podría verse profundizado. La asistencia a la video clase o video conferencia sin un rigor en el control por parte del docente puede derivar en el declive de la calidad académica de los graduandos. De ahí que sea importante que en estos momentos en el cual el mundo sufre la pandemia del COVID-19, los docentes no bajen la guardia en cuanto a las exigencias, asistencia, tareas, trabajos de graduación aduciendo el malestar que atraviesan los alumnos. También la situación puede verse seriamente afectada a raíz del impacto económico del COVID-19, según la cual el sector juvenil es uno de los más afectados al haber su perdido sus fuentes de ingreso, y las proyecciones son que la juventud será duramente presa del desempleo a partir de la contracción económica mundial que está en proceso. Las personas se educan, entre otras razones, con el fin de ser útiles a la sociedad mediante el trabajo y así procurarse un ingreso; pero bajo esta nueva realidad, los incentivos para acceder a una buena educación con el fin de aumentar las oportunidades

de obtener un buen empleo y mejorar salarialmente en el futuro no serán tan fuertes. Otro desafío para los centros de educación superior es retomar su agenda de incidencia social y política en medio de la sociedad. En otras latitudes, es claro el papel de estas instancias en la promoción de centros de lectura en torno a un autor; de fomentar grupos que cultivan algún pensamiento filosófico; de instituir espacios de discusión permanentes sobre la realidad nacional, agenda internacional o temas científicos. Y como punto interesante, estas actividades se hacen en la mayoría de los casos de espaldas a los medios de comunicación porque no se busca legitimarse públicamente a través de ellos, sino que son iniciativas que nacen de intereses académicos, coyunturales y que encuentran su mayor desarrollo en el alumnado, y posteriormente llegan al resto de la población. Los países de la región latinoamericana enfrentan graves retos en cuanto al desarrollo económico, esto ha llevado a algunos –que bueno que no a todos– a expresar que las carreras que deben prevalecer, y en las que cuales se deben enfocarse con mayor ahínco las universidades, son las técnicas, restando recursos a la formación humanística, filosófica y artística, y a la ciencia fundamental. Este es un enfoque erróneo, porque las carreras de este último tipo contribuyen en mejor forma a una cultura política, crítica y convivencia social, aunque no son determinantes en última instancia de esta. En un país como el nuestro, en donde existen graves carencias humanas, estas carreras pueden contribuir a una sociedad más diversa y rica en cuanto a expresiones culturales. Sin embargo, de nueva cuenta, esto no está en la visión de los educadores, sino la rentabilidad en el corto plazo.

El movimiento social-laboral ante la crisis

En el momento actual, en El Salvador –y no sólo en nuestro país— se conjugan dos situaciones críticas: la primera, la crisis del sistema de salud pública, cuyas grietas más graves han salido a relucir con los efectos del impacto del coronavirus. La letalidad de ese virus en el personal del sistema –médicos, enfermeras, enfermeros, y empleados administrativos y de servicios— ha puesto en evidencia la fragilidad de la salud pública. La segunda situación tiene que ver con la crisis económica que ya ha comenzado a golpear a los sectores populares y medios, y que no se ven señales que vaya a revertirse en el corto o mediano plazo. La CEPAL ha realizado los primeros diagnósticos –que toda persona sensata debería tomar en cuenta— sobre la situación económica, de indudables implicaciones sociales. Hay un decrecimiento de la economía en un -8.6%; la pobreza podría llegar a un 40% (con 1.5 millones de personas que, se estima, terminarán en la pobreza); y se perderán unos 230 mil empleos, siendo el sector informal uno de los más golpeados. Dada la lógica del aparato económico vigente en El Salvador, lo esperable es que el impacto mayor de la crisis económica se concentre en los sectores populares y en segmentos vulnerables de la clase media. Eso explica que, en la actual coyuntura de freno de la actividad económica en determinados rubros, la pobreza se extienda entre los sectores populares y medios. El mercado no sabe de otra cosa que trasladar los costos de sus fracasos o estacamientos a los sectores sociales más desprotegidos. Ese el capitalismo neoliberal vigente en El Salvador, y en otras partes. Vigente y con ansias de recomponerse, sacando provecho de todo aquello que lo permita, ya se trate de epidemias, guerras o terremotos. Sin Estados fuertes estén dispuestos a contener su voracidad, y que no sean sus cómplices, sólo queda la opción de una

resistencia social organizada; con instancias de participación y organización, como sindicatos, gremios, asociaciones, ONGs, etc., que canalicen las energías y el malestar social hacia estrategias de lucha en defensa de los derechos y dignidad de las personas. O sea, la única opción que queda es el movimiento social-laboral organizado. En El Salvador, y en otras partes, la situación actual urge de la presencia del movimiento social-laboral, que, cuando menos, diga una palabra sobre la vulneración de derechos laborales esenciales. El movimiento social-laboral debe plantarle cara a los abusos que están padeciendo amplios sectores populares en nuestro país, lo cual es extensivo para otros movimientos sociales, sindicales y gremiales en diferentes partes del mundo.

¿Cuáles son los desafíos del movimiento social-laboral en el momento actual del país? Esa es la interrogante que he planteado al grupo de reflexión al que pertenezco.

Lucio Reyes (Abogado y defensor de derechos humanos): Desde el punto de vista de los derechos humanos, este tema nos plantea la reflexión sobre el derecho a la libertad de asociación, estipulado en el art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (DADH) y en el Art. 7 de nuestra Constitución; además, el derecho al trabajo, estipulado en el Art.26 de la CADH y Arts. 37 ss. Cn. En el contexto actual de esta crisis, provocada por la pandemia y las malas decisiones adoptadas por nuestros gobernantes, pienso que el movimiento social-laboral tiene dos desafíos: en primer lugar, exigir que el Estado cumpla las obligaciones internacionales de respeto y garantía con el goce de los derechos humanos, libertad de asociación y trabajo, sobre todo de los sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto implica que el estado adopte medidas económicas y sociales, que vayan encaminadas a la protección de estos sectores. Pero también, el Estado debe exigir a la empresa privada que adopte procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. En segundo lugar, pienso

que el otro desafío es a nivel interno del movimiento social-laboral, en cuanto que se deben plantear las formas de reinventar la organización laboral; es decir, ya no se puede estar pensando en las antiguas fórmulas y métodos de organización laboral. Sobre todo, porque la lucha por (y la protección de) los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) es una condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible.

Carlos Mauricio Hernández (Docente e investigador universitario): En la última encuesta (Informe N° 156, 2020) publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) aparece un dato sobre las preferencias electorales de cara a los comicios del próximo año en El Salvador, donde se elegirán a los 262 concejos municipales y la Asamblea Legislativa. La consulta –que arroja datos sobre la muestra consultada y que probablemente se apliquen al conjunto de la población adulta– arrojó el siguiente dato con relación a la pregunta ¿cuál es el partido político de su preferencia?: Nuevas Ideas, 30 %; FMLN, 3.8 %; ARENA, 3.5%; otros, 3 %; y ninguno 59.7 %. La diferencia abismal entre Nuevas Ideas y demás partidos refleja la probabilidad del dominio legislativo por parte de este partido (dejando de lado las sorpresas que podría deparar el 59.7% que dice no preferir a ninguno), del cual se presume una alta popularidad y se destacan sus habilidades de mercadotecnia publicitaria, pero resulta reprobado en transparencia y en efectividad para resolver de raíz los problemas que aquejan al país. El panorama político electoral puede ser un golpe a la esperanza. Sin embargo, hay vida y capacidad de incidencia más allá de la competencia partidaria; y es en los márgenes de competencia, que obviamente debe valorarse y respetarse en lo que le es propio, en donde debe encontrar su lugar el movimiento social-laboral, cuyas metas deben ser la justicia y la equidad sociales y populares. Si el movimiento social-laboral logra ganar autonomía respecto de la política y adquiere la combatividad

necesaria, la sociedad salvadoreña saldrá ganando en la lucha por sus derechos.

Oscar González Márquez (Periodista e investigador social): Entre los desafíos del movimiento sindical se encuentra el de consolidar su importancia como actor clave en la defensa y mejora de las condiciones laborales. Para lograrlo, debe coordinar acciones en torno a demandas comunes: la protección de los empleos, la denuncia de despidos injustificados y la exigencia por mejores condiciones laborales. Una de las áreas más afectadas por la pandemia ha sido la del trabajo. Aunque es verdad que se requiere tomar medidas económicas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, estas no tienen que colocarse por encima de las necesidades propias de los sectores laborales. Despedir personas, disminuir salarios, etc. solo incrementa las problemáticas económicas del país... Otro factor, que deben tener en cuenta los sindicatos, gremios y organizaciones sociales y laborales para consolidarse, es reconocer cuál es función como defensores de la democracia y la justicia social. Para lograrlo, deben posicionarse como un actor crítico frente a los intereses de los empleadores, así como de los agentes políticos y estatales. Mantener su independencia y actuar conforme a sus objetivos es esencial. Por último, los sindicatos tienen que innovar y adaptarse a las nuevas formas de trabajo, para mantener su presencia no sólo en el empleo formal clásico, sino que abarquen otros sectores que requieren de organización, respaldo y capacidad movilizadora.

Fragilidad y omnipotencia

Los seres humanos somos, en nuestra realidad más real –la biológica, que es también física y química, y que está en la base de nuestra vida psicológica–, sumamente frágiles. Pero tenemos un cerebro capaz de elaborar las ficciones más extraordinarias sobre lo que los rodea y sobre nosotros mismos. De ese tenor es la ficción que hemos creado sobre nuestra omnipotencia, que está hermanada con otras ficciones como la autosuficiencia y la infalibilidad. El lenguaje ha sido y es el instrumento con el cual los seres humanos hemos tejido y tejemos los hilos de lo fantástico, y también los hilos de la ciencia y la filosofías realistas y críticas.

Hay que aclarar que cuando se dice aquí “seres humanos” nos referimos a la especie *Homo sapiens*, la única sobreviviente de un género –el Humano– que se remonta, hacia atrás en el tiempo, a unos 2 millones de años, aproximadamente (Ver Eudald Carbonell (coord.), *Homínidos. Las primeras ocupaciones de los continentes*. Barcelona, Planeta, 2015). Así, la primera especie humana identificada (e investigada con rigor a través de sus restos fósiles) es la del *Homo habilis*, y, entre esta especie y la nuestra, hubo otras: *Homo rudolfensis*, *Homo erectus*, *Homo ergaster*, *Homo heilderbergensis*, *Homo antecesor*, *Homo neanderthalensis*. Miembros de esta última especie –la neandertal– coexistieron, en Europa, con miembros de la nuestra, hace unos 30 mil años; y algunos estudios genéticos revelan la presencia de genes neandertales en poblaciones humanas actuales. Cada una de esas especies fue exitosa –sus miembros lo fueron– por lapsos largos de tiempo, pero al final se extinguieron, siendo la especie *Homo sapiens* la única sobreviviente de un género diverso y con rasgos y capacidades compartidas.

Distintas disciplinas científicas –paleontología, paleoantropología, arqueología, entre otras– se han dado la mano para explorar la trayectoria, características y modo de vida de las especies del género humano, y por supuesto de la nuestra. Los logros son, sin duda, extraordinarios; pero hay aspectos del pasado de la humanidad (que se remontan, atrás en el tiempo, a unos 2 millones de años (o más) que todavía son un enigma. Por ejemplo, la capacidad/habilidad en el uso del lenguaje y la elaboración de relatos/visiones de la realidad a partir del mismo. La evidencia empírica (fósil y arqueológica) revela muy poco o nada sobre ello. Sobre esas capacidades y habilidades en los neandertales los datos existentes no son concluyentes, aunque hay evidencias que muestran que estos humanos tenían prácticas simbólicas y rituales en el enterramiento de sus muertos. Y, en cuanto a nuestra especie, los registros de prácticas simbólicas, rituales y artísticas –es decir, de una cultura– tienen una base firme desde hace unos 10 mil años, cuando se establece la agricultura; a partir de entonces las elaboraciones simbólico-culturales han sido registradas, conservadas y estudiadas en las distintas épocas, hasta el presente.

Nuestra especie tiene entre 150 y 200 mil años de existencia. Desde su cuna en África, la especie *Homo sapiens*, en sucesivas oleadas migratorias, se extendió por el mundo: Asia, Australia, Europa y América. En esos 200 mil años a los miembros de esta especie les ha sucedido todo tipo de calamidades –sequías, pestes, terremotos, inundaciones, heladas–, de las cuales se han recuperado, lo mismo que han tenido logros tecnológicos y culturales que han sido un factor fundamental para su supervivencia. La pregunta no es qué le ha sucedido a la especie *Homo sapiens* en todo este tiempo, sino qué es lo que no le ha sucedido.

Llegar hasta el presente no ha sido fácil para una especie cuyos miembros son sumamente frágiles desde un punto de vista biológico. Sin capacidades físicas extraordinarias, las capacidades cognoscitivas –

ancladas en un cerebro potente— permitieron que el cuerpo humano explotara sus habilidades naturales para la creación de tecnologías y marcos culturales que alentaron una socialidad que, basada en el gregarismo de la especie, dio paso a creaciones sociales-institucionales que aseguraron (y siguen asegurando) la supervivencia-reproducción-descendencia de sus miembros. La fragilidad, sin embargo, sigue siendo (y seguirá siendo) uno de los rasgos constitutivos de los seres humanos, pues la misma está afincada en su realidad biológica. Las corazas protectoras –institucionales, médicas, tecnológicas— cumplen su papel protegiéndonos de amenazas y riesgos, pero al final la muerte pone de manifiesto nuestra impotencia ante la entropía.

La contracara de esa fragilidad es la capacidad de elaborar relatos en los que los seres humanos no sólo inventan divinidades externas a ellos, sino historias en las que se divinizan a sí mismos a nivel individual y colectivo. En las elaboraciones simbólicas culturales, registradas desde hace aproximadamente unos 5 mil años hasta el presente, es palpable esta capacidad. Se trata de ficciones que los humanos han creado y siguen creando sobre sí mismos y sobre lo divino, y su poder, autosuficiencia y sabiduría; es un error tomarlas como una narración o, peor aún, una descripción objetiva de la realidad. Ya se trate de las narraciones mesoamericanas, egipcias o hebreo semíticas, estamos ante ficciones y no ante explicaciones o descripciones sobre lo acontecido realmente. Así, no es real que haya existido un “Dios del maíz” o que los “pueblos originarios” lo sean realmente en el sentido de haber surgido, como grupos humanos, en tierras americanas. Proceden de migraciones asiáticas que, en último término, tuvieron su origen en África, y ello con independencia de lo que digan códices, libros sagrados o tradiciones ancestrales.

La ficción de la omnipotencia humana es, seguramente, tan antigua como los *Homo sapiens*. En ella, se perfilan hombres –no mujeres— mitad dioses y mitad humanos, o incluso hombres totalmente

divinos, con capacidades, virtudes y conocimientos propios de los dioses, con la potestad de imponer su voluntad o de convertir su voluntad en ley natural, y de trascender a la muerte, vencéndola. Por supuesto que la realidad no funciona de esa manera y esos presuntos dioses son tan frágiles, falibles y capaces o incapaces como lo es cualquier otro ser humano.

A cada rato, la realidad impone su brutalidad y fuerza –maravillosa y temible– a esa y otras ficciones. Pero la vocación del ser humano por la fantasía y las ilusiones hacen que ficciones de todo tipo –antiguas y modernas– cobren vigencia, hasta que la realidad las desbarata de nuevo. Los miembros de la especie *Homo sapiens* somos frágiles, pero capaces de creernos –o de creer que algunos de los nuestros son– omnipotentes. Es una tensión permanente, y parece que insuperable, entre lo que realmente somos y lo que imaginamos que somos. Y lo que imaginamos que somos –o que son otros en grandeza o poder sobre natural– muchas veces crece vertiginosamente en contextos en los que la precariedad, la vulnerabilidad y la fragilidad se hacen particularmente evidentes. Son los tiempos propicios para el mesianismo redentor y las soluciones mágicas.

Los desafíos de las iglesias en la presente coyuntura

La complejidad de la situación actual del país plantea desafíos a los distintos actores nacionales, y no sólo a aquellos que son decisivos en la toma de decisiones institucionales o económicas, sino a los que influyen en la configuración de los valores, actitudes y conductas de las personas. Las iglesias, en toda su variedad y su distinto peso social, son agentes configuradores de valores y normas, creencias y opciones, que influyen en los comportamientos ciudadanos del más variado signo: desde las relaciones de pareja y la sexualidad, pasando por decisiones económicas, hasta llegar a la participación ciudadana comunitaria y política.

Creencias o increencia aparte, la mirada de las ciencias sociales no puede dejar de reconocer, en una sociedad como la nuestra, el influjo cultural de las religiones promovidas desde las distintas instituciones cristianas católicas y protestantes, con influjos de otras corrientes de creencias –por ejemplo, judías y musulmanas– de menor peso, pero también presentes. Tampoco se puede dejar de reconocer el papel decisivo que tuvo el cristianismo crítico –emancipador y liberador– en la fragua de actitudes y comportamientos que, en las décadas de los años setenta y ochenta, del siglo XX, impulsaron a grupos significativos de la sociedad salvadoreña hacia la rebeldía, la lucha por la justicia y el sacrificio. Una parte importante de la institucionalidad católica fue el soporte de los procesos que desembocaron en comportamientos individuales y colectivos de compromiso con el bien común. Se cultivaron dinámicas de educación política y de organización popular que crearon conciencia cívica y ansias de conocer y realizar cambios en un país con demasiadas injusticias y desigualdades.

Monseñor Luis Chávez y González abrió las puertas de la Iglesia a los problemas sociales; Monseñor Oscar Romero, llevó a la Iglesia a la calle, a la plaza, a los pueblos, a los cantones y caseríos; Monseñor Arturo Rivera Damas hizo de la Iglesia un espacio para el debate para la paz en el marco de la guerra civil. La guerra terminó, problemas importantes fueron atendidos y superados; otros, como las desigualdades estructurales, siguieron vigentes. El espíritu de compromiso del cristianismo católico fue mermando, por distintas razones. Los procesos de formación política y cívica dejaron de ser una prioridad, al igual que el fomento de una participación ciudadana, crítica y coherente. Quizás se estimó que otros harían el trabajo. Pues bien, ese trabajo no fue realizado por nadie más, y la crisis actual del país ha encontrado a una sociedad inmovilizada en lo organizativo y limitada en las capacidades de análisis por parte de sus integrantes. ¿Tienen algo que aportar las iglesias –y no sólo la Iglesia católica– a la sociedad en la educación cívica y el compromiso participativo? Si es así, ¿cuáles pueden ser las rutas a seguir? Estas son las preguntas sobre las que reflexionan los integrantes del grupo de análisis que, con varios colegas, hemos integrado en el marco de la situación actual del país.

Oscar Arnulfo González Márquez (comunicador e investigador social): Las iglesias son agentes articuladores en el espacio socio-político. Aunque se debe reforzar la laicidad, no se debe pasar por alto la importancia que tienen las iglesias en la configuración del sistema social y político. No se trata de que abanderen proyectos político-partidistas o que se utilice la religión con fines políticos. Se trata de que, como actores sociales, las iglesias contribuyan a transformar a la sociedad, para que esta sea más justa y equitativa. En este sentido, deben volverse espacios que fomenten la discusión y la participación, y que, posteriormente, apoyen demandas de la sociedad civil que se opongan a las desigualdades. Es decir, se trata de posicionarse como un agente crítico y autocrítico. En este periodo –con riesgo de rebrotes de

coronavirus—, deben seguir promoviendo las medidas de protección contra el mismo y, durante sus actividades (misas, cultos, etc.), también tomar las precauciones adecuadas. Por otra parte, además, por supuesto, de impulsar una espiritualidad más humana, ante las necesidades de sus respectivas comunidades de fieles, tienen que coordinar acciones para solventarlas —o al menos disminuirlas— y también promover el trabajo en conjunto. Esto último implica hacer partícipes a los miembros de su congregación para que también actúen a favor de su comunidad y del país en su conjunto, más allá de que esto tenga un beneficio directo para ellos o para personas que forman parte de su grupo. Asimismo, deben sumarse a luchas sociales, como la que busca la aprobación de una Ley de Agua o la de una pensión digna.

Lucio Reyes (defensor de derechos humanos): Las diferentes iglesias de inspiración cristiana, tienen como fuente común de su fe, la Santa Biblia; en ella se encuentra una línea transversal, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, la defensa de los derechos de pobre frente a los abusos del poderoso. Los distintos profetas del Antiguo Testamento así lo manifiestan en sus diferentes escritos, el mismo Jesucristo enseñó a sus discípulos a ponerse en defensa del débil y del pobre, víctima de los abusos de los poderosos. Esta opción fundamental de la fe cristiana ha sido retomada por los Padres de la Iglesia y los diferentes líderes cristianos en el siglo XX, como monseñor Romero, Leónidas Proaño, Martín Luther King, entre otros. Sin embargo, en este nuevo siglo, la mayoría de los nuevos líderes de las iglesias cristianas no está comprometida en sus opciones pastorales con la defensa de los derechos humanos de los sectores en condición de vulnerabilidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se abandonó esta opción?, ¿Por qué los líderes de las iglesias cristianas poco se comprometen con las angustias y tristezas de nuestro pueblo y con la defensa de los derechos de los sectores excluidos? Sin duda, que existen muchas causas que se pueden encontrar desde un análisis desde las

ciencias sociales; sólo quiero señalar algunas, que nos deben hacer reflexionar: la nueva formación teológica y pastoral que se ha alejado del magisterio del Vaticano II y el Magisterio latinoamericano, como Medellín y Puebla; la opción por la neutralidad, que nos lleva a evitar el conflicto, la falta de memoria histórica, que nos hace indiferentes ante la grave y sistemática violación a los derechos humanos de nuestro pueblo pobre; y finalmente, la búsqueda de privilegios y la priorización por el proselitismo, en detrimento de trabajar por procesos de liberación integral desde la fe cristiana.

Rommel Rodríguez (economista e investigador): Para el caso puntual de la iglesia evangélica, acá en El Salvador, como en el resto de la región –incluido los Estados Unidos– un desafío es cómo enfrentar o conciliar aspectos del conservadurismo religioso no sólo presente en el catolicismo –como las posiciones tradicionales en torno a la homosexualidad y el aborto– con temas que dignifican la vida de grupos sociales pobres y marginados por la sociedad, un aspecto central en el mensaje de Jesús de Nazareth. Quizás el mejor ejemplo de esta contradicción se encuentra en algunos grupos evangélicos que apoyan mandatarios como los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, que centran sus agendas de trabajo en enaltecer el patriotismo, excluyendo comunidades amplias de migrantes y pobres que viven en condiciones sociales precarias, y que son instrumentalizadas para sumar votos. Algo de estos riesgos también se percibe en parte del pueblo evangélico de El Salvador, pero no es exclusivo de este momento, sino que históricamente hay grupos conservadores de las iglesias evangélicas que tienen una férrea posición contra el aborto y la homosexualidad, pero muy rara vez se pronuncian acerca del quehacer de la política nacional que afecta a los pobres y marginados de este país, y peor aún, muy rara vez hacen algo desde las comunidades que dirigen sus pastores para ayudar puntualmente a estos grupos vulnerables. El marco de la pandemia del COVID-19 es la circunstancia excepcional que, en el buen

sentido de la palabra, la iglesia en su conjunto necesita para echar andar nuevos modelos organizativos para enfrentar sus efectos, pero también para encarar un duro porvenir que apunta a todas luces a una recesión económica profunda. Quizás debamos entender que lo que nos salva no es la creencia en un mundo del más allá; ni tampoco un modelo económico que acostumbradamente defendemos a toda costa por nuestra visión ideológica; ni aquel ordenamiento político-institucional que pensamos es el mejor a pie juntillas; sino que el principio de esa salvación está en preocuparse por el que tenemos al lado, independientemente lo que piense. Que es un ser humano hecho a semejanza de Dios y que por tanto requiere respeto y prestarle atención. ¿No es esto lo que hizo en su tiempo Jesús de Nazareth? Por tanto, la iglesia requiere menos rito y religiosidad, y más acción por los más necesitados. Esto es lo que el nazareno les encaró siempre a los fariseos y los escribas. ¿No será que el Señor nos dice lo mismo a los cristianos en estos tiempos de COVID-19?

Ventura Alfonso Alas (docente e investigador educativo). Desde los primeros años de existencia de la humanidad se han buscado explicaciones divinas a fenómenos naturales. Siempre se ha conectado una enfermedad o plaga con una acción de Dios. Las iglesias fueron institucionalizando todo este conjunto de dogmas y creencias que arrastramos hasta los días actuales. Las iglesias se han limitado a predicar un castigo divino y a tener fe en ese mismo Dios que ha castigado a la humanidad con enfermedades para que se apiade y quite los males de este mundo. Mi abuelita de 89 años de edad me cuenta recientemente como en los años 50's y 60's celebraban con cohetes, música, tamales y café la muerte de un niño que habría fallecido por cualquier enfermedad curable; ya que la iglesia católica predicaba que un niño que moría iba directamente al cielo. Después del paso de Luis Chávez y González, Monseñor Romero y Arturo Rivera por la iglesia católica salvadoreña se abrieron las puertas a un compromiso eclesial

con la vida real de las personas; sin lugar a dudas que la ruta a seguir es revisar críticamente su pensar y sentir de estas grandes figuras... Su obra. Con la beatificación y canonización de Monseñor Romero, el vaticano reconoce que la acción social pastoral es el camino para la santificación; es la ruta para construcción del reino de Dios. Así que cualquier ciudadano creyente (particularmente católico) solo debe seguir los pasos trazados por Chávez y González, Rivera Damas y Monseñor Romero.

Carlos Hernández (Docente e investigador universitario): “Yo quisiera que la preocupación principal de ANEP y de todos los que defienden sus intereses no fuera mantener su posición, sino ver cómo la economía del país permita que todos los salvadoreños puedan sostener, con el fruto de su trabajo, dignamente a sus propias familias. Este es el ideal que tenemos que buscar entre todos”. Estas son palabras de monseñor Romero del 9 de diciembre de 1979, cuando todavía gobernaba la Primera Junta de Gobierno posterior al Golpe de Estado en octubre de ese año. El mensaje tiene una monumental claridad. La agudeza del religioso para hacer un llamado a los grandes empresarios (en ese momento representados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP) refleja lo que ahora las distintas iglesias debieran cultivar: señalar la raíz o la causa última de los distintos problemas que causan dolor o sufrimiento a las mayorías populares del país. No por un asunto de mera política partidista, sino porque esas mayorías tienen una fe o expresan una religiosidad que desde la institución eclesial (o sus liderazgos) merece ser correspondida con la orientación y llamados fuertes de atención –desde el poder religioso– a las personas con poder político y económico para construir una sociedad más digna, con menos desigualdad salvaje como la presente. Esto no implica que las iglesias promuevan el odio hacia las personas con riquezas escandalosas en medio de tanta pobreza. Al contrario, requiere un compromiso firme para promover el amor al prójimo, especialmente a quienes están en

situaciones de mayor vulnerabilidad. La denuncia de la injusticia y el anuncio de una sociedad mejor, construida con el esfuerzo de todos, sigue siendo una tarea para la Iglesia salvadoreña.

Un recuento de los daños*

En El Salvador, el impacto mayor de la epidemia de coronavirus pareciera estar en disminución, aunque ello no quiere decir que la situación no siga siendo delicada. La llegada a término de la crisis sanitaria no será, como algunos creyeron, en una fecha precisa, a partir de la cual –un día después– la epidemia habrá quedado atrás. Será un proceso que se irá diluyendo –si no hay rebrotes graves– en el tiempo, hasta un momento futuro que, por ahora, es impreciso. Partiendo de la situación actual, cuando las actividades económicas y sociales paralizadas por la emergencia comienzan a reactivarse, es evidente –para cualquier persona razonable– la urgencia de realizar un “recuento de los daños” dejados por la crisis sanitaria en los diferentes ámbitos de la realidad nacional. A partir del mismo, se deberían de diseñar las líneas de acción prioritarias, estatales, empresariales y sociales, en los próximos meses o incluso en 2021.

La sociedad salvadoreña, sus instituciones y su aparato económico han padecido un fuerte choque que, entre otros aspectos, ha generado el cierre de empresas, la pérdida de empleos, la reducción en los ingresos familiares y, con ello, el aumento en los niveles de pobreza. No hay que ser especialmente lúcidos para entender que este rubro es una indiscutible prioridad nacional. Pero, claro está, el recuento de los daños no debe centrarse sólo en los aspectos económicos.

El sistema de servicios públicos –y no sólo el sistema de salud– también han padecido el impacto de la crisis. Además de las muertes en el sector salud, las instituciones públicas –policía, ejército, salud,

*Al momento de revisar estos materiales para su publicación, la cifra oficial registrada, al cierre de agosto de 2020, es de 739 fallecidos por coronavirus.

educación, y otras— fueron tensionadas en sus capacidades efectivas, lo cual no puede ser obviado en un recuento de los daños. La población salvadoreña es, sin duda, la que estuvo sometida a las mayores presiones y amenazas, comenzando con el impacto mortal del coronavirus en muchas familias. Una revisión de los datos aparecidos en Internet informa de 640 personas fallecidas a la fecha*, según datos oficiales. No se trata aquí de entrar en la controversia acerca de esos datos; de hecho, un recuento de los daños, riguroso y objetivo, debería contener la cifra que mejor se acerque a la realidad tanto de personas fallecidas como de personas contagiadas, y su sexo, edad, lugar de residencia y condición de salud. El asunto es que varios cientos de familias perdieron a sus seres queridos, quienes seguramente eran soporte no sólo material, sino afectivo de sus hogares.

Asimismo, mecanismos de convivencia familiar y comunitaria se vieron alterados, tanto por ausencia forzada de sus integrantes –que no pudieron moverse durante varios meses por estar hospitalizados, fuera del país o en centro de resguardo— o por haber fallecido. Hay que tomar en cuenta que quizás todas, o una buena parte de, las personas que murieron en las cuarentenas no recibieron un entierro merecido, en el que sus familiares y amigos honraran su memoria y les dieran el último adiós. Para quien minusvalore el peso simbólico de los velorios y los entierros, el tema puede resultar menor. No lo es para las familias que, en algunos casos, ni siquiera pudieron velar a sus difuntos. Esto es, también, parte del recuento de los daños que hay que hacer. Junto a ello está la alteración de las dinámicas de convivencia en ambientes reducidos y precarios, en los cuales los integrantes de los grupos familiares tuvieron que vivir con temores y tensiones de todo tipo: demandas de los menores de edad, necesidades económicas, relaciones de pareja e incertidumbre sobre lo que vendrá después, una vez que se perdió la fuente de ingresos.

Extramuros de las dinámicas de convivencia familiar y comunitaria –que fueron más complejas de lo indicado aquí–, la institucionalidad del país también se vio fuertemente tensionada y erosionada en sus capacidades de actuar de manera concertada ante una situación que lo ameritaba. No se trata aquí de culpar a nadie en particular; sí de señalar que si no se reconoce esa erosión será imposible crear los mecanismos que permitan superarla. El momento actual es una oportunidad para que los líderes de los poderes estatales diseñen una estrategia de concertación que, además de mejorar la vida de la gente, les rinda los debidos réditos políticos. Esa estrategia debe abrir una puerta al diálogo y los acuerdos con el sector empresarial, en su diversidad; y otra con el movimiento laboral-social, los gremios y las universidades. Estas últimas también merecen un lugar en el recuento de los daños, pero no por la pérdida de rentabilidad, sino porque no pudieron aportar conocimientos cuando más se las necesitaba. Muchos de sus docentes e investigadores, además de verse afectados en sus ingresos, se vieron limitados en sus actividades académicas, con lo cual sus estudiantes y la sociedad salieron perdiendo. En un recuento de los daños, la educación superior no puede estar ausente.

En fin, lo que aquí se ofrece es un puñado de ideas para incentivar a que se realicen los diferentes diagnósticos sobre el impacto del coronavirus en las diferentes esferas de la vida nacional. En la primera línea de estos esfuerzos de diagnosis deberían estar las instituciones universitarias y sus investigadores. Esto no debe hacerse por veleidades académicas o para presumir de cuánto se sabe, o de los títulos que se tienen, sino como un servicio al país, como un servicio a la sociedad salvadoreña. Deben dar su aporte todos los que, en las comunidades académicas o fuera de ellas, tengan las capacidades y la voluntad para hacerlo.

Un falso dilema educativo

La situación de crisis suscitada por el coronavirus –que al parecer seguirá presente, aunque con menor virulencia, a lo largo de 2020 – ha puesto en uno de los primeros lugares del debate académico el asunto de lo virtual y presencial en la educación. Y es que la crisis aludida forzó la entrada en vigor de estrategias formativas no presenciales, en prácticamente todos los niveles educativos; en ellas, se recurrió –por lo general de manera improvisada y abrupta– a los distintos recursos ofrecidos por Internet y la telefonía celular: desde las plataformas que permiten realizar videoconferencias grupales, pasando por el correo electrónico y los mensajes en Messenger y WhatsApp, hasta las llamadas telefónicas.

Salvo los procesos educativos diseñados previamente para ser impartidos virtualmente –y que continuaron, y aún continúan, con una lógica previamente establecida–, las actividades docentes que habían sido planeadas según criterios presenciales tuvieron que ser implementadas de manera no presencial. En la práctica, esto generó distintas complicaciones no sólo en razón de la disponibilidad de los recursos tecnológicos (personales o institucionales), sino en razón de las deficiencias en las habilidades técnicas por parte de docentes –no todos, por supuesto– no preparados para atender cursos, materias, seminarios, talleres o grupos de tesis de manera virtual. Aunado a ello, estaban (y siguen estando presentes) dos temas nada secundarios: primero, la pedagogía y la didáctica virtuales son distintas de las presenciales; y segundo, los contenidos (teóricos y metodológicos) presenciales no se trasiegan automáticamente hacia lo no presencial.

Al calor de esas y otras dificultades –que, cabe sospechar, se han tenido en distintos sistemas educativos alrededor del mundo– se fue

generando un interesante debate acerca de lo virtual y lo presencial en la educación, debate en el cual se pueden identificar distintas posturas. Una especialmente llamativa consiste en proponer que la educación virtual ha llegado para reemplazar totalmente a la educación presencial, a la que se le reprochan las más variadas fallas y debilidades. Quienes abanderan esta posición, además de ver en lo virtual-tecnológico algo extraordinario para la educación, entienden que las pruebas de ello se encuentran en la actual experiencia en la cual lo presencial fue suspendido drásticamente y las actividades educativas virtuales pudieron ensayarse a plenitud. Hay quienes piensan que se trató de una novedad absoluta, como si antes de la actual situación no se hubiesen impulsado interesantes experiencias formativas virtuales, en las cuales si bien ya se visualizaban sus virtudes –lo virtual tiene ciertamente virtudes–, también se visualizaban sus limitaciones que no son únicamente técnicas o de procedimientos, sino que muchas veces involucran aspectos sustantivos.

En el polo opuesto se sitúan quienes opinan que la educación presencial es irremplazable, y que lo virtual no tiene (o no debe tener) un lugar importante en los procesos educativos que en verdad quieran ser tales. En favor de quienes creen esto está la ya milenaria tradición educativa que se remonta cuando menos a Sócrates y cuyos logros culturales (científicos, filosóficos, literarios) sólo una persona escasamente informada puede poner en duda. Es indiscutible que un nervio de la educación, entendida como un proceso de asimilación crítica de nuevos conocimientos, es el diálogo, la dialéctica, el contraste de ideas y opiniones, en lo cual intervienen la razón y la pasión.

Y el espacio privilegiado, durante cientos de años, para ese ejercicio es el espacio ocupado físicamente por los actores principales del proceso educativo (maestros y alumnos): el aula o salón de clases, el *auditórium* o, como prefería Aristóteles, el jardín de su *Liceo*. Ciertamente, la educación presencial, dialógica, tiene un largo recorrido

histórico, pero no es por eso que se la debe considerar valiosa, pues que algo sea antiguo no lo hace bueno o positivo y, obviamente, tampoco lo nuevo o reciente es, sólo por eso, positivo o bueno. Son los logros los que cuentan; y la educación presencial tiene en su haber los suficientes como para tomarse con reservas las propuestas de su supresión total por mecanismos, estrategias y prácticas educativas virtuales.

Los logros de la educación presencial no deben ocultar sus limitaciones o sus posibilidades de mejora; no deben impedir determinar qué áreas de ella pueden ser asumidas y tratadas de una mejor manera por mecanismos y estrategias virtuales. No es cierto que no se tengan pistas sobre esto último: tanto las experiencias previas a la crisis sanitaria como las experiencias suscitadas durante la crisis ofrecen información relevante sobre áreas o ámbitos educativos en los cuales lo virtual puede convertirse en un soporte de primera importancia para lo presencial. Y por supuesto que también las experiencias apuntadas revelan lo que no se puede pedir o esperar de lo virtual en materia educativa. Ni se tiene que ser extremadamente fantasioso con las posibilidades de lo virtual ni excesivamente pesimista o escéptico sobre sus potencialidades. Lo prudente es sopesar, con honestidad y realistamente, los pros y contras.

Por lo apuntado hasta ahora, es claro que la visión antitética de lo virtual y lo presencial en educación nos enfrenta a un falso dilema. No se trata de elegir entre lo uno y lo otro –de abolir la educación presencial y poner en su lugar una educación virtual; o de cerrar las puertas a lo llegada de modalidades o prácticas virtuales en la educación—, sino de situarse en una postura intermedia, viendo a lo virtual como un buen complemento de unos procesos educativos que no deben renunciar a uno de sus nervios fundamentales: la dialéctica, el diálogo, el contraste y lucha de ideas entre interlocutores que interaccionan físicamente; el tensionamiento racional y pasional que permite la muerte de ideas inservibles y el surgimiento de ideas mejores, y que hasta ahora, después

de 2,500 años, no encontrado mejor espacio para su desarrollo que ese espacio en el cual maestro y alumnos se las ven cara a cara. Y es partir de estas dinámicas que se han fraguado y se fraguan habilidades y capacidades investigativas que, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, permiten explorar el mundo natural y social –es decir, plantearse problemas e indagar sobre los mecanismos que los explican– de modo fáctico, no virtual. Esas capacidades y habilidades, asimismo, requieren en gran medida, aunque no en exclusiva, actividades prácticas en el aula y fuera de la misma –por ejemplo, en comunidades, museos, archivos, empresas, mercados, hospitales o laboratorios– que son vitales para la formación de los estudiantes y para el cultivo de un saber que se problematiza sobre la realidad, y no sólo sobre abstracciones mentales matemática o conceptuales.

Esa vitalidad en el conocimiento debe ser –y tiene que ser– potenciada por cualquier recurso, estrategia o práctica, que esté disponible o que sea accesible a los sistemas educativos, en sus distintos niveles. Aunque no sus capacidades más óptimas, la tecnología que permite acceder a recursos educativos virtuales ha llegado a un país como el nuestro. Hay instituciones que están utilizando esos recursos para el desarrollo incluso de cerreras completas al nivel de maestría. Algunas lo han hecho de manera meditada, ponderando bien los objetivos formativos que se persiguen y planeando con suficiente tiempo y meticulosidad los contenidos y las metodologías de enseñanza adecuadas para procesos educativos virtuales. Otras quizás no tanto, aunque esto debería ser objeto de un estudio detallado y profundo.

Lo que aquí se quiere destacar es que, en El Salvador, se tiene (o se va consiguiendo) una buena experiencia en estrategias educativas de carácter virtual que deberían ser tomadas en cuenta, en sus virtudes y en sus limitaciones, a la hora de realizar los ensambles entre lo virtual y lo presencial, sin perder de vista que uno de los propósitos irrenunciables de la educación en todos sus niveles, pero especialmente

a nivel superior, es formar personas con una concepción bien fundamentada –desde criterios científicos– de la realidad social y natural, lo mismo que con las capacidades y habilidades para explorar-investigar las dinámicas que hacen que las cosas naturales y sociales se comporten de la forma en que lo hacen.

La pregunta es cómo (de qué manera) determinadas estrategias formativas virtuales pueden contribuir a una educación integral y de calidad. Y, complementado con ello, la otra pregunta es cómo lo virtual puede ayudar a corregir, mejorar o potenciar lo que se hace en las estrategias educativas presenciales. De alguna manera, fue la pregunta que se hicieron los investigadores del CERN, a cuya cabeza estaba el físico Tim Berners-Lee, cuando decidieron crear la WEB: se trataba facilitar, entre los físicos, el intercambio de ideas, artículos, documentos, resultados de experimentos mediante una red ágil de comunicación e intercambio de información. A estas alturas, las potencialidades y eficacias de la WEB para distintas actividades educativas y de investigación son indiscutibles. El reto es hacer, en cada país y sistema educativo particulares, el mejor ensamble entre los recursos virtuales disponibles (o que se puedan diseñar) en Internet (que es algo más amplio que la WEB) y las estrategias educativas presenciales de forma tal que, en lugar de la anulación o exclusión de uno de las dos instancias, se logre una integración provechosa entre ambas.

Como en el presente, y visto desde El Salvador, es lo presencial lo predominante, lo virtual debería irse definiendo, e implementando, a partir de aquello que requiera mejora, o incluso supresión, en ese ámbito. Pero no a tientas ni a ciegas, o usando criterios de rentabilidad o de ahorro, sino teniendo en mente el objetivo de lograr una educación integral, en lo científico, lo técnico y lo humano. Si sucediera lo contrario, es decir, si fuera lo virtual lo predominante en educación, lo recomendable sería buscar en lo presencial recursos de apoyo, corrección o mejora. Pero no es el caso. Así que es lo virtual lo que debe

contribuir a mejorar la educación presencial. En cada nivel educativo deben hacerse los análisis y estudios que indiquen los modos en los que se apoyo puede ser más eficaz y oportuno; y es que lo que puede ser potable y viable en educación superior (en algunas carreras, materias, seminarios, trabajos de investigación o debates teóricos o metodológicos) puede ser inviable o ineficaz, por ejemplo, en educación básica. Lo contrario también es cierto: lo viable y potable en educación básica (o en bachillerato) puede no serlo en educación superior.

En fin, lo que debería promoverse, en educación, es una articulación potenciadora de lo virtual en lo presencial, y no un reemplazo total de lo presencial por lo virtual o un blindaje de lo presencial ante lo virtual. Hay quienes están trabajando, con seriedad y profesionalismo, en lograr esa articulación potenciadora. Hacen gala de sentido común, criterio racional y equilibrio en el juicio. Los hay también quienes están atrapados en las garras de la desmesura en su apreciación de lo virtual, y que están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance por hacer que la educación presencial deje de existir. Si llegaran a salirse con la suya –nunca se sabe– lo más probable es que la formación integral de las personas (una formación de naturaleza crítica, reflexiva, fundamentada científicamente, investigativa, racional y pasional) se resentiría tremendamente. Y es que, en definitiva, lo virtual, por definición, no puede dar a las personas las vivencias, las experiencias, los tensionamientos y los desafíos que ofrecen las interacciones sociales efectivas, dentro y fuera del aula, y los problemas reales naturales y sociales. Sin esas vivencias, experiencias, tensionamientos y desafíos (no virtuales, sino reales porque tienen su raíz en las interacciones que las personas tienen con la realidad natural y social) no hay educación propiamente dicha, sino un remedo “virtual” de la misma.

SEGUNDA PARTE
LOS ANÁLISIS DEL EQUIPO REDIA

Los efectos no previstos del COVID-19

Cristina Hernández

El 23 de marzo murió una señora, tras sufrir un infarto, en San Francisco Lempa, Chalatenango. La gente del pueblo decía que fue por la cuarentena domiciliar que todos los salvadoreños deben que cumplir para evitar la propagación del COVID-19. Los hijos de la señora de 73 años, llamada Carmen, cuentan que el paro cardíaco ocurrió mientras veía en la televisión que el Gabinete Ampliado de Salud confirmaba cinco casos de personas que dieron positivo en las pruebas para detectar el virus. (*Cuando se publico este texto, ya iban 13 casos confirmados*).

Las campanas de San Francisco Lempa repicaron a las 10:00 a. m. y nadie corrió a dar el pésame. Tampoco a comprar flores, a la misa o a comprar pan para el velorio. Los habitantes simplemente se dedicaron a escuchar, encerrados en sus casas, el triste sonido que anuncia la muerte de un vecino.

A Carmen la declararon muerta a las 7:00 a. m. y a las 4:00 p. m. la enterraron. No hubo velorio y sus familiares capitalinos la despidieron desde las butacas de una ruta 44, escoltada por policías. Nadie pudo bajarse de la unidad del transporte por medidas de seguridad sanitaria en este contexto de cuarentena domiciliar. A Carmen no la mató el

COVID-19, la mató el miedo, el pánico y la desesperación de cada día ser considerada el sujeto más vulnerable de la familia.

Diario de cuarentena: Impacto psicológico y adultos mayores. Chalatenango.

“Hicimos dos pruebas de casos sospechosos. Una salió negativa y la otra, positiva. Oficialmente, tenemos el primer caso de COVID-19 en El Salvador”

Nayib Bukele. 18 de marzo, 2020

Desde que el presidente de la República efectuó las primeras medidas de prevención ante la nueva amenaza sanitaria mundial llamada COVID-19, en distintos puntos del país iniciaron las acciones - algunas comprensibles, otras irracionales- por ejecutar dichas medidas, principalmente abastecer sus hogares de artículos de limpieza y sanidad.

Los medios de comunicación y la oficialidad dirigieron su atención a las principales ciudades del país -San Salvador, Santa Ana y San Miguel- como posibles focos de contagio ante la inminente entrada del virus al territorio salvadoreño. Esta atención también la tuvieron el aeropuerto internacional, fronteras terrestres y marítimas.

El 18 de marzo, mediante una cadena nacional el presidente Nayib Bukele anunció el primer caso de COVID-19, localizado en el municipio de Metapán, al occidente del país. Esta noticia fue trágica para muchas personas, triste y desesperante. A las 10:00 p. m. de esa noche, en San Luis del Carmen, un pueblo del departamento de Chalatenango, se dio otra defunción bajo las mismas características que la de la muerte de Carmen. Víctima del pánico, sufrió un ataque de pre infarto que minutos más tarde también le quitó la vida, según el acta de defunción. En ambos casos, los familiares aseguran que los infartos fueron producto

de las impresiones ante los anuncios y noticias alrededor de la pandemia.

Fernando Díaz, psicólogo y rescatista de Cruz Roja Salvadoreña, explica que los impactos psicológicos que la cuarentena puede generar en la población mundial se basan principalmente en Trastornos adaptativos. Es decir, estados de ánimo depresivos, nerviosismo, angustia, inquietud o despreocupación. La salud mental del ser humano es tan importante como la física. La salud mental de muchas personas es dañada debido al mal uso de la información por parte de distintos actores.

La histeria colectiva y los problemas en la salud mental del colectivo no solo se ven reflejados en simples estados por redes sociales, sino en acciones como los desabastecimientos en supermercados, tiendas, farmacias, etcétera. Así como los cientos de insultos dedicados a personas que entraron a territorio salvadoreño por puntos ciegos.

En El Salvador y en el mundo se ha visto trastocada la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, el padecer cualquier tipo de síntoma e inestabilidad emocional es comprensible para cualquier población. Analizando el rango generacional que está viviendo el confinamiento, las estimaciones desde profesionales de la salud mental consideran que a futuro pueden presentarse casos severos de estrés postraumático.

Siendo aún más específicos, los adultos mayores son un bloque poblacional de mayor fragilidad, puesto que en repetidas ocasiones se puntualiza en que corren mayor riesgo al momento de contraer COVID-19. Teniendo en cuenta que buena parte de los adultos mayores están desprotegidos, sin hogar o viven solos; es de suma importancia tratar de mantener algún tipo de lazo comunicativo con ellos de parte de vecinos y allegados.

Díaz asegura que buena parte de los adultos mayores sufren de problemas de salud físicos y mentales debido al interminable bombardeo de información donde se asegura que son la población más vulnerable y expuesta al COVID-19. “Debemos de tener conciencia, no se debe usar la información para intimidar o alarmar. Los adultos mayores no son los únicos expuestos en esta realidad, todos somos vulnerables ante el COVID-19”, dice Díaz.

El Estado debe tener mucho cuidado con los medios oficiales y pensar en el receptor, que es múltiple y variado. No se trata simplemente de hablar de cientos de muertos, gobiernos y economías golpeadas por esta crisis sanitaria, o peor aún: ver este escenario como la oportunidad para ganar votos *a posteriori*. Sino difundir y canalizar la información de mejor manera. El Gobierno -específicamente Presidencia y Ministerio de Salud- puede ayudar a mejorar la salud mental en la población confinada si brinda información clara, informada y si se detalla en avances, resultados, etcétera. Estos datos ayudan a aliviar la cuota de crisis diaria a la que está sometida la población.

Los impactos psicológicos son una arista importante para abordar desde las humanidades el tema del momento. Investigadores del King's College de Londres realizaron un estudio para identificar los impactos de la cuarentena. Los resultados, que fueron publicados en la revista médica británica *The Lancet*, aparecieron bajo el título: “El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo: revisión rápida de la evidencia”. Los investigadores concluyeron que los factores que provocarían mayor estrés, de acuerdo al análisis, son el alargar las cuarentenas, temor de contagiarse, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras, etcétera. En experiencias vividas bajo el brote del ébola y el SARS, se identificaron efectos duraderos, que se prolongaron incluso cuando pasaron varios años del confinamiento.

Finalmente, el psicólogo Díaz concuerda con las recomendaciones proporcionadas por los expertos del King's College en donde explican la importancia de la implementación de psicología positiva entre los núcleos familiares, el atender medidas de limpieza e higiene, NO SALIR DE CASA, volverse amigos de la lectura, el arte, los juegos de mesa, charlas en familia, actividades entre el colectivo y de alguna u otra manera el mantener -de forma virtual- reuniones con amigos y otras personas.

El rumor de “las señoras muertas por las noticias del coronavirus” ronda –a pesar de que calles y avenidas están vacías- por San Francisco Lempa y San Luis del Carmen, en el departamento de Chalatenango. A ninguna la mató el virus, pero las enterraron como si eso fuese un hecho.

Estos sin duda son los efectos sociales no previstos del COVID-19, los que no se ven, de los que no se habla, los desde abajo. Escenarios que sin duda nos hacen reflexionar y preguntarnos: ¿qué otras medidas se están tomando desde la oficialidad para apalear estos efectos sociales?

La ciencia en tiempos de crisis

Daniel Girón

El Salvador es un país que, en búsqueda del “desarrollo”, está dispuesto a sacrificar sus recursos naturales. La actual gestión de gobierno, desde sus inicios, agiliza los permisos ambientales para la construcción, entre ellas zonas de lujo y de recreación, pero sigue con los mismos procesos burocráticos en la obtención de permisos ambientales para la recolecta y manipulación de individuos cuyo fin es dar aportes a través de estudios ecológicos y de biodiversidad en el país.

El Gobierno no sólo se enfrenta a una crisis mundial en forma de pandemia causada por el Covid-19, sino que eso acarrea a su vez crisis social y económica. Esta problemática también expone la deficiencia del sistema de salud público, del educativo y del económico. A su vez, no se está preparando de la misma manera para las enfermedades locales que aumentan en el periodo que se aproxima, como el dengue, el zika y la chikungunya, que afectan sobre todo a niños y jóvenes. Incluso estamos ante una posible crisis hídrica que cada año es más eminente en el país.

Es notable que el Gobierno ha estado improvisando sus acciones a lo largo de la crisis, pero también es importante mencionar que ningún país estaba preparado para este evento de calibre mundial y, más bien, lo que se ha puesto en manifiesto son las debilidades y falta de apoyo a los sistemas de salud y científicos de todos los países. *Esta gestión debe tener la humildad para aceptar que necesita ayuda y, para tal fin, debe acercarse a los distintos espacios de discusión intelectual que existen.* Debe establecer mesas de diálogo interdisciplinario convocadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en forma de teletrabajo, con todos los científicos nacionales, para buscar soluciones y consejos ya que, una vez superada

esta crisis –tarde que temprano lo hará–, solo nos quedara valorar las lecciones que nos dejó. Debemos empezar a analizar y a trabajar desde ya.

Ahora, más que nunca, es primordial tener el acompañamiento de los biólogos del país (de la mano de otros profesionales), ya que estos pueden estudiar distintos tipos de fauna, que podrían perjudicar y funcionar como vectores transmisores de enfermedades y probablemente migrar al humano. El apoyo de estos profesionales es primordial, ya que en estos momentos podrían estar investigando la migración pandémica, distribución, salud poblacional, genética, parasitología, etología y etnología. Esta última es importante debido a que el salvadoreño tiene un gran repertorio gastronómico que incluye a mucha de las especies silvestres locales. Por lo tanto, es importante crear conocimiento y propuestas para prevenir otra catástrofe de similar magnitud.

Es necesario que el Gobierno se asesore técnicamente con más organismos que basen sus acciones bajo argumentos técnico-científicos comprobables en publicación científica, y que estos busquen la sostenibilidad de las redes tróficas (interacciones de todos los organismos vivos en un ecosistema) y la conservación de la biodiversidad en toda su taxonomía.

Por ejemplo, desde los años 90's se han trabajado con planes de reforestación, los cuales, para este tiempo, ya deberían haber dado como resultado un país densamente boscoso, pero las estrategias utilizadas no han sido eficientes y muchas veces solo colaboran con la migración de especies y con el establecimiento de monocultivos que son tan peligrosos para las redes tróficas.

El conocimiento de la biodiversidad es más importante en el presente. Actualmente, las colecciones científicas apenas tienen el espacio físico para establecerse, poseen una mínima cantidad de

especialistas que no se dedican a tiempo completo para su estudio, sino que lo reparten con la carga académica que poseen. Además, no existe un listado oficial de las especies de las colecciones de toda la flora y fauna del país. Y es que solo a través de la colección científica podemos empezar a conocer efectivamente qué recursos genéticos poseemos e identificar a través de ellos datos de distribución histórica, de morfología y, en algunos casos, la genética poblacional.

El Covid-19 ha demostrado la escasa resiliencia y la gran fragilidad de nuestro sistema económico basado en lujos, lucro y consumo constante de los recursos naturales. Mientras más crece este modelo, más aumentan otras problemáticas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la disminución de la calidad de los recursos naturales. Asimismo, contribuye a intensificar los efectos del cambio climático.

También aumenta la desigualdad social, la migración masiva, entre otros fenómenos. Y es que este modelo solo se representa como un sistema que ataca la vida. Por eso, los científicos en el país deben de tener la oportunidad de tomar un papel más relevante para una mejor ejecución de las políticas públicas, creación de estrategias de contingencia, tratamientos para los fenómenos socio-ambientales y creación de protocolos y manuales para enfrentar futuras crisis. No podemos volver al mismo sistema que nos ha traído a esta situación, deben ocurrir cambios notorios, que nos ayuden como sociedad a salir adelante, para no repetir los mismos errores y esta es una valiosa oportunidad de empezar a reconstruir una nueva apuesta en El Salvador.

De la crisis hídrica a la crisis sanitaria

Luis Alfonso Escobar

El año 2020 inició para muchos salvadoreños con problemas respecto a la calidad del agua: aparecía con mal olor y sabor, además de una coloración café. Junto a esto, se sumó una problemática de desabastecimiento que muchas personas enfrentaban y cuyo descontento con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ya era notorio en medios de comunicación y redes sociales.

Cuando empezaron las quejas por el olor y sabor, el Gobierno inició un plan de emergencia de abastecimiento de agua que buscaba paliar el servicio irregular: repartieron fardos de botellas con agua en ciertas zonas y enviaron pipas a otras.

El presidente de ANDA, Frederick Benítez, afirmó que el fenómeno se presentó por algas en la planta potabilizadora de Las Pavas y que el “inconveniente” había sido solucionado. Pero no era así. Hubo críticas, cuestionamientos y señalamientos; también dudas y contradicciones.

En febrero, fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien primero dejó claro que el problema era mucho más serio del que se imaginaba y luego afirmó que ya todo estaba solucionado. En marzo de 2020, el país entró a un nuevo escenario: una crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19. El primer caso se dio a conocer el día 18 de marzo.

Hasta el momento hay mucha información sobre la prevención por coronavirus. Una de estas es el lavado de manos con agua y jabón. No obstante, ¿cómo podrían obedecer a esta medida miles de salvadoreños

que no reciben el servicio de agua o que solo la tienen de forma irregular?

Desde que se creó la ANDA, en el año de 1961 con la finalidad de abastecer con agua potable a todo el país, algunos sistemas de agua potable fueron trasladados a esta nueva institución autónoma; así como personal e instalaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas, dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) encargada de maniobrar junto a municipalidades la operación de fuentes de abastecimiento de agua durante la década de 1950.

Muchos sistemas de agua de la actual Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) eventualmente siguieron en esta lógica hasta ser cubiertos por la ANDA. En los lugares donde no pudieron darse estos trasposos se crearon administradoras locales de agua, algunas conocidas como “Juntas de Agua” en las zonas rurales. En otros casos, la municipalidad quedó a cargo del abastecimiento de agua por medio de empresas locales y perforaciones propias de pozos. Hasta el año 2016, la ANDA operó el 94% de los sistemas de agua en la zona urbana; mientras que en zonas rurales apenas alcanzó el 42.7%. (ANDA, 2016)

Una de las medidas que la ANDA ha tomado desde su creación es la búsqueda de nuevas fuentes de agua (Diario Oficial, 1961). La actual administración ha lanzado el “Plan Nacional de Agua”, consistente en la perforación de pozos y plantas de bombeo para llevar agua a comunidades. Sin embargo, eso se limita a una medida paliativa, puesto que los recursos naturales tarde o temprano se agotan, ya que muchas veces no se apuesta por la conservación ambiental. El país se quedará sin agua si los mantos acuíferos se siguen sobreexplotando inadecuadamente.

Pocos son los trabajos en conjunto con otras instancias del Gobierno y la población para preservar los recursos hídricos. Por lo tanto, los planes operativos deberían ver el problema del abastecimiento

desde diversos ángulos. Es ahí donde se necesita la intervención de especialistas de todo tipo: provenientes desde las Ciencias Naturales, para entender el medio ambiente; y de las Ciencias Sociales, para comprender la interrelación de seres humanos y medio ambiente.

La planta potabilizadora Las Pavas

¿Por qué cuando se habla de desabastecimiento de agua en El Salvador, la problemática tiende a concentrarse en San Salvador? Municipios como San Salvador, Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, San Martín, Mejicanos y Cuscatancingo suelen aparecer constantemente en titulares de medios de comunicación debido a la falta de agua. En 2018, en esta área se concentraban 1,797,025 personas, lo que equivale al 27% de población total del país, según DYGESTIC, 2018.

Hay que decir que muchas comunidades de estos municipios son abastecidas directamente por la planta potabilizadora Las Pavas, la principal apuesta del proyecto Río Lempa II, el último gran proyecto de la ANDA desde la década de 1990, para abastecer de agua potable al AMSS, dado que el sistema Zona Norte construido a partir de 1975 por la autónoma no pudo ante las proyecciones de demanda de agua (ANDA, 2017). Estos 2 mega sistemas, junto a los “sistemas tradicionales” (pozos ubicados en geográficamente en diversos puntos) son denominados por la ANDA como Región Metropolitana de San Salvador.

La infraestructura de Las Pavas dificulta la potabilización de aguas del río Lempa. El mismo Bukele lo dijo en tuits del 21 de enero del presente año: “...lo que el tema de las algas ha revelado es que Las Pavas colapsa y por eso se necesita la planta del Lago de Ilopango”. Sin embargo, procesar agua del lago de Ilopango fue una medida descartada desde el año 1962, cuando especialistas de la Oficina Sanitaria Panamericana afirmaron que tienen “contenido de boratos y

cloruros que las hacen inaceptables para el abastecimiento del Área Metropolitana, hubo que descartarlas por ser económicamente prohibitivo su tratamiento” (ANDA, 1967). En el caso de Las Pavas se presenta otra situación: la contaminación minera que se genera en Guatemala debido al Proyecto Cerro Blanco y la contaminación por arsénico natural junto a la deforestación masiva ha provocado la disminución del caudal del río Lempa.

Si Las Pavas presenta fallas, esto repercute en cientos comunidades. El problema del agua ya está afectando a comunidades fuera del gran San Salvador. Actualmente, ANDA está facilitando pipas de agua a diversas comunidades del país, sobre todo en el interior, según datos de su portal web institucional. Incluso, sigue perforando pozos actualmente en diversos puntos. Para el año 2017, Las Pavas produjo 64.7 millones de metros cúbicos de agua en el año, que equivalen al 34% del agua potable para la Región Metropolitana y a la sexta parte de la producción total de agua de la ANDA. No obstante, esta región consumió el 51% del total de la producción de agua abastecida por la ANDA, según sus propios registros.

Ante la emergencia, Cruz Roja de El Salvador se ha visto involucrada. Hasta este 4 de abril, la institución había repartido 196,800 litros de agua a diversas comunidades y centros de contención que así lo solicitaron expresamente. Según datos de su portal web, algunas de estas son: la colonia San Antonio, de Cojutepeque; colonia Villa Mariona, de Cuscatancingo; colonia Galvez, de San Marcos; colonia San Antonio, de Soyapango; colonia Santa Lucía, de Ilopango; colonia Santa María, de San Martín, entre otras. Todas pertenecen al AMSS. Estos son casos afortunados, ya que algunas personas deben pagar para abastecerse por otros medios, fuera de sus casas, cuando no son atendidos por estas pipas.

La crisis por el COVID-19 no debe ser la excusa para dejar de prestarle atención a un problema que es de larga duración en El Salvador, como es el desabastecimiento. Hoy en día aún hay muchísimas comunidades que carecen de sistemas de agua y un acceso directo al agua potable.

Sin lugar a dudas, una aprobación y cumplimiento de una Ley del Agua garantizaría el acceso al recurso para toda la población salvadoreña. Esta Ley de Agua, además, debe garantizar la protección de todos los recursos hídricos del país, proveer medidas contra la destrucción y la contaminación de estos y anteponerse a cualquier proyecto que atente contra los recursos naturales, como la minería, construcciones en áreas protegidas, así como cualquier intento de privatización.

Muchos sectores de la sociedad han trabajado a lo largo de los años para que se haga realidad. Pero, mientras existan intereses políticos y particulares que entorpezcan estas luchas, el tema seguirá entrampado en un debate sin efecto.

Tampoco debe pensarse que ANDA es una institución ineficiente e incapaz de solventar la problemática y este problema no se resolverá con una inminente “privatización” de la misma como algunos afirman. Su personal es calificado y muy capacitado. No obstante, siempre necesitará de otros operarios. Es una de las instituciones que continúa trabajando en medio de esta crisis.

Sin embargo, las decisiones que se formulan desde la dirigencia de la autónoma afectan el valor operativo institucional ante la crítica popular, viéndose todavía más afectado si no se tiene claridad y consenso, si se improvisan medidas. Además, se afecta a la población cuando se prioriza a grandes empresas e intereses mezquinos, como es el caso del Proyecto Valle del Ángel, y cuando se desconocen los mismos

problemas del país, aspecto que se replica en muchas instituciones de gobierno.

El llamado es a las autoridades competentes. Junto al COVID-19, la problemática del agua es una bomba de tiempo. Problema que se puede contener, tanto el virus como una crisis hídrica. Sin agua en las comunidades, difícilmente se podrá combatir la pandemia, donde luego de casi 4 semanas de cuarentena ya se reportan 117 casos confirmados (hasta el momento de este artículo). La crisis por el coronavirus pasará en algún momento, pero los problemas ambientales y otros de nuestra sociedad, esos que tienen mucho tiempo de existir, seguirán presentes. Este es el momento de ver el pasado para proyectarse al futuro.

Esta situación de la pandemia debe llevar a reflexionar que se debe apostar mucho más a los sectores de salud, agricultura y medio ambiente. ¿Qué pasará cuando la sociedad deba enfrentarse a otra situación de igual o de peor magnitud? Como ya se mencionó: el abastecimiento de agua por medio de pipas y la entrega de fardos con agua son medidas paliativas, pero no resuelven el problema de raíz. Se siguen perforando pozos. Pero, ¿qué pasará cuando estos se sequen en un país donde la desertificación es una realidad? ¿Hasta cuándo podrá sostenerse este método?

Referencias

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. *Boletín estadístico 2016, N° 38*. San Salvador: ANDA, 2016.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. *Memoria 1967*. San Salvador: ANDA, 1968.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. *Memoria de labores 1969-1970*. San Salvador: ANDA, agosto 1970.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. *Memoria de labores 2017*. San Salvador: ANDA, 2017.

Arrieta, Lilliana. *Institucionalidad del agua en América Latina*. San Salvador: UCA, 2018.

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. *Agua potable municipal. Experiencias exitosas en El Salvador*. COMURES-COSUDE-USAID, 2003.

Dirección General de Estadísticas y Censos. "Encuesta de hogares de propósitos múltiples". San Salvador: DYGESTIC, 2018.

Dirección General de Obras Hidráulicas. *Estudio sobre los acueductos y alcantarillados en El Salvador. Exposición de motivos y Anteproyecto de la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados*. San Salvador: Ministerio de Obras Públicas, 1960.

Ministerio del Interior. "Ley de Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)". *Diario Oficial*, N° 191, tomo 193, 19 de octubre de 1961.

Después del coronavirus: Cinco discusiones

Oscar Arnulfo González

La pandemia finalizará en algún momento, aunque no sin haber trastocado la vida de muchas personas, ya sea solo porque tuvieron que cambiar sus hábitos por el encierro o porque perdieron seres queridos. Pero pasará. Las dinámicas irán, a su ritmo, retomando su curso. Hay quienes piensan que la humanidad realizará cambios fundamentales a partir de lo experimentado por el COVID-19, pero otros piensan que no y que volveremos a ser los mismos, a hacer lo mismo. No quiero posicionarme de un lado ni de otro, más bien quisiera plantear cinco puntos que, me parece, serán claves en la realidad social posterior a la pandemia.

1. Pobreza y desigualdad. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el efecto global del coronavirus será “devastador”. Solo en Centroamérica proyectan que se perderán 3 millones de empleos. La CEPAL advirtió, además, que el impacto económico agudizará la problemática de la pobreza extrema (\$3.20 por persona por día), aumentando la cifra de personas que se ubican en esta categoría. El Banco Mundial estima que, a raíz de la pandemia, la economía salvadoreña se podría contraer en un -4.3 % en 2020.

Estas cifras, por supuesto, son tentativas y se encuentran en constante movimiento, pero lo que sí es claro es que habrá más pobreza en un país tan desigual como El Salvador, donde muchas familias no cuentan con los ingresos mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que una minoría concentra la riqueza del país: en 2014, por ejemplo, Oxfam El Salvador presentó un informe en el que establecía que el 20% de la población concentraba el 48.4% del ingreso nacional.

Con la deuda externa, el préstamo de emergencia por el coronavirus y la reactivación de las dinámicas económicas, sumada al aumento de la pobreza en el país, el panorama posterior se presenta crítico en un país habituado a reproducir desigualdades.

2. Elecciones. Aunque la pandemia termine, una de sus secuelas será en materia político-electoral. Para 2021, habrá elecciones legislativas y municipales en El Salvador y, sin duda, las decisiones asumidas durante la pandemia se posicionarán en el debate público. En el cálculo político, todos buscarán beneficiarse de la situación actual. Unos pondrán todo su esfuerzo por posicionar a su favor las acciones tomadas para hacer frente a la pandemia, mientras que otros buscarán cuestionar las mismas.

No será el único tema que se inscribirá en el debate. Otro, por supuesto, será el de seguridad, el cual ha sido una de las grandes apuestas de esta administración. La implementación del plan de seguridad, así como sus resultados, serán blanco de elogios por parte de algunos y de críticas por otros.

Pero no solo los políticos intentarán colocar en la discusión temas, sino que también la sociedad civil y las organizaciones sociales. En el debate público entrará, sin duda, la Ley de Agua. La última vez que esta discusión fue postergada ocurrió en 2019, cuando los diputados decidieron derogar el acuerdo por los primeros 14 artículos de la ley. Los políticos han hecho todo por evadirla, pero se debe actuar para comprometerlos a aprobarla. Continuar presionando, una vez que asuman sus curules, por lograrlo.

En este aspecto se trata de dos puntos. Uno es que no se debatan de forma superflua los primeros dos temas, sino que se profundice en ellos: para mejorar los sistemas de salud o tomar más medidas para reducir la desigualdad, por ejemplo. Y segundo para que no sean los políticos quienes decidan qué temas tratar, sino que la ciudadanía ejerza

mayor actividad en el debate político (este punto lo retomaré en el punto sobre la democracia).

3. Sistemas de salud. El personal de salud con su arduo trabajo ha sido fundamental para hacer frente al coronavirus. Esta pandemia volvió a recordarnos cuán importante es tener sistemas de salud fortalecidos, personal preparado y condiciones para hacer frente a crisis sanitarias.

Fortalecer el nuestro debe ser una discusión vital. Con el Covid-19, surgió el riesgo de que el sistema de salud nacional colapsara (este riesgo sigue latente). El sistema de salud presentaba desde antes problemáticas, fragilidades y carencias que deben solventarse. Una vez pasada la pandemia, hay que invertir aún más en salud tanto en la reestructuración y mejoramiento las condiciones de los hospitales (esto incluye tener equipo suficiente y adecuado), profundizar más en el conocimiento y capacidades del personal médico, a la vez que se mejoran sus condiciones laborales. De hecho, inmediatamente, tras la pandemia hay que tomar medidas para apoyar al personal de salud, ya que estará agotado.

Asimismo, deben revisarse y actualizarse los protocolos de salud y reflexionarse sobre las visiones que se tienen en esta materia. Esto implica también la apuesta por el crecimiento en áreas científicas, a fin de incrementar las capacidades adaptativas a nuevos escenarios que podrían darse a futuro.

Por otro lado, la apuesta de salud debe también pensar en los pacientes. Al concentrarnos tanto en el coronavirus, no sabemos aún qué circunstancias encontraremos respecto a la salud de personas que padecen otras enfermedades. A posterior, también es necesario repensar temas como el servicio y la atención a los pacientes, la cobertura, el abastecimiento de medicamentos, etc.

Hay diferentes elementos que han configurado el impacto de la pandemia en el país. Es muy limitado comparar los sistemas de salud solo por la cantidad de personas infectadas o fallecidas por COVID-19, ya que se conjugan una serie de factores. Todos estos aspectos deberán revisarse para detectar las fortalezas y las deficiencias que existen en nuestro sistema.

4. El entorno. El coronavirus demostró que es posible cambiar, modificar o alterar al menos un poco nuestros hábitos para responder a problemáticas. La pandemia se planteó como un asunto urgente, que requería que se actuara de inmediato.

Sin embargo, hay otras situaciones que también requieren acciones tanto políticas como ciudadanas. Una que debe ser primordial es el replanteamiento de la relación del hombre con la naturaleza. Una de las ideas generales que se tiene es que “la naturaleza debe ser dominada” o que esta y sus recursos pueden ser explotados para beneficio de la humanidad, bajo la concepción del “desarrollo”. Es decir, se promueve una visión utilitaria y mercantilista que es nociva para el entorno.

La contaminación, el cambio climático, la crisis hídrica son temas que deberían ser tratados con la misma urgencia que el COVID-19; no actuando, por supuesto, sin reflexionar, pero tomando decisiones. Los escenarios que podrían presentarse pueden ser incluso más críticos que con la pandemia.

Anteriormente mencioné que hay diversos factores que influyen en cómo impacta una pandemia en una sociedad; pues el estado de los ecosistemas es uno de ellos, y uno de los principales. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, aseguran expertos, aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. La naturaleza presenta grandes beneficios para la salud en muchos aspectos. Además, funciona como barrera ante algunos virus y enfermedades.

5. La democracia y ciudadanía. Previo al contexto actual aconteció una situación delicada en materia democrática, cuando el presidente de la República Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de militares... Durante la pandemia, se dan también muchas circunstancias que han generado mucha controversia, pero ante la emergencia sanitaria ciertos aspectos son complicados de evaluar. Para lo que sí hay que prepararse es para el contexto tras la pandemia, plantearse en qué estado se encuentra la democracia salvadoreña y qué hay que hacer para que no sea tan frágil.

Dentro de la tendencia de la *cool-ture*, donde pesa más lo popular que los argumentos, es de ser muy precavidos con respecto a la cuestión democrática. Me parece que, más allá de simpatizar o no con políticos, hay que fomentar una ciudadanía crítica y responsable. No crítica en un sentido de decir lo que se quiera y cómo se quiera porque puede, sino una capaz de cuestionar las decisiones y acciones de sus mandatarios. Pero también crítica de la ciudadanía consigo misma, que solo espera respuestas de sus representantes, sino que debe participar y actuar más para defender sus derechos. Esto también requiere de mucha responsabilidad de la misma, con respecto a lo que dice y hace, a lo que permite y limita.

La educación en El Salvador ante la crisis

Juan Carlos Calderón

Problemáticas

La emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 ha provocado un cambio radical en la rutina de la población en general y está causando un gran impacto en el ámbito sanitario, social, económico y en la educación. En el caso del sistema educativo, se han tenido que reorientar estrategias para su funcionamiento durante la cuarentena. Esto ha traído consigo una serie de problemáticas y deficiencias.

En primer lugar, la educación básica y de bachillerato han seguido su funcionamiento a través de guías subidas al sitio web del Ministerio de Educación. El estudiante debe descargarlas en su teléfono móvil u otro dispositivo, y a su vez buscar una eficaz comunicación con los docentes. Esto sería el mejor camino a seguir, si no existieran dos principales problemas: el acceso parcial o nulo a medios digitales por parte una gran cantidad de estudiantes y una agudizada desigualdad social.

Estadísticas de *Internet World Stats* indican que a diciembre de 2017, la última fecha de la que hay datos disponibles, el 57.7 % de la población salvadoreña tenía acceso al servicio de Internet a través de diferentes dispositivos y plataformas.

Asimismo, la última *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)* de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, menciona que en 2017, 1.8 millones de salvadoreños tuvieron acceso a Internet. Ese mismo año, 303,815 hogares tenían conexión a Internet, lo que equivale al 16.59 % del total de hogares del país.

Con estos porcentajes, es importante cuestionarse: ¿de qué forma se han acoplado los diversos niveles educativos a la situación generada por la pandemia?

En el caso de las universidades, estas han tenido que tomar una serie de medidas para acatar las indicaciones gubernamentales, al tiempo que intentan proporcionar a profesores y estudiantes la infraestructura informática y tecnológica que les permita continuar con sus actividades académicas a distancia.

Ante la decisión del Gobierno de continuar con las clases de manera virtual, tanto universitarios como estudiantes de otros niveles deben cumplir con tareas que se centran en los contenidos y la lógica de la clase presencial, muchas veces desde plataformas educativas poco amigables. Es importante recalcar que el trabajo escolar no se virtualizó, sino que se adaptó la clase presencial a una por computadora. Lo que quedó es aquello que es más fácil mover, de trasladar al mundo virtual: la certificación, la planeación de clase, las guías de trabajo, la sobreabundancia de actividades, la evaluación a distancia. También se mantuvo la tarea, pero ahora sobrecargada (Sebastián Plá, 2020).

Los docentes de escuela están acostumbrados a las clases presenciales con poco uso de los recursos digitales. En este sentido, no están lo suficientemente preparados o poseen poca experiencia en entornos virtuales. En este sentido, los docentes han sido forzados a dejar el salón de clase tradicional, al que han estado acostumbrados por décadas, para convertirse de manera obligada en usuarios de las herramientas tecnológicas que existen para interactuar a distancia entre ellos mismos y sus estudiantes, al tiempo que tienen que atender las presiones personales del confinamiento y sus implicaciones económicas, de salud y afectivas.

Los estudiantes, que de manera repentina pasaron a permanecer en su casa, tuvieron que compartir, si es que los tienen, los dispositivos

digitales y la red de internet que usa toda su familia, y deben continuar con las actividades de aprendizaje de sus diversas asignaturas inscritas, a través de tareas, conferencias virtuales y una serie de deberes que se superponen. Además, tienen que lidiar con los posibles efectos de la pandemia en la salud, las emociones, preocupaciones económicas de la familia y su salud física.

Hay otros aspectos que afectan a los padres de familia con hijos e hijas pequeños. Además de sus obligaciones personales y profesionales, estos tienen que acompañar a los infantes en sus tareas y, en muchos casos, pueden no poseer una preparación adecuada para llevar esta acción a cabo, por desconocimiento en el uso de los ambientes virtuales, por la dificultad para usar el celular en el caso de varios niños y por las dificultades para costear un constante gasto de internet móvil (Melchor Sánchez Mendiola, *et. al.*, 2020).

Antecedentes

La educación en El Salvador ya se ha visto forzada a dar saltos tecnológicos y también ha pasado por crisis con anterioridad. Es importante remitirse a estos procesos del pasado para tener una perspectiva más completa de los problemas del presente. Por ejemplo, hacia 1968 se impulsó la Televisión Educativa (TVE) en el marco de una reforma. Esta buscaba, a través de los medios de comunicación masiva, convertir las estructuras sociales tradicionales en modernas (Héctor Lindo Fuentes y Erick Ching, 2017).

En cuanto a la reforma, el historiador Knut Walter menciona, en *Ideales igualitarios y autodeterminación 1961-1972*, que la reforma educativa de 1968 es reconocida como una de las más profundas en el continente americano, ya que modificó los planes de estudio y buscó extender la cobertura de las escuelas públicas hasta los puntos más remotos del país, sobre todo en las zonas rurales (Knut Walter, 2001)[\[1\]](#). Pero Hector Lindo y Erik Ching son reiterativos en la idea de que, en el

sector rural, se logró incursionar poco, debido a las mismas políticas centralizadoras.

Las teleclases tuvieron también muchas debilidades. Hubo imposibilidad de que los alumnos siguieran el ritmo de la TVE. Se dio el caso de que se hicieron promociones automáticas únicamente para aparentar, ante las organizaciones internacionales, que la reforma estaba dando resultados positivos. Asimismo, los maestros locales, en lugar de complementarse con los telemaestros, generaron una competitividad que fue desgastante y que terminó afectando su autoestima, dando como resultado una serie de huelgas magisteriales en las cuales se exigía que se dejara a un lado algunos aspectos de la reforma, principalmente la televisión educativa.

En cuanto a la educación en El Salvador durante la guerra, esta pasó por el endurecimiento de las condiciones económicas que afectaron enormemente las cuestiones sociales. Para 1978, la asignación presupuestaria estatal al rubro educativo fue de 23.15 % (el cual estaba dedicado principalmente a los niveles educativos más altos y al pago de salarios); con la guerra, el gasto en educación decayó al 3.6 % en 1980. Al finalizar el conflicto, el presupuesto llegó a descender en 1992 al 1.5 % (Fernando Reimers, 1995). Esta política de ahorro se debió a que el Gobierno asignó más del 40 % de su presupuesto al Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Con estas condiciones el sistema educativo sufrió un gran retroceso en todos los aspectos.

A partir del caso de la TVE de 1968, hay que tener presente que la implementación de tecnologías sin un análisis previo de las condiciones socioeconómicas del país, más allá de ayudar, puede acrecentar las desigualdades y privar a muchas personas del derecho a la educación. Por su parte, la guerra trajo grandes lecciones en cuanto al desarrollo de la educación en tiempos convulsos. Las zonas rurales, que fueron el seno del conflicto, tuvieron experiencias educativas desde la informalidad y

desde lo local, para solventar problemáticas cotidianas a raíz del conflicto.

Desafíos

En conclusión, este texto sintetiza algunos aspectos generales de la educación en El Salvador en la actualidad y desde una perspectiva histórica. A medida que se vaya desarrollando la crisis sanitaria actual, se abre el debate sobre los desafíos que deben abordarse desde diferentes disciplinas para que el país afronte los problemas en materia educativa.

La pandemia del COVID-19 ha permitido ver que, si bien en el mundo el uso de los smartphones es algo cotidiano y generalizado, para el caso de El Salvador y otros países de América Latina, el manejo de la tecnología y la transmisión de conocimiento a través de recursos pedagógicos digitales es aún incipiente.

El Gobierno de El Salvador ha asumido las limitaciones de conexión del estudiantado, dotando de guías impresas a un aproximado de 137,000 estudiantes de todo el país que tienen dificultades para descargar el contenido digital que han cargado en su sitio web (MINEDUCYT, 2020). Y muy probablemente, muchas escuelas que no lograron aplicar para recibir estos recursos impresos, siguen teniendo limitaciones para continuar los procesos educativos.

Es importante que el Gobierno deje de lado la exaltación de casos simbólicos como la entrega de equipos a un [joven de Atiquizaya](#), en el cual “se subía a un árbol para conseguir señal de internet y recibir sus clases virtuales” (Secretaría de Prensa de la Presidencia, 2020), esto únicamente aportan a nivel discursivo, pero que en la realidad siguen demostrando que no se procura el derecho a la comunicación y acceso a la tecnología en las zonas históricamente excluidas.

Esta crisis debería ser la excusa perfecta para iniciar una transformación educativa, fortaleciendo la educación desde la comunidad y motivar una enseñanza por medio de la resolución de problemas con estrategias interdisciplinarias. A su vez se debe desmontar el escepticismo ante las herramientas digitales de los docentes de todos los niveles de estudio. Esto solo se logrará cuando el sistema innove con nuevas estrategias pedagógicas dentro de los planes educativos, se adhieran permanentemente las herramientas tecnológicas dentro de las políticas públicas, se fortalezca la solidaridad comunitaria y se democratice aún más la comunicación, dejando a un lado la institucionalidad centralizada y lo autoritario.

Referencias

Britez, Mirta. "La educación ante el avance del COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera.", s/f.

Fuentes, Héctor Lindo, y Erik Ching. *Modernización, autoritarismo y guerra fría. La reforma educativa de 1968 en El Salvador*. San Salvador: UCA Editores, 2017.

Knut, Water Franklin. "Ideales igualitarios y autodeterminación 1961-1972". En *En El Salvador. La República*, editado por Álvaro Magaña. San Salvador: Fomento Cultural, Banco Agrícola, 2001.

Mendiola, Melchor Sánchez, Ana M. del Pilar Martínez Hernández, Ruth Torres, Mercedes de Agüero Servín Carrasco, Alan K. Hernández Romo, A. Mario, Benavides Lara, Carlos A. Jaimes Vergara, y Víctor J. Rendón Cazales. "Retos educativos durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de la UNAM", 2020, 1–23.

Plá, Sebastián. "La escuela en tiempo de pandemia". Periódico. La Jornada, el 10 de abril de 2020. <https://www.jornada.com.mx/2020/04/10/opinion/022a2pol>.

Reimers, Fernando. *La educación en El Salvador de cara al siglo XXI: desafíos y oportunidades: un proyecto del Instituto para el Desarrollo Internacional, Universidad de Harvard con la colaboración de Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*. Vol. 11. UCA Editores, 1995.

Secretaria de Prensa de la Presidencia. [@SecPrensaSV]. (17 de abril de 2020). [Tweet]

<https://twitter.com/SecPrensaSV/status/1251281584914870272>

Consideraciones históricas sobre los conflictos ecológicos en Tegucigalpa

José Carlos Cardoza

Construida en torno a un antiguo pueblo de indios, Tegucigalpa (Honduras) consolidó su círculo poblacional promovido por la política de expansión minera de la Corona Española en América. Para 1578, Juan de la Cueva es designando Alcalde Mayor del Real de Minas de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, con la finalidad de convertirla en centro administrativo que controlara la extracción de yacimientos de plata descubiertos en la zona periférica.

Es difícil ser optimista, en términos ecológicos, sobre el futuro de una ciudad ideada con la finalidad principal de regir una de las actividades humanas más contaminantes como la minería. Las secuelas directas de la misma en los alrededores se mantienen como monumentos de la histórica degradación ambiental de la región minera.

En medio del bosque de pinos, en las cercanías del Valle de Ángeles, a unos 45 kilómetros hacia el oeste de Tegucigalpa, se encuentra una zona que aglutina aludes coloridos que “adornan” la travesía que conduce hasta una caída natural de agua conocida como La Golondrina. Décadas después de su abandono, en las minas de Valle de Ángeles y San Juancito, convive casi con inocencia un paradójico paisaje de esplendor natural de bosque mixto madreño y cúmulos de metales pesados, producto del lavado de la plata que por años se aglutinó en las zonas bajas.

Por su condición de Real de Minas, Tegucigalpa no fue construida con la intención de hacer de ella una de las grandes metrópolis

coloniales de Centroamérica. Por ello, su plaza central y el conjunto arquitectónico que la rodean son notablemente más austeros (a excepción de su catedral) en comparación con las plazas centrales de otras ciudades centroamericanas como León (Nicaragua), San Salvador (El Salvador) o Ciudad de Guatemala (Guatemala).

El desorden de la expansión urbana ya era un problema para mediados del siglo XIX. La irregularidad del terreno obligó a la gente, en su afán de expansión, a construir una red de repechos. Estos callejones sin salida, que habían surgido del desorden en la Villa, obstruían la fluidez de carruajes que comenzaban a circular. Su alcalde Sotero Moncada trató de dar una solución, como explica Leticia de Oyuela: “abre la cerrada de los Altos de la Hoya (...) y la cerrada del barrio San Francisco, para comunicarla con la nueva calle de la Ronda”[†].

En total, más de 23 casas fueron destruidas para poder unir las calles en vértices urbanos que facilitaran la movilidad entre sus avenidas. Algunos de estos “fósiles urbanos”, en el centro histórico de Tegucigalpa, siguen sirviendo de vías esenciales para la circulación, como el callejón que pasa por detrás de la catedral o las gradas que descienden desde la Biblioteca Nacional hasta el río Chiquito.

Actualmente, la ciudad vive una sofocante política de construcción masiva de obra gris destinada a la circulación vehicular, en un intento por solucionar el problema histórico de la movilidad urbana. Los gobiernos municipales de Ricardo Álvarez y Nasry Asfura pusieron en marcha una destrucción de muchas de las zonas verdes con las que contaba la ciudad. Las medianas de los bulevares más importantes fueron pavimentadas y las aceras peatonales reducidas para dar espacio a un carril más.

[†] Oyuela, L. (2001). *Historia mínima de Tegucigalpa*. (Pág. 81). Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Bajo una visión de ingeniería del siglo pasado, Tegucigalpa pretende incluirse tardíamente en la visión ideal de lo que debería ser una ciudad moderna.

Las ciudades pensadas para los automóviles en Latinoamérica se reconstruyeron en la mitad del siglo XX, durante los albores de la industria automotriz y el modelo de producción fordista. Su principal aporte lo hizo Brasil con la construcción de su nueva capital Brasilia, una ciudad que terminó siendo desbordada por el desarrollo orgánico de la actividad humana, rompiendo así sus pretensiones de control absoluto de expansión sectorizada promovida por la individualización del modernismo liberal. Este modelo de expansión urbana pensada para el estímulo del transporte privado terminó convirtiendo a las ciudades en cámaras atestadas de dióxido de carbono nocivo para la vida saludable de sus ciudadanos.

El nuevo enfoque de la ingeniería del siglo XXI, con el objetivo de dar respuesta a la amenaza climática, consiste en sistematizar la alternancia de la obra gris con las zonas verdes, así como el estímulo al uso del transporte público o la utilización de motores híbridos. Pero, en un acto casi risible, Tegucigalpa tapiza las paredes de los pasos a desnivel con alfombras de grama sintética, desaparece lo verde del suelo y coloca piedra triturada de colores e instala en torno a sus calles ornamentos eólicos de metal en lugar de árboles.

En un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2014, el cual mide la contaminación del aire en las ciudades del mundo, Tegucigalpa se llevó el primer lugar de Centroamérica al reflejar datos donde indica que en ella se respiran 58 partículas contaminantes menores a 10 micrómetros[‡]. La ciudad que fue una zona

[‡] Orellana, U. (2014, 17 de mayo). En Tegucigalpa se respira aire más contaminado que San José y Ciudad de Guatemala. *La Prensa*, consultado el 1 de mayo del 2020

de vientos fuertes y limpios, como detallaba William Wells en 1857, se convirtió ahora en la peor zona para respirar de la región.

Este viajero norteamericano, quien describió la ciudad a mitad del siglo XIX, manifestó que “podría escribirse un libro ilustrado sobre la calidad pura y balsámica de esta atmósfera de altura (...). En los días más ardientes es raro que el calor sea opresivo, y en las épocas más frías a penas si se necesita de calefacción para sentirse cómodo”[§].

El presente es diferente. Sumada a la influencia global del cambio climático, en Tegucigalpa se hizo costumbre, durante la época seca, cubrir la ciudad con una capa apocalíptica de humo provocada por los incendios forestales de los moribundos bosques que aún la rodean, la cual llegó a un punto alarmante en abril de 2020. Fiel a su herencia escolástica, la única solución concreta es la lluvia de mayo que se espera casi con devoción.

El río Chiquito y el río Choluteca, que recorrían la ciudad ofreciendo aguas cristalinas para resolver las necesidades de la cotidianidad, ahora forman parte de los más contaminados del país. Basta detenerse un momento sobre el histórico puente Mallol o en la parte trasera de lo que en algún momento fueron los bellos jardines de la antigua Casa Presidencial, para observar cómo las agonizantes aguas que le restan, tratan de arrastrar pilas de basura que contienen desde lo común como un bote plástico, hasta colchones de camas, sillas plásticas o televisores descompuestos; vertidos al río sin decencia alguna, mientras el olor fétido obliga a alejarse inmediatamente del sitio.

Son los mismos ríos en los que la gente disfrutaba de las pozas hondas bajo las tardes cálidas del verano, donde los viajeros bañaban

en: <https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/707000-98/en-tegucigalpa-se-respira-aire-m%C3%A1s-contaminado-que-san-jos%C3%A9-y-ciudad>

[§] Wells, W. (1978). *Exploraciones y aventuras en Honduras 1857*. (Pág.161). Tegucigalpa: Talleres de Artes Gráficas de Centroamérica.

sus mulas e incluso eran el lugar perfecto para pescar unos guapotes o mojarras, alimentos comunes en las mesas de los tegucigalpenses de la época, como relató Wells. Se sabe que los cerros allende al Barrio Abajo siempre estuvieron deforestados, al menos desde el siglo XIX en adelante, lo cual se confirma al ver las fotografías que anexó Ramón Antonio Vallejo a su anuario estadístico a finales del siglo. Probablemente, la inexistencia de árboles se debía a que era la zona inmediata de recolección de leña para las hornillas, de madera para la construcción; y porque sus tierras servían para el cultivo de trigo, maíz y frijol, los cuales necesitan una cobertura total del sol. Quizá este era uno de los factores que influían en la creación de una ciudad azotada por fuertes vientos que alteraban la tranquilidad de la vida cotidiana en Tegucigalpa.

Estos cerros continúan siendo deforestados porque la actividad de quema de leña en hornilla sigue siendo la solución para miles de familias en condición de pobreza, quienes buscan entre los matorrales restantes la leña para cocer sus alimentos.

La OMS alerta que la contaminación del aire representa una amenaza para todos, pero las personas más pobres y marginadas se llevan la peor parte. En su mayoría mujeres y niños, todos los días respiran el humo letal emitido por cocinas y combustibles contaminantes en sus hogares.

“Es necesario adoptar medidas urgentes contra la contaminación del aire”, dijo Piedad Huerta, representante de la OPS/OMS e invitó al Gobierno de Honduras a liderar este esfuerzo en las Américas, implementando políticas y acciones dirigidas a la eliminación del uso de leña y queroseno para cocinar en zonas urbanas”**.

** Organización Mundial de la Salud. (15 de agosto del 2018).Día Interamericano de la Calidad del Aire: OPS/OMS aboga por el uso de combustibles y tecnologías energéticas limpias. Consultado en línea el 1 de mayo del 2020 en:

Los vientos fuertes probablemente continúan horadando el ambiente de la ciudad, pero ahora sería difícil detectar la alteración causada por un ventarrón cotidiano. Lo agitado de la vida se debate entre el caos vehicular, la contaminación extrema y lo complicado que significa ser la sede política de unos de los países más inestables del continente.

Tegucigalpa es el ejemplo claro de las preocupaciones de los ecólogos, quienes llaman a nuestro presente *El siglo de la gran prueba*. La ciudad está muriendo paulatinamente. El conflicto distributivo del escaso recurso hídrico aunado a los problemas socioeconómicos constituye el mayor reto de cara al futuro. La ciudad cuenta con dos embalses de agua y seis fuentes superficiales, siendo el más importante el del cerro El Picacho, que brinda más de mil litros de agua por segundo. La zona conforma 395 hectáreas de bosque mixto de pino y encino y además ofrece una vista privilegiada de la ciudad, tanto así que en 1937 Tiburcio Carías Andino ordenó la construcción de un parque y jardín botánico en la zona, bautizado posteriormente en 1946 como parque Naciones Unidas.

La condición propia del cerro lo condenó a ser víctima de ostentosos proyectos residenciales de las élites de Tegucigalpa que vieron el panorama como óptimo para desarrollar una vida tranquila disfrutando de la vista y el bioma. Amenazado por la intrusión humana para la década de los setenta, El Picacho era el vertedero de basura de la población de Tegucigalpa y de los hospitales locales^{††}.

https://www.paho.org/hon/index.php?option=com_content&view=article&id=1543:dia-interamericano-de-la-calidad-del-aire-ops-oms-aboga-por-el-uso-de-combustibles-y-tecnologias-energeticas-limpias&Itemid=228

^{††} Argueta, K. (27 de mayo del 2018). Parque Naciones Unidas: 81 años de la riqueza natural escondida de Tegucigalpa. *La Tribuna*. Consultado en línea el 1 de mayo del 2020 en: <https://www.latribuna.hn/2018/05/27/parque-naciones-unidas-81-anos-riqueza-natural-escondida-tegucigalpa/>

La zona sigue siendo la más afectada en épocas de incendios. Solo el pasado 20 de marzo de 2020 se estimó que se quemaron más de 10 hectáreas junto al parque Naciones Unidas, desde donde la prensa difundió imágenes impactantes de la labor del cuerpo de bomberos sofocando el siniestro a los pies del monumento nacional conocido como El Cristo del Picacho.

Lamentablemente, para el futuro cercano se visualiza un aumento de la conflictividad por la expansión urbana, que sigue sin ser claramente planificada y sin lograr una visión de desarrollo sostenible para la ciudad. Desde las políticas de reestructuración de finales del siglo XX, en donde el Estado se percibe como sinónimo de precariedad, las pautas para el desarrollo urbano son impuestas por el capital privado, y la *governance* se encarga de construir las carreteras que exige el movimiento no racionalizado de la gestión privada, plagado de segregación residencial y distribuciones desiguales del acceso a los servicios básicos de subsistencia.

En la imaginación colectiva de la hondureñidad, Tegucigalpa se piensa como una ciudad destinada al colapso ambiental. La pertinencia de historizar sus conflictos ecológicos actuales reside en la capacidad de la ciencia histórica por crear una visión temporal de la cuestión, delimitar el desarrollo de la vulnerabilidad ambiental y romper la consolidación de una cultura que normaliza el desastre ecológico.

Referencias

Oyuela, L. (2001). Historia mínima de Tegucigalpa. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

Orellana, U. (2014, 17 de mayo). En Tegucigalpa se respira aire más contaminado que San José y Ciudad de Guatemala. La Prensa.

Wells, W. (1978). Exploraciones y aventuras en Honduras 1857. Tegucigalpa: Talleres de Artes Gráficas de Centroamérica.

Organización Mundial de la Salud. (15 de agosto del 2018). Día Interamericano de la Calidad del Aire: OPS/OMS aboga por el uso de combustibles y tecnologías energéticas limpias.

Argueta, K. (27 de mayo del 2018). Parque Naciones Unidas: 81 años de la riqueza natural escondida de Tegucigalpa. La Tribuna.

Catracha. [@onasis_maldonadohn]. (12 de abril del 2020). Tegucigalpa, Honduras. Justo ahora se lamenta esta mal obra.

George Floyd, el racismo y las pandemias

José Alfredo Ramírez Fuentes

La escena: el edificio de la estación de policía de Minneapolis arde en llamas como en una película. Las escenas son terribles e impactantes a la vez: automóviles incendiados, negocios saqueados, restaurantes en llamas, la situación totalmente fuera de control; aunque todo empezó como una protesta pacífica. Lo importante, sin embargo, no son las protestas y saqueos, sino el evento que dio inicio a todas estas acciones.

Actualmente todos los medios y gobiernos están hablando del COVID-19, pero los eventos del 25 de mayo recién pasado nos recuerdan de una *pandemia más larga y silenciosa: el racismo y la discriminación*. George Floyd un afrodescendiente residente de Minneapolis, Estados Unidos, fue detenido el 25 de mayo de 2020 por cuatro policías, quienes después de esposarlo, lo obligaron a ponerse boca abajo en la calle, mientras que, uno ellos, colocaba sus rodillas sobre su cuello por más de 8 minutos, causándole la muerte por asfixia. ¿Por qué el abogado de la familia de Floyd habla de una pandemia al referirse al racismo, como si fuese una enfermedad? ¿Existe racismo en El Salvador?

Floyd no es el primer afrodescendiente víctima de brutalidad policial; sin embargo, es su caso el que ha hecho explotar una serie de protestas bajo las mascarillas en todos los Estados Unidos. Hace unas décadas ocurrió una escena muy similar a esta, un hombre afrodescendiente fue golpeado brutalmente por cuatro policías blancos, pero la víctima sobrevivió, su nombre era Rodney King. Esto sucedió el 3 de marzo de 1991 y se volvió el caso más sonado de brutalidad policial filmado en video. El caso de King llegó a la corte y un año después de los eventos, el jurado encontró inocentes a los oficiales de policía

acusados de abusar de su poder. Ese veredicto —al igual que el asesinato de George Floyd— llevó a severas protestas, conocidas como los “Motines de Los Ángeles”.

En 1992, ante el fallo injusto del jurado de Los Ángeles, las protestas se convirtieron en saqueos, incendios, golpizas e incluso asesinatos por 6 días, dejando un saldo de 52 muertes, 2,383 lesionados, más de 16,000 arrestos y daños por más de \$800 millones para la ciudad y sus residentes. Las protestas fueron concretamente contra la fuerza policial, al igual que está sucediendo ahora en Minneapolis y en todos los Estados Unidos.

Entre los terribles hechos que llevaron a la muerte de George Floyd esta semana, y la brutal golpiza en contra de King, en 1991, han transcurrido 29 años de distancia; pero como la historia es aleccionadora y misteriosa, nos permite saltar otros 25 años al pasado, a 1965. El 11 de agosto de ese año, un oficial de policía de la ciudad de Los Ángeles detuvo en la carretera a Marquette Frye, un chofer afroamericano, acusándolo de manejar ebrio. No se conocen con exactitud los detalles que siguieron a esta detención, pero se sabe que un grupo de más de 200 personas se reunieron alrededor de la escena, mientras más policías se sumaban, dando paso a más arrestos. Cuando las patrullas se alejaban con los detenidos, los protestantes arrojaron piedras a los autos iniciando un periodo de 5 días de desórdenes, incendios y motines que dejaron como resultado 34 muertes, más de 1,000 lesionados, más de 4,000 arrestos y pérdidas para la ciudad de Los Ángeles por alrededor de \$40 millones de dólares. Estos eventos son conocidos hoy en día como los “Motines de Watts”, por el nombre del vecindario de Los Ángeles donde sucedieron los eventos.

¿Por qué parece que esta historia se repite una y otra vez cada veinte y tantos años? Pues la respuesta es simple y compleja a la vez. La razón de fondo de estos eventos que involucran a ciudadanos

afroamericanos y a la fuerza policial blanca es el racismo; y la respuesta ante lo que se entiende como una injusticia es la protesta de calle, que degenera en motines. Para entender esta reflexión es importante ver las causas de los motines de Watts, pues ese evento es el más lejano a nuestra realidad actual. Según la prensa blanca de la época, los motines respondieron a la falta de respeto a los derechos sociales, que llevó a la ruptura de la ley y el orden; así como la incapacidad de las autoridades para controlar los desórdenes. La prensa afroamericana, por su lado, señaló como causa de los eventos el racismo y la brutalidad policial, que se hacían acompañar de la indiferencia de los blancos por los problemas de la población afroamericana. La historia parece darles la razón a estos últimos al recordar pasajes terribles vividos por las comunidades afroamericanas en Estados Unidos.

Si regresamos aún más en el tiempo, llegaríamos a las leyes “Jim Crow” que se establecieron por los gobiernos estatales y locales para legalizar la segregación racial en espacios públicos. Esas mismas leyes fueron las que llevaron a terribles linchamientos de afroamericanos a finales del siglo XIX y principios del XX, mostrando que el racismo era muy fuerte aún después de decretada la abolición de la esclavitud en 1865, al finalizar la Guerra Civil Estadounidense. Es así como la esclavitud fue una realidad que sobrevivió del periodo colonial al republicano, no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente americano.

Pero, ¿por qué el odio contra los afrodescendientes? No es una herencia de los tiempos de la esclavitud, tampoco es la exclusión social que han sufrido los afrodescendientes en toda América. *No se puede seguir victimizando o romantizando los logros de los derechos civiles y humanos.* El problema real es la ideología de la supremacía blanca, nacida del imperialismo europeo caucásico, quienes creen que han dominado el mundo por 500 años desde que se dieron cuenta que este continente existía.

Ese eurocentrismo se ha expresado como racismo en El Salvador y América Latina a través de la negación de la raíz africana. Es decir, *no sólo discriminamos, sino que negamos la mera existencia de nuestra herencia africana*. América Latina recibió muchos más africanos esclavizados que las trece colonias; sin embargo, la historia de esos afrodescendientes en nuestros países ha sido muy diferente. En El Salvador se sigue negando la herencia africana, asegurando que nuestros ascendientes fueron indígenas o españoles, pero no “negros”. El racismo salvadoreño se esconde detrás de burlas risas, “cariños” o frases como “mejorar la raza”. No sigamos siendo ciegos al color, pues eso lleva a justificar acciones inhumanas. No solo Frye, King y Floyd han sido víctimas de violencia y exceso de fuerza por parte de las autoridades; en América Latina y El Salvador tenemos una larga historia de autoritarismo y brutalidad policial y militar. Hoy vemos las reacciones reflejadas en acciones de calle.

Esta reflexión no tiene por objetivo llamar a la violencia, sino a tomar conciencia sobre los eventos de Minneapolis y lo que nos dice sobre nosotros mismos: la exclusión social, la pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud —sobre todo acceso a la salud en medio de la pandemia— nos debería hacer empáticos con George Floyd y la terrible muerte que ha sufrido. Como dicen los protestantes: Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y la pandemia nos recuerda: todas las vidas importan.

Brasil y la lucha contra el nuevo coronavirus

Shaiene Carvalho

Brasil se encuentra entre los pocos países del mundo donde su presidente tiene actitudes que buscan negar la gravedad de la COVID-19. En marzo, Jair Messias Bolsonaro dijo, en un discurso ante empresarios en Miami, que "gran parte de lo que hay es más fantasía que realidad. El tema del coronavirus es todo lo que propagan los principales medios de comunicación". Para Bolsonaro, los medios del mundo mienten sobre la gravedad del nuevo virus.

Al regresar al país, alrededor de 24 personas de la delegación que lo acompañó en ese viaje dieron positivo a la enfermedad, incluidos algunos ministros. Bolsonaro tomó la prueba, sin embargo, se negaba a hablar de los resultados. Fue hasta 60 días después, y con una orden judicial, que se mostraron públicamente. El resultado fue negativo.

El presidente brasileño, en una red nacional, incluso comparó la pandemia con una "gripita o resfriadito insignificante". Aseguró que por esa razón no era necesario detener la economía nacional. El mandatario se opuso a las medidas de aislamiento social e incluso sugirió que el aislamiento fuera vertical, argumentando que solo los miembros de los grupos de riesgo permanecerían aislados —ancianos, niños, personas convalecientes y aquellas con enfermedades crónicas—

Esta es una medida a la que se oponen los especialistas de todo el mundo. Algunos países optaron por la cuarentena domiciliar obligatoria y autoritaria, otros no. Mientras tanto Bolsonaro considera más importante al sector económico que la salud y vida de miles de brasileños.

Cuando un periodista le preguntó a Bolsonaro sobre el aumento de muertes en Brasil, este respondió: "No soy un empresario de pompas fúnebres". Días después de este episodio, cuando el país estaba superando a China en número de muertos, el presidente nuevamente desestimó la pregunta de un periodista con desprecio, diciendo: "¿Y a mí qué?".

Al oponerse al aislamiento social desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro descalificó la gravedad de la enfermedad e invisibilizó la situación. Apoyó los actos de sectores de la clase media, los cuales desfilaron en sus automóviles de lujo exigiendo el fin del aislamiento en todo el país, en las caravanas o "carros de la muerte", como se les denominó. La postura del líder de Estado contribuye a que las personas no cumplan con las pautas de las agencias de salud. Una vez más va en contra de los modelos y recomendaciones de las agencias nacionales e internacionales.

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, el gobierno federal de Brasil no ha diseñado una campaña educativa para que la población se proteja contra el virus. Por lo tanto, hay una fuerte desinformación. Esta es mayor teniendo en cuenta que Brasil es el único país de habla portuguesa en el continente. Mientras que en los países vecinos se educa sobre el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el de portar mascarillas, así como la importancia del distanciamiento físico, entre otras recomendaciones; el gobierno brasileño se encargó de elaborar una campaña similar a la de Italia "Milano non se Ferma" ("Milán no se detiene" o "Milán no para", en español). Esta se llamó: "Brasil no puede detenerse". Sin embargo, se le prohibió continuar como una campaña pública.

El caos total en la administración federal del país es notable. Cuando las decisiones cruciales debían provenir del gobierno federal y sus ministerios, se observó que el país estaba de cabeza, ya que se le dejó

a los gobiernos de los estados y municipios las principales medidas para la protección de la salud de la población.

El desajuste entre las medidas no contribuye al aislamiento efectivo y este se vuelve más vulnerable ante las presiones económicas y los intereses financieros. Esto se corrobora cuando los gobiernos locales y estatales aflojan medidas de aislamiento. Como ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, cuando con la reapertura de los centros comerciales, aumentó el número de casos de COVID-19 en un 173 %. O como en la ciudad de São Paulo, en donde la publicidad del alcalde culpa a la población por no adherirse al aislamiento social, a pesar de que no se proporcionó condiciones efectivas para que esto se haga en todos los niveles. Este hecho debilita las medidas de cuarentena.

En medio de la crisis sanitaria, Bolsonaro sigue instigando al retorno a la normalidad y a la reanudación de la economía. El escenario brasileño se ve agravado por el aumento en el número de muertes en áreas periféricas. La llegada del virus a las aldeas indígenas y cárceles demuestra que el país se encamina hacia una situación brumosa e inhumana. El colapso del sistema de salud en varios estados es notorio; algunos ya alcanzan la capacidad del 90 % de las UCI junto a la falta de profesionales de la salud. Otros iniciaron la apertura de tumbas colectivas previendo el panorama. Estas no son más que señales tangibles de cómo avanza la enfermedad en el territorio brasileño.

Los números oficiales no reflejan la realidad. Varias entidades y analistas advierten sobre el subregistro de casos, debido a la falta de pruebas y por los certificados de defunción que notifican de muertes por enfermedad respiratoria aguda y no por COVID-19. La mayoría de muertos son trabajadores, pobres y negros.

La situación que enfrentan miles de brasileños no es la mejor, ya que después de las reformas que tuvieron lugar en los últimos años,

principalmente en el mercado laboral, el sector informal aumentó considerablemente. Todo esto contribuye a la precariedad del trabajo y la *uberización* de los trabajadores. Esta precariedad queda expresada en los 38 millones de personas que pertenecen al sector informal, y que no cuentan con ninguna forma de protección, eximiendo a las empresas de cualquier responsabilidad.

La situación es peor para los más pobres, ya que el Gobierno tardó aproximadamente dos meses en comenzar a pagar la ayuda de emergencia. La demora en el pago y el bajo valor (R\$600 reales que son aproximadamente \$120 dólares) no satisfacen las necesidades básicas de la mayoría de las familias brasileñas. El resultado es que la población sale a la calle en busca de formas de llevar comida a casa. A esta situación se agrega la formación de líneas kilométricas y aglomeraciones frente a sucursales bancarias, en un intento por recibir ayuda de emergencia. Esta realidad aumenta el riesgo de contagio en los más pobres.

Esta situación demuestra la precariedad de la población y contribuye a que, sin querer, los trabajadores informales y los pequeños comerciantes apoyen la lógica de la política de muerte del Gobierno. Por pura desesperación, los trabajadores aceptan volver al trabajo y su rutina normal, incluso arriesgando su vida.

Por otro lado, los grandes empresarios se mostraron insatisfechos ante el primer signo de empeoramiento de la crisis. El Gobierno puso a disposición de los bancos R\$1,2 billones de reales, asignando al pago de la primera cuota de ayuda a los trabajadores una suma de 35,5 millones y, aun así, no se incluyó a todos. El Senado brasileño planea gastar R\$154 mil millones de reales para pagar tres meses de ayuda de emergencia. Esta cantidad es equivalente a poco más del 10 % de la cantidad entregada a los propietarios de grandes empresas. Incluso si el monto prometido se gasta en la población, se sabe que aún no satisface las

necesidades de la mayoría pobre, mientras que los ricos ya tienen una cama garantizada en hospitales privados.

Mientras el Estado garantiza billones a empresarios, el Sistema Único de Salud (SUS) sucumbe después de años y años de desmantelamiento, y cierres de hospitales públicos. Todo esto debido al intento de privatización, negando a la población el acceso a la salud, que ha sido evidente durante la pandemia. En plena confrontación directa con el coronavirus, los hospitales aún sufren de malversación de fondos, sobreprecio e incluso órdenes que no se entregan cuando se tratan de materiales esenciales para la vida, como los respiradores. Hay casos de sobreprecio de suministros básicos como mascarillas, guantes y equipo de bioprotección, así como su escasez.

El personal de salud no está exento de las injusticias y el olvido por parte del Estado. Son los que se encuentran en la lucha directa contra el virus y carecen de equipos de protección personal. Según el Consejo Federal de Enfermería, Brasil superó a Estados Unidos en el número de enfermeras muertas por COVID-19. Al tener más enfermeras muertas que el país más afectado por la pandemia (Estados Unidos), es posible observar el riesgo al que están expuestos estos profesionales y cómo se descuida su protección.

Brasil, en este momento, es un gran barco que navega en el océano sin rumbo, un barco a punto de hundirse. Es extremadamente urgente que se tomen medidas sanitarias más severas y se garanticen las condiciones económicas para que la población pueda cumplir con el aislamiento, de lo contrario, veremos a miles de brasileños sucumbir ante la enfermedad.

Sin alternativa y en campaña electoral en plena pandemia

Gonzalo Montano

Este no es un escrito académico ni nada por el estilo. Simplemente es una opinión (impopular) que me surgió al observar a tantos precandidatos a alcaldes y diputados en el actual contexto, y es que, ciertamente, una de las peores cosas que nos pudo pasar a las y los salvadoreños ha sido enfrentar dos emergencias en un año preelectoral. La primera emergencia es la de salud provocada por el virus SARS-CoV-2 (causante del COVID-19), la cual ha impactado a todo el mundo. La segunda son las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las cuales golpearon al país por casi dos semanas.

Las personas más afectadas han sido las que se encuentran en una mayor situación de empobrecimiento. Viven en barrios, cantones y colonias a los que presidentes, alcaldes y diputados llegan solo cuando hay campaña electoral pero que, una vez electos, no vuelven a visitar.

Durante estas emergencias, tanto el presidente como sus funcionarios, así como la mayoría de alcaldes y diputados, han mantenido un discurso en el cual aseguran mostrar “la preocupación por el pueblo” y “la preocupación por los más necesitados” que tienen, cuando en realidad solamente es estrategia de campaña electoral de la cual hemos sido una pieza.

Las imágenes de los alcaldes, las de los diputados y las del presidente “ayudando” a las personas más afectadas le han dado la vuelta a todo el país y hasta han llegado fuera de nuestras fronteras. Esto no solo lo han hecho los partidos políticos tradicionales, y en quienes quieren volver a reelegirse, sino que también en aquellos nuevos

partidos y “nuevos liderazgos” que tienen (supuestamente) una nueva forma de hacer política.

Aclaro que no está mal que se apoye a las personas en mayor situación de vulnerabilidad (eso se aplaude); sin embargo, mi crítica va dirigida a la instrumentalización que algunos han hecho del sufrimiento de las personas para ganar, evidentemente, votos. Las emergencias han caído como anillo al dedo para quienes centran su interés en llegar a ocupar un curul y para quienes buscan seguir manteniendo poder, eso nos queda cada vez más claro.

Desde que asumió su cargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha estado en campaña electoral. Ha realizado ataques de deslegitimación hacia los otros dos órganos del Estado, principalmente a la Asamblea Legislativa, la cual es el gran objetivo a alcanzar en las elecciones de 2021. Esta campaña constante, así como las notorias motivaciones del presidente y su grupo de tener y ejercer un poder absoluto, han llevado a El Salvador a entrar en una crisis democrática. Crisis que ya se venía gestando desde antes de las emergencias, pero son estas las que lo han dejado mayormente en evidencia, ya que las ha aprovechado para montar sus mítines políticos y atacar a sus adversarios.

Ante la situación de tener un Gobierno con tendencias autoritarias, que rompe el Estado de derecho y el orden constitucional cada vez que puede, ¿cuál es la alternativa?

Considero que, frente al riesgo de perder nuestra frágil democracia, es necesario que todos nos articulemos en torno a fortalecer la democracia, sin dejar de lado también la lucha por mejorar las condiciones de vida de las personas. Busquemos alguna alternativa en lo más inmediato: las próximas elecciones.

Empecemos por el partido Nuevas Ideas, cuyos precandidatos para las elecciones de alcaldes y diputados han proliferado como plaga

en plena pandemia. Este partido, que se presenta a sí mismo como diferente a los tradicionales, ha demostrado ser la cloaca de encuentro para lo peor de ARENA, FMLN, CD, PCN y PDC. Ahí están reunidas todas aquellas personas que, por diversos motivos, no lograron conseguir o tener la oportunidad de optar a un cargo de elección con sus anteriores partidos.

Además de estos, se encuentran los oportunistas, quienes buscan conseguir algo y les da igual si el partido es de izquierda o de derecha o de centro, si es autoritario o democrático. Lo único que quieren es obtener una tajada del pastel.

Hemos visto cómo -de manera descarada- este partido hace campaña política con fondos públicos, aprovechando los programas de apoyo que se han generado a raíz de las emergencias. Tal parece que esto ha pasado desapercibida por las instituciones encargadas de regular la situación.

ARENA, el partido que representa a la extrema derecha en El Salvador, siguiendo su política clientelista, se ha sentado a negociar a puerta cerrada los regímenes de excepción y los endeudamientos con miembros del gabinete de Gobierno. Con esto han demostrado un servilismo ante los caprichos del presidente. Claro, hay un ala más complaciente que otra. Sin embargo, hasta la fecha, como partido, no han presentado ninguna oposición real y no hay motivos para serlo mientras los intereses de los grandes empresarios no se vean afectados. Ciertamente este partido está muy alejado de la defensa de los intereses de la mayoría de la gente y de la democracia.

Está también el FMLN que, si bien es el que más cara le ha plantado a los caprichos del presidente, su oposición sigue siendo tímida y ecléctica. El aparataje mediático del actual Gobierno, los constantes ataques por parte de Bukele, la debacle que ha venido teniendo electoralmente el partido de izquierda y sus 10 años de

administración del Gobierno sin mayores cambios en las condiciones de vida de la gente, lo condicionan a ir midiendo sus posturas para no ir perdiendo mayor simpatía en el electorado.

Hasta la fecha se conoce poco sobre sus propuestas para alcaldes y diputados para competir en los próximos comicios. Sin embargo, su militancia debe tener claro que no se debe promover la reelección de la vieja guardia, la cual sigue enquistada dentro de las argollas de poder internas del partido. Si ya de por sí el FMLN se ha ido convirtiendo cada vez menos en una alternativa, seguir por ese camino lo llevaría a su fin. Por el contrario, deben de promoverse liderazgos juveniles, con ideas frescas, fuera de las influencias de la dirigencia, pero firmes en sus ideales. Solo así algunos de sus candidatos serán considerados para ser electos.

Nuestro Tiempo, el partido que se presenta a sí mismo como una alternativa de oposición nueva, nace con una contradicción de propuestas ideológicas diametralmente opuestas, con figuras de la izquierda y la derecha. Parece ser un partido donde todos tienen a alguien a quien votar. Ubicados en el centro y con una perspectiva humanista, como dictan sus estatutos, colocan a la ciudadanía en el foco de toda su actividad. Tienen unos objetivos que se plantean progresistas a pesar de que uno de sus principales fundadores presentó en su momento una ley de privatización del agua.

Si bien la defensa de la democracia es actualmente una prioridad, es necesario también escuchar sus propuestas de carácter estructural para el país. De este partido hemos empezado a conocer a algunos de sus precandidatos y, sin duda, también el contexto de emergencia les ha ayudado con el inicio de su campaña.

En este entramado partidario tenemos a GANA, actual partido de Gobierno al que pertenece Bukele y que se ubica en como centro derecha. Hasta el momento se ha comportado fiel a los dictados del

presidente, apoyando a cabalidad su discurso. Acá no se puede esperar una oposición a las tendencias autoritarias de Bukele ni, mucho menos, un interés genuino en apoyar los Derechos Humanos o en mejorar las condiciones de vida de la gente.

Para finalizar, quiero agregar que, a falta de alternativas claras para las siguientes elecciones, es momento de que quienes nos sentimos inconformes y con gran desconcierto por no saber a quién votar empecemos a crear nuestras opciones.

Hago dos sugerencias. La primera es crear una alternativa que aglutine los intereses de la gran mayoría de las personas desposeídas, de mujeres, personas LGBTI, y otros sectores históricamente excluidos por este sistema. Es verdad que los tiempos para presentar propuestas de creación de partidos ya pasaron, pero debemos pensar más allá de la construcción de un instrumento político electoral y empezar por uno que haga resistencia e incidencia desde la calle.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y no participar del juego electoral nos puede terminar perjudicando más, por lo que mi segunda propuesta es que en las próximas elecciones salgamos a votar. Pero no hay que hacerlo por bandera, ya basta de esos votos a ciegas, de esos votos sin criterio. Usemos esta oportunidad valiosa que tenemos de votar por rostros y hasta de cruzar el voto; conozcamos a las y los candidatos, cuestionémoslos y hagamos que se comprometan.

Este ha sido y será un año difícil. Estamos en una pandemia a la que no se le ve fin y a las puertas de iniciar oficialmente la campaña electoral. Vaya haciéndose la idea de que las muertes, las ayudas y las obras serán utilizadas para lograr ganar su voto, lo cual es lamentable en el actual contexto de emergencia.

Pandemia, corrupción y Medio Ambiente

Daniel Girón

Si preguntamos la opinión de los lectores de cuál es el mayor obstáculo para la conservación de nuestros recursos, muchos dirían que es la contaminación por desechos sólidos, pero se sorprenderían si les digo que el verdadero obstáculo del medio ambiente es la corrupción.

Nos encontramos en un momento fundamental en la pandemia, y es que, de nuestras acciones y decisiones estratégicas, dependen de si aplanamos la curva o seguimos aumentando más las cantidades de contagios en nuestro país. En medio de este caos ocasionado por la pandemia y donde las decisiones en salud, economía y en materia ambiental tienden a tomarse de forma precipitada y urgente disfrazadas por una urgencia y excusa para salvar economías y vidas, son notablemente oportunidades perfectas para que la corrupción aflore.

No sería primera vez que a los salvadoreños nos roban en medio de una crisis de gran envergadura, pero ahora la población es más exigente con las cuentas, más analista y crítica de las acciones de cada uno de los funcionarios que trabajan para nosotros el pueblo. Los costos y sobrepagos en distintos materiales para combatir los efectos de la pandemia, suman día a día, aumentando cada vez las deudas internacionales que el país posee, costos que dejarán una huella marcada en nuestra historia económica, ya que como país tardaremos décadas en poder saldar.

El problema de trasfondo es que cuando por fin salgamos de esta pandemia, el país al estar desesperado por la atracción de inversionistas, no tendrá filtros eficientes ni mecanismos para buscar un desarrollo sustentable en materia ambiental, aceptando permisos ambientales por paquetazos, sin estudios de impacto ambiental rigurosos, con distintas

iniciativas y proyectos económicos que solo benefician verdaderamente a una minoría muy selecta.

Para un país tan vulnerable con un alto porcentaje de pobreza no apostar por la conservación de nuestros recursos naturales solo será una razón, para ponernos la soga en el cuello, ya que cada año los impactos del cambio climático son mayores, con ello es más evidente la crisis hídrica que nuestra región sufre, también es importante poner atención y acción a la conservación en zonas de recarga de nuestro principal río, El Lempa, de lo contrario las inundaciones serán parte de la normalidad anual.

Entre más invadamos e impacto generemos en nuestros bosques, provocaremos mayor estrés en nuestra flora y fauna, debilitándola y haciéndola propensa a que éstas se enfermen, lo que podría provocar otra zoonosis de impacto igual o peor a la que actualmente nos enfrentamos, sobre todo porque cierto porcentaje de nuestra población es conocida por comer gran cantidad de animales silvestres, acción que recurren normalmente personas de escasos recursos.

Este es el momento para que fortalezcamos nuestra legislación ambiental, que le demos a la materia ambiental la importancia que realmente posee, que nos involucremos en iniciativas ambientales y no solo con fines individualistas de lucro, sino que apostemos por iniciativas que busquen un cambio y desarrollo. La pandemia causada por el Covid-19 nos demuestra que necesitamos como sociedad cambiar nuestro modo de vida, el cual debe estar más conforme con los valores de conservación de nuestra biodiversidad, y de protección y cuidado a nuestros seres queridos.

Guanacaste: El turismo en cuarentena

Olivier García Murillo

La industria turística ha venido trabajando en los últimos años por la protección y mejoramiento de la actividad, en un entorno social, ambiental y económico, tal como se estipula en los *Objetivos de Desarrollo Sostenible de Las Naciones Unidas (ODS)*, los cuales son adoptados por la *Organización Mundial de Turismo (OMT)*, con el fin de profesionalizar la actividad turística con un énfasis sostenible y sustentable.

En el 2019, la *Organización Mundial del Turismo (OMT)* reportó un total de 1.500 millones de viajeros en todo el mundo, esta cifra equivale a un 3,8 % más de lo reportado en el 2018. Cifras alentadoras para los inversionistas en el gremio. Esto pone en evidencia que el crecimiento de la actividad turística ha estado en ascenso a nivel mundial, generando oportunidades de crecimiento económico y desarrollo de nuevos emprendimientos.

Pero, ¿cómo se verá el turismo a nivel mundial afectado con el nuevo SARS-Cov2 o mejor conocido COVID-19? Indiscutiblemente el turismo sufrirá una baja en sus operaciones, disminuyendo hasta un 3 % el turismo global desde el momento que se declara pandemia el COVID-19, esto según los primeros datos emitidos por la *Organización Mundial del Turismo (OMT)*. Es ahí donde pone el foco la OMT, en el momento que se supere la pandemia, y es para ese momento donde se pide todo el apoyo por parte de las administraciones nacionales e internacionales con el fin de dinamizar la actividad turística.

El centro de Investigación y Competitividad Turística de la *Universidad Anahuac (CICOTUR)* declara que la pandemia de la COVID-19 puede provocar la caída entre un 3 % a 5 % del producto interno bruto (PIB) en los destinos turísticos del mundo, lo cual se estipula una afectación económica negativa que se prolongue hasta

principios del 2021, esto según la naturaleza de cada destino turístico. En total, se pronostica una pérdida de US\$22.000 millones correspondientes a los turistas chinos que están dejando de viajar según datos de la presidenta del *Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)*. Por otro lado, *Oxford Economics* apunta que si la crisis dura tanto como la del SARS de 2003, esa cifra puede elevarse a un total de US\$73.000 millones en divisas por concepto de turismo.

¿Está el turismo preparado para afrontar una nueva crisis económica mundial? El turismo ha enfrentado altos y bajos, desde los primeros registros de la actividad con Thomas Cook en 1841, hasta en la actualidad, se han visto diversas caídas de la industria, la más reciente y con un declive pronunciado fue la del 2011 con el ataque terrorista de las torres gemelas, lo cual produjo pérdidas considerables para el turismo, esto debido al temor del viajero por los ataques terroristas. Este caso sirve como ejemplo de la capacidad que tiene la industria turística de resurgir ante una crisis desde una óptica económica.

Gracias a los esfuerzos realizados por la *Organización Mundial del Turismo (OMT)* y organizaciones con fines turísticos, el turismo será una de las principales industrias en aflorar su estabilización económica y generación de oportunidades para la continuidad del desarrollo económico y social.

¿Cuáles empresas turísticas son más susceptibles a la crisis? Las aerolíneas son las empresas que sufrirán los peores estragos y se enfrentarán a mayores retos dentro de la industria turística, esto revelado por estudios de *CICOTUR 2020*, ante dicho contexto las aerolíneas han decidido tomar medidas de contención urgentes para mitigar el impacto de la COVID-19, una de ellas es la flexibilidad de fechas con sus clientes; es decir, les permite a sus usuarios cambiar las fechas de viaje sin ningún costo adicional. Otras aerolíneas han

generado ofertas con planes vacacionales con el fin de motivar al viajero con precios llamativos.

Los micro empresarios turísticos y sus emprendimientos son los subsiguientes que tomarán del trago amargo del atildamiento que contrae una pandemia al mundo económico del turismo, ya que estos dependen de la afluencia de turistas, turistas que han dejado de viajar por cierres de fronteras y cancelación de rutas aéreas.

¿Está Costa Rica preparada para afrontar la crisis? ¿Continuará siendo un país líder en la actividad turística? ¿Costa Rica podrá retomar la meta de 3,94 millones de visitantes para el 2021? Los destinos turísticos en el país se han sometido a una cuarentena obligatoria, con el fin de minimizar el impacto social y económico que puede contraer la pandemia del SARS-CoV2 en territorio nacional, esto pone a prueba la elasticidad de la industria turística y de las medidas que han ido adoptando instituciones como el *Instituto Costarricense de Turismo (ICT)* y la *Cámara Nacional de Turismo (CANATUR)* a lo largo de los años.

Medidas que tienen como objetivo aumentar la visitación turística, mediante promoción del producto turístico en el extranjero, como la que se realiza cada año en la *Feria Internacional de Turismo (FITUR)*, feria en la cual Costa Rica ha sido galardonada en la última edición 2020 al “Mejor Stand”, esto y muchas más hazañas que realiza el gobierno para promocionar el país a nivel internacional.

Costa Rica tiene buenas bases para afrontar una crisis como la de la COVID-19, cuenta con un turismo que se ha ido fortaleciendo y posicionando ante los principales destinos turísticos del mundo, con una marca país llamativa e indiscutiblemente única en la cual se destaca la esencia del ser costarricense y la conservación de sus recursos culturales y naturales, *ESENCIAL COSTA RICA*.

Costa Rica continuará siendo un país líder en la actividad turística, pero en consecuencia al impacto del nuevo virus se demorará un poco más de lo estipulado para llegar a cifras históricas como las que se contemplan dentro del *Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica* (2017-2021), con una estimación de 3,94 millones de turistas para el 2021, con un crecimiento anual del 6 % tomándose como base desde el 2016. El 2021 será un año clave para que de forma sinérgica las instituciones del Estado a nivel nacional y regional generen mesas de trabajo para la continuidad del desarrollo turístico y con ello apalancar la economía nacional.

¿Cómo se verá afectada Guanacaste sin turismo? ¿Qué esperar con el alto desempleo en Guanacaste? ¿Tendremos turistas de nuevo? ¿Podré seguir con mi emprendimiento turístico? Estas son algunas de las incógnitas que se formulan las personas Guanacastecas en torno a la COVID-19.

Guanacaste es una de las provincias con mayor desarrollo turístico en Costa Rica, con polos sumamente atractivos, tal como es el “Golfo de Papagayo”, uno de los generadores de fuente de empleo en la provincia. Otra fortaleza de Guanacaste es que cuenta con el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en donde se reportó el pasado mes de marzo del 2019, una cifra récord de 166 mil 240 turistas, cifras que no se daban desde el 2012, según informó *CORIPORT* (empresa encargada de administrar el aeropuerto).

El alto índice de desempleo es un tema que se aqueja en todo el territorio nacional, problemática que es arrastrada desde administraciones pasadas, el 2019 cerró con un total del 12,4 % de desempleo según el *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)*. Esto sumerge la tranquilidad de los Guanacastecos, al abismo de incertidumbre en referencia a la estabilidad económica de sus familias,

siendo una región que ha visto su desarrollo en las faldas del turismo, permitiendo aflorar la situación económica del país y la provincia.

Desde que se iniciaron los planes de contingencia en el país, Guanacaste reportó una baja en sus operaciones hoteleras y turísticas en general, hasta el momento la cifra asciende a más de mil colaboradores despedidos por el cierre de fronteras y la poca demanda de servicios turísticos.

Los emprendedores turísticos han sido uno de los más afectados, ya que ellos dependen de la afluencia de turistas a grandes complejos hoteleros en la zona o visitación de destinos turísticos ya posicionados en Guanacaste, tales como: Parque Nacional Rincón de La Vieja, Tamarindo, Playa Samara, Parque Nacional Marino Las Baulas, Llanos del Corte, etc.

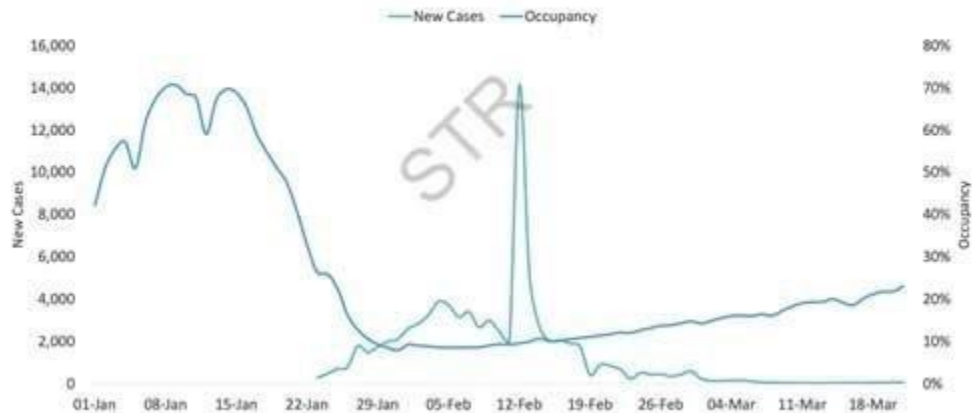
Estos son algunos de los principales destinos que proveen a los pequeños emprendedores de turistas y de esta manera se sostienen económicamente en el tiempo, pero ¿qué pasará ahora?, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), en conjunto a las universidades públicas del Estado como la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) han venido trabajando en la provincia de forma sinérgica para unificar los esfuerzos en materia de desarrollo turístico rural comunitario, mediante las estrategias empleadas por ambas instituciones se podrá mitigar el impacto que contrae la COVID-19 a la provincia, con talleres y charlas de mercadeo, finanzas y estrategias administrativas con un enfoque turístico, de esta forma podrán defender sus emprendimientos y crear proyectos apegados a la realidad nacional.

Los primeros datos de aliento para la industria nacen a partir de lo que deponen *Tourism Industry Data and Research (SRT)*, en la siguiente gráfica publicada el 26 de marzo del 2020, en donde se evidencia la movilización del turismo en el epicentro del virus COVID-19, el país asiático (China), reporta cifras positivas en la ocupación hotelera, lo cual

da confianza al sector turismo, en referencia a la incertidumbre que se tenía con respecto al comportamiento del turismo post- COVID-19.

Are there green shoots of recovery in China?

China new COVID-19 cases vs Mainland China Daily Occupancy



Source: STR, 2022 © Global Analysis Information, Inc. 11

Esto demuestra el dinamismo del turismo, y que con el tiempo se ha ido adquiriendo experiencia, que a pesar de la cancelación de eventos masivos de relevancia esperados cada año como es *Mobile World Congress* en Barcelona o el *ITB* en Berlín se ha podido ir regenerando la movilización de turistas en países afectados por el virus, tal es el caso de China. Con el tiempo, estos eventos que generan visitación e inversión de turismo (eventos antes mencionados), se irán reformulando para siguientes ediciones y con medidas sanitarias adecuadas.

La industria turística es de las pocas que tiene una facilidad de volver a su estado habitual luego de una crisis, por su naturaleza de necesidad al ocio y negocios, en donde a partir de campañas de viajes se podrá retomar la confianza del turista, campañas lideradas por los gobiernos de cada país e información verificada que otorga la Organización Mundial del Turismo (OMT), al empresario turístico y al viajero.

A los futuros profesionales en turismo: ver este virus como una escuela de enseñanza en donde se puedan aportar ideas frescas e

innovadoras, para la protección y posteridad de la “Industria sin Chimeneas”, la cual es responsable de alimentar a este mundo de experiencias únicas y bellas, intensificando el sentir de cada uno de los viajeros, dándole un respiro al alma y corazón.

Referencias

COVID-19 y estudios en el extranjero

Gabriel Chavarría Peccorini

El presente texto pretende dejar plasmada una breve reflexión sobre la situación del COVID-19, como becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Gobierno de México, con el objetivo de contribuir en la recopilación de experiencias vividas por aquellas personas que pertenecen a centros de investigación y educación superior en América Latina. Para ello se opta por escribir un documento basado en la Historia Oral, entendida según la obra colectiva *Entrevistar ¿para qué? Múltiples escuchas desde diversos cuadrantes. Coordinada por Graciela de Garay Arellano y Jorge Eduardo Aceves Lozano*, como un esfuerzo para registrar sentires, percepciones, acciones y estructuras de organización de quienes vivieron eventos durante una coyuntura.

De tal forma, el documento estructura una narración a partir de la contextualización del trabajo de campo de la investigación *Gestión Integral del Recurso Hídrico, un enfoque para el abordaje del conflicto por el vertido de aguas mieles del café en la Cuenca Alta del Río Lempa*, para obtener el grado de Maestro en Geografía Humana, por el Centro de Estudios en Geografía Humana del El Colegio de Michoacán A.C (Colmich), seguido de los retos y oportunidades que el COVID-19 ha implicado, cerrando con reflexiones/recomendaciones tanto para las personas que organizan programas de educación superior como para quienes aspiran cursarlos por medio de becas para extranjeros.

Para contextualizar el trabajo de la investigación mencionada, es necesario explicar de manera rápida el funcionamiento de la maestría en Geografía Humana del Colmich, que se desarrolla por medio de líneas

de Generación, Innovación y Aplicación del Conocimiento, lo que implica que cada estudiante para poder ingresar en ella debe postularse por medio de una propuesta de investigación donde el conocimiento a producir requiera de métodos y técnicas que articulen los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con la capacidad de analizar las actividades humanas en un espacio determinado, por lo tanto para el investigador o investigadora es fundamental poderse desplazar a su lugar de estudio, que para este caso es la Cuenca Alta del Río Lempa (CARL), lo que requería movilizarse del Estado de Michoacán, México a la Región del Trifinio en Centroamérica.

Previo al trabajo de campo programado de octubre del año 2019 al mes abril del año 2020, se realizó trabajo de campo exploratorio entre los meses de marzo y abril del 2019, en él se comprueba la viabilidad de la investigación propuesta, la o el maestrante-investigador conoce el terreno de trabajo, analiza si las condiciones son aptas para ejecutar el diseño de sus técnicas de investigación y se familiariza con el paisaje al que dependiendo del tipo de observación a realizar, se podría llegar a convertir es su lugar de residencia mientras dure la investigación.

Es así, que al finalizar mi trabajo de campo exploratorio y conocer el trabajo de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), organización de localidades fronterizas de la Región del Trifinio, se acordó entre ellos y el Colmich realizar durante el periodo de trabajo de campo, un voluntariado en todas las actividades de la mancomunidad relacionadas a la protección de la CARL, esto con el fin de obtener información de primera mano sobre lo que significa defender al río Lempa con la participación de actores organizados de manera trinacional. Fue así que decidí mudarme al municipio de Siguapa en el departamento de Ocotepeque en Honduras, que se encuentra en el

centro de la parte alta del río Lempa, para ejecutar Observación Participante, brindándome la oportunidad de vivir y trabajar con dicha organización transfronteriza.

Las experiencias acumuladas trascendieron de aquellas vinculadas a la gobernanza hídrica o a los esfuerzos por impulsar una Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) en la CARL, conociendo aspectos de la Región del Trifinio como su alto potencial para promover el discurso integracionista expresado desde varios de sus habitantes, y otros que mostraban los graves problemas sociales, políticos y económicos por los que pasan los países de la región, el Caribe y África, por medio de las vivencias de las personas que conforman a las Caravanas Migrantes que solían cruzar estos puntos fronterizos. Todo este trabajo requería moverse varias veces al día entre Guatemala, Honduras y El Salvador, vinculando así a cuatro países en la investigación, el primero de ellos México, de donde obtenía mi formación en Geografía Humana y los recursos para para mi estadía en campo, y los tres países que comparten al Lempa.

Sin embargo, la agenda de trabajo planificada y desarrollada por cerca de un año se vio interrumpida el 13 de marzo del 2020, cuando las últimas actividades programadas con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se vieron obligadas a ser suspendidas hasta nuevo aviso por una situación de pandemia que se creía en aquel momento duraría entre dos y tres semanas, casi seis meses después y a dos semanas de entregar la primera versión de la tesis, las actividades acordadas no se han podido reprogramar, a pesar de ello se logró recolectar la suficiente información ya que el trabajo de campo se

encontraba finalizado y se habían realizado más entrevistas de las consideradas en el protocolo de investigación.

Toda esta vivencia como investigador y becario no es única, pero si cuenta con sus propias peculiaridades dadas principalmente por las características políticas y geográficas de la región donde se realizó la mayoría de recolección de información, al articular tres países centroamericanos y sumarle las condiciones que trajeron las medidas tomadas para enfrentar la pandemia por parte de cada gobierno. Producto de ello surgen algunas reflexiones generales, en mi caso varado en mi propio país, pues mis ingresos, documentos de identidad y vivienda estaban planificados para estar en México y hasta finales del 2020, por lo tanto el cambio de planes y su reajuste durante el COVID-19 ha pasado por distintas situaciones como perder mi residencia mexicana a mediados julio y esperar que las autoridades de ese país no cortaran mis ingresos, contar con el apoyo de viajar en vuelos humanitarios por parte de la Embajada de México en El Salvador, lo que el Colmich recomendó no hacer para no exponer a sus estudiantes extranjeros a tener que ingresar en aeropuertos y exponerse a la enfermedad, hasta enfrentarme con un intento fraudulento de ingreso a mi cuenta de banco mexicano lo que genero que mi tarjeta y única fuente de ingresos se bloqueara, teniendo que buscar alternativas para utilizar los recursos que mes a mes se me han asignado. Por todo ello vale la pena mencionar de manera muy general los retos y oportunidades que el COVID-19 ha significado para la investigación, pudiendo no coincidir del todo con otros casos de estudiantes que realzan sus estudios e investigaciones en el extranjero.

Entre los retos como ya se ha mencionado, esta que las instituciones de migración así como las que financian los programas de

becas logren actuar sin que las y los estudiantes no se encuentren con inconvenientes en la coyuntura actual, en el caso del Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno de México y el CONACYT han logrado apoyar a sus beneficiarios de excelente manera, sin embargo, no se puede descartar que durante los primeros meses de la pandemia ante la falta de claridad y coordinación entre los Estados latinoamericanos fue una preocupación de suma importancia para la finalización de las investigaciones. Otro de los retos ha sido la de mantener las relaciones de apoyo académico entre países, por ejemplo, durante el 40 aniversario del Colmich el 15 de marzo del año 2019 el presidente de la institución, el Dr. José Antonio Serrano Ortega, expresó como uno de los principales intereses del colegio, el apoyo a los países centroamericanos para el desarrollo de la ciencia en el marco de abordar los problemas que llevan a su población a tener que migrar bajo condiciones de alto riesgo, no obstante la movilización de estudiantes centroamericanos se ha visto limitada por las acciones tomadas por cada país para enfrentar pandemia, lo que podría disminuir sus postulaciones para el año 2020.

Con respecto a las oportunidades que son de carácter personal, se puede mencionar el adelanto de iniciativas para impulsar posgrados en El Salvador para la formación de geógrafos y geógrafas, el restablecimiento de vínculos laborales interrumpidos por la estadía fuera del país, la socialización adelantada de los conocimientos obtenidos en México, y el continuar con planes personales pausados mientras no me encontrara en El Salvador.

Por todo ello vale la pena hacer reflexiones sobre la pandemia con respecto a la organización de posgrados y en especial para las personas que planean realizar estos estudios fuera de su país de origen por medio de becas, ya que en la medida que el transporte de personas y mercadería

se acelera a nivel mundial y los ecosistemas mantienen una tendencia al deterioro, no se descarta la posibilidad de que la humanidad se vuelva a enfrentar a pandemias que obliguen a los países a paralizar sus actividades y cerrar fronteras. En consecuencia, las personas encargadas de desarrollar posgrados deberán mejorar las actividades académicas no presenciales, con el fin de poder responder a las desventajas que esto puede implicar como el acceso a servicios de internet de calidad, diseñar programas que le permitan al estudiante tener menor dependencia del contenido de la clase y mayor capacidad de toma de decisión sobre lo que quiere estudiar e investigar, y sobre todo se debe repensar el funcionamiento de los centros académicos frente a la globalización de los problemas ambientales y las crisis sanitarias que se deben afrontar a escala mundial.

En cuanto los becarios en programas para investigadores e investigadoras, deben diseñar investigaciones donde el contacto con fuentes primarias y secundarias de información se puedan realizar por más de un medio, sea presencial o no, planificar de manera realista los períodos en campo, de ser posible trabajar con márgenes de tiempo para reajuste de actividades, asegurarse con el máximo detalle los tiempos de duración de los programas de posgrado y de becas, pues no necesariamente coinciden, y ser conscientes que en los programas de estudio que requieren que él o la estudiante salga de su país por períodos superiores a un año, situaciones como las pandemias pueden ocurrir por lo que deben reflexionar si se cuenta con la capacidad y los apoyos necesarios para lidiar con estas situaciones.

Como reflexión final, así como los conflictos por el agua no son necesariamente algo negativo si se les maneja adecuadamente ya que pueden traer consigo la necesidad de innovación en su gestión,

alternativas de desarrollo e integración de nuevos actores y enfoques, la pandemia de COVID-19 con respecto a los programas de becas y programas de estudios en el extranjero, requieren para su misma sostenibilidad analizar temas como la ampliación del acceso a educación superior de calidad y la reformulación de los planes de estudio considerando las diversas condiciones sociales, tecnológicas, económicas y políticas de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Geografía Humana y su aporte científico ante la pandemia. Ideas desde el contexto salvadoreño

Ariel Alexander Quintanilla Magaña

Hay que decirlo: nadie esperaba que este año 2020 fuera tan escabroso. El impacto a nivel mundial por el virus SARS-Cov-2 se contabiliza alrededor de 27 millones de infectados, con una cifra de letalidad arriba de los 889,682 (una tasa de 3.27%) hasta el 6 de septiembre del presente año (John Hopkins University, 2020). Esto se refleja en las cifras presentadas por el gobierno salvadoreño 26,413 casos y 764 personas fallecidas.

La pandemia de la COVID-19 evidenció una serie de retos para los científicos, profesionales de la salud, epidemiólogos, etc.; de igual manera sacó a la luz una serie de desigualdades que pasan por alto tanto gobiernos como académicos de las ciencias sociales, planificadores y tomadores de decisiones en distintas escalas de las relaciones humanas.

El caso salvadoreño no escapó de estos conflictos. Desde marzo de este año el país ha tomado medidas drásticas como forma de contrarrestar el impacto que podría provocar la enfermedad. Generalmente todas estas acciones están centradas en evitar tanto la libre movilidad de las personas, el ingreso de extranjeros, y el cese de actividades comerciales no indispensables. Desde el órgano ejecutivo se establecieron medidas desde el 11 de marzo contemplando el cierre de fronteras terrestres, del aeropuerto como primeras medidas (Comunicado Oficial, 2020). Esto fue apoyado jurídicamente por la declaración de Estado de Excepción por parte de la Asamblea Legislativa a partir del 14 de marzo (Escobar, 2020).

Han pasado seis meses desde el primer contagio en El Salvador. En estos días transcurridos se observan una serie de propuestas gubernamentales, universitarias, de ONG y alcaldías sobre cómo poder evitar el aumento de contagios. La misma presentación de los datos por parte del gobierno salvadoreño han logrado establecer a escala municipal un mapa de riesgos ante el contagio (Gobierno de El Salvador, 2020), generalmente estos mapas integran el factor de densidad poblacional y no tanto la demarcación de redes de interacción poblacional en relación cantonal, municipal, intermunicipal.

La academia salvadoreña ha logrado entablar alianzas con municipalidades, tal es el caso de la creación de los Cercos Epidemiológicos Inteligentes entre el Colegio Médico, la Universidad Francisco Gavidia y alcaldías como San José Villanueva (Picardo y Montes, 2020). Las principales líneas de trabajo llevan hacia una rápida identificación de casos, geolocalización, aislamiento y búsqueda de otros casos a través de una red de contactos de la persona afectada.

Tanto en las acciones que ha tomado el gobierno central, como las alianzas y medidas desde los gobiernos municipales, todos ellos han hecho el uso (consciente o no) de entablar un razonamiento espacial para la contención del impacto de la pandemia.

La geografía humana, como ciencia encargada de comprender las distintas relaciones espaciales y la producción generada por la sociedad (Bailly, Salazar y Núñez, 2018), ha ocupado un papel fundamental ante la coyuntura de pandemia. Desde entender la formación de los nexos epidemiológicos por una serie de factores sociales tales como itinerarios de viaje de personas que visitaron la provincia de Hubei (Jin et al., 2020), interacciones sociales observadas desde los niveles de desigualdad en países latinoamericanos (Irrázaval, 2020), así como el desarrollo de

plataformas de monitoreo y proyección utilizando recursos cartográficos y de índole cuantitativa descriptiva (Rubín, 2020).

No obstante, se considera que estos aportes, de total importancia para entender cómo está desarrollándose la coyuntura, resulta insuficiente si no se toma en cuenta variables sociales que reproducen patrones en el espacio. La más reconocida es la movilidad del lugar de vivienda hacia el área de trabajo, que, en El Salvador, dado su extensión y concentración de actividades en las principales urbes (San Salvador, San Miguel, Santa Tecla, Santa Ana), tuvo su principal corte en las medidas de restricción de movilidad hacia otros municipios y el transporte público (Decreto ejecutivo 22, 2020). El corte de ciertas actividades implicó la pérdida de empleos, calculado en 65,000 a nivel nacional (Pastrán, 2020).

La existencia de modelos sobre el desplazamiento del virus, del riesgo ante el contagio y el monitoreo es fundamental. Sin embargo, durante este último trimestre del año, así como el que viene, será importante reestructurar en la academia, hacia un pensamiento espacial sobre las consecuencias que suscitan no solo en el plano de la movilidad internacional, sino también en las redes de movilidad del trabajo, reconstrucción de actividades sociales e implicancias alrededor de los patrones geográficos de concentración de actividades económicas.

Lois (2020) expone que la desestructuración de redes y nodos para el caso español, expresados en el confinamiento, pone en tela de juicio tanto los modelos de desarrollo económico como de expectativas de vida. En El Salvador se hace necesario integrar otras variables: riesgo ante escenarios extremos ante fenómenos naturales (tormenta Amanda en junio), problemas sociales mediante el nulo control estatal en ciertos

barrios y colonias dominadas por pandillas, y el urgente cambio hacia un nuevo modelo de transporte colectivo.

Cada uno de los escenarios planteados se ha mostrado en estos seis meses de contingencia. Esto también conllevará a otros signos ya establecidos por las relaciones sociales y económicas del país, marcado por una nueva y acelerada forma de intervención en el espacio por la visión de desarrollo que se encuentra en la cotidianidad salvadoreña.

Esto conlleva a que la academia cuestione y participe sobre estos modelos establecidos, tanto en la administración de la salud, como en las relaciones socioeconómicas que se construyen día a día en el país. El ejemplo de los Cercos Epidemiológicos Inteligentes es una muestra de un trabajo a nivel de escala local que tiene impacto en la red en la que se integran los municipios que lo están aplicando.

Es importante considerar que estas relaciones hoy se van cerrando cada día más. El brote del COVID-19 abrió la posibilidad de integrar nuevos espacios a este análisis para el caso salvadoreño, dígase el hogar, la colonia, la comunidad, el cantón. Amben (2020) expone para el caso italiano, que el cierre de todos los establecimientos y el estado de excepción mostrado a través de la condicionante de seguridad se convertirá en algo permanente, esto derivado de la porosidad a que lo local se ha visto expuesta.

La geografía humana tiene un escenario en lo que lo local puede volver a revitalizarse o aplacarse ante lo global (Gutiérrez, 2020). Esto puede encontrarse en las medidas de apoyo, cooperación o restricción que se pueden encontrar en estas otras escalas que han sido olvidadas o condicionadas ante lo nacional o global. En el caso salvadoreño se expresa a través de que es el municipio el eslabón más cercano a la población al momento de análisis cuando se quiere entender el impacto de la

pandemia en el país desde el gobierno central. Hoy más que nunca es importante rescatar las dinámicas locales ante escenarios de segregación social y espacial que se muestran en el país.

Referencias

Agamben, Giorgio (2020) «Aclaraciones». En COMUNIZAR, edición digital. Recuperado: <http://comunizar.com.ar/giorgio-agamben-aclaraciones/?fbclid=IwAR0NyywHFqJ6qerqx9lnwh6ksuDxptlY6b5Hc7zGkTviy1jpDI69qJE2zok>

Bailly, Antoine, Salazar, Alejandro, Núñez, Andrés. (2018) Viaje por la geografía. Una geografía para el mundo, una geografía para todo el mundo. Santiago. RIL Editores. 158 pp.

Escobar, Mayra (2020) Emiten ley de restricción temporal de algunos derechos sin afectar la libertad de expresión y el derecho de asociación. Recuperado de página web: <https://www.asamblea.gob.sv/node/10180>

Gobierno de El Salvador (2020) Decreto Ejecutivo 22: habilitaciones previstas en el art. 8 de la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. San Salvador.

Gutiérrez Hernández, Oliver (2020) La geografía frente a la crisis global COVID-19: genealogía del colapso. En Reflexiones sobre la crisis COVID-19. Asociación Española de Geografía.

Irarrazaval, Felipe (2020) La no tan loca geografía de la Covid-19 en Chile. En Journal of Latin American Geography, Volume 19, Number 3, July 2020, pp.248-252

Jin L, et al. Distribución temporal, geográfica y por población de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero del 2020, en China. Rev. Clin Esp. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.04.001>

John Hopkins University (2020) COVID-19 Dashboard by Center for Systems Science and Engineering. Recuperado de la página web: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>

Lois González, Rubén (2020). Geografía (periodística) de la crisis del coronavirus. Asociación de Geógrafos Españoles.

Picardo O, Montes A. (2020) Cercos Epidemiológicos Inteligentes: Un enfoque educativo, informacional y tecnológico. El Salvador: UFG Editores. 132 pp.

Presidencia de la República (2020) El Salvador ante la pandemia del COVID19. San Salvador, recuperado de: <https://covid19.gob.sv/el-salvador-ante-la-pandemia-del-covid19/>

Rubín, Tonatiúh (2020) ¿Cómo la geografía ayuda a controlar el Covid? En Luces del siglo, edición digital. Recuperado de: <https://lucsdelsiglo.com/2020/07/26/como-la-geografia-ayuda-a-controlar-el-covid-revista-r/>

La historia y los problemas del presente: coordenadas para el debate

Carlos Gregorio López Bernal

Aparentemente la historia es una disciplina centrada en el pasado, o como dicen algunos: “pasado pasado”. Y ciertamente, según su especialidad e intereses, los historiadores se alejan conscientemente del presente, buscando conocimientos y explicaciones sobre los procesos sociales de antaño. Sin embargo, un historiador desvinculado del presente no tiene mucho sentido. Vivimos hoy en día y nuestro conocimiento debiera tener alguna utilidad en el presente. Sin ser excesivamente pretenciosos, podríamos decir que nuestro trabajo puede dar luces para entender los problemas actuales.

Muy conscientemente utilizo la palabra problema. Para que la historia deje de ser arcón de curiosidades pretéritas o simple narrativa sobre hechos y personajes, debe trabajar consistentemente sobre problemas, entendidos como cualquier situación que reta a un individuo o grupo social y exige una solución o respuesta. El devenir de la humanidad ha sido resolver, e incluso crear, problemas. Toda sociedad, independientemente del tiempo y el espacio en el que viva, enfrenta problemas; para resolverlos se organiza de alguna manera. La forma más moderna de organización política es el Estado.

Dominar un territorio, organizar la producción, comerciar, gobernar, enfrentar una peste, hacer la guerra e incluso divertirse son situaciones que se constituyen en problemas a resolver. Estas son situaciones recurrentes, lo que cambia son los recursos disponibles para enfrentarlos, ya sean materiales, tecnológicos o de pensamiento. Si los historiadores trabajan con problemas, es plausible pensar que tengan algo que decir sobre las dificultades del presente, lo cual pueden hacer por dos vías: la primera, mediante investigaciones académicas sobre

determinados campos, por ejemplo, economía, política, medio ambiente, etcétera. Esto es lo que normalmente se espera que hagamos y generalmente no genera controversias, y si las hay se reducen a debates al interior de la comunidad académica. La segunda es dando una “opinión calificada” sobre situaciones problemáticas cotidianas; hay que decir que en nuestro medio el gremio no es muy dado a hacerlo aunque debiera. Quizá por eso, cuando sucede, genera suspicacias cuando no descalificaciones. Sobre todo en un país como este, en el que cualquier punto de vista pasa por el tamiz de las filias político-ideológicas.

Las reacciones ante los pronunciamientos de los historiadores están condicionadas por el qué dicen y el cómo lo dicen. En el primer caso, si tratan temas alejados en el tiempo y bajo formatos convencionales (libros o artículos que generalmente tienen un público restringido), lo más seguro es que no trasciendan más allá de la comunidad académica. A menos que esos temas tengan evidentes repercusiones en el presente, como aconteció con los trabajos de David Browning y Rafael Menjívar sobre la tenencia de la tierra. Cuando se publicaron, el problema agrario era una de las causas que tenía al país al borde de la guerra civil. En todo caso, este tipo de trabajos tienen una estructura que les permite formular y demostrar tesis, sostenidas por abundante evidencia empírica, que los protege de la crítica no calificada. Por supuesto que generan debate en el ámbito académico, pero eso se da por descontando. Es más, un trabajo académico que no genere algún tipo de controversia no deja de ser sospechoso.

En el segundo caso, puede suceder que se traten problemas más ligados al presente y bajo formatos menos convencionales (artículos de opinión o entrevistas) que llegan a un público más amplio y no siempre poseedor de los marcos de referencia necesarios para su mejor comprensión. A diferencia de cuando se escriben libros o artículos, acá no se tiene mucho espacio para desarrollar argumentos; mucho menos para hacer sesudas

demostraciones. En este caso, la capacidad de síntesis es muy importante. Es obvio que aquí hay más riesgo de recibir juicios apresurados y superficiales.

Esta última modalidad permite llegar a más personas, pero obviamente tiene sus desventajas. Asumirla es una decisión personal que cada uno debe tomar. Personalmente considero que es parte del trabajo de divulgación que debemos hacer, pero también es una responsabilidad ciudadana, sobre todo cuando se trata de discutir temas que tienen o pueden tener repercusiones en la sociedad. Ojalá siempre sea una opinión calificada; es decir que se fundamente en el conocimiento histórico, o al menos en el buen juicio.

Es necesario reconocer que en tanto individuos no estamos exentos de filias o antipatías de diverso tipo. Lo ideal sería que estas no permearan nuestros análisis, pero esto no siempre es posible. En todo caso, lo más importante debiera ser la calidad de los argumentos. Sobre esa base es posible una discusión interesante y fructífera, que nos permita conocer más y entender mejor, aunque no necesariamente haya un acuerdo. Bajo tales premisas, los historiadores no debiéramos rehuir al debate, sino promoverlo.

Lista de autores

Ariel Alexander Quintanilla Magaña, sociólogo y geógrafo humano.

Carlos Calderón, historiador e investigador.

Carlos Gregorio López Bernal, historiador, investigador y profesor universitario.

Carlos Hernández, profesor e investigador universitario.

Cristina Hernández, historiadora e investigadora ambiental.

Daniel Girón, biólogo e investigador ambiental.

Gabriel Chavarría Peccorini, sociólogo y geógrafo humano.

Gonzalo Montano, sociólogo, activista LGBTIQ y defensor de los derechos humanos.

José Alfredo Ramírez Fuentes, historiador e investigador.

José Carlos Cardoza, historiador, escritor e investigador.

Lucio Reyes, abogado y defensor de los derechos humanos.

Luis Alfonso Escobar, historiador e investigador ambiental.
Luis Armando González, profesor e investigador universitario.
Olivier García Murillo, gestor de proyectos turísticos sostenibles.
Oscar González Márquez, periodista e investigador ambiental.
Rommel Rodríguez, economista e investigador.
Shaiene Carvalho, historiadora e investigadora.